HISTORIA
BREVIS






LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA





De la Segunda República a la dictadura de Franco




SANTOS JULIÁ



Shackleton books








HISTORIA
BREVIS

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA





De la Segunda República a la dictadura de Franco

SANTOS JULIÁ



Shackleton books

La guerra civil española

La guerra civil española

De la Segunda República a la dictadura de Franco

Santos Julià

Shackleton

— books —

La guerra civil española

Realización editorial: Bonalletra Alcompas, S.L.

Diseño de cubierta: Pau Taverna

Diseño de tripa y maquetación: Kira Riera

Composición ebook: Víctor Sabaté (Iglú de libros)

p.]/Wikimedia Commons, b: Walter Stoneman, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, código digital ggbain.35233 [d. p.]; p. 65, a: Bundesarchiv, Bild 183-P0214-513 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de]/Wikimedia Commons; p. 72, Mikhail Koltsov (Trabajo propio) [d. p.]/ Wikimedia Commons; p. 85, estelnegre.org; p. 94, Pascual zarín [CC BY-SA 3.0]/Wikimedia Commons; p. 98: Everett Historial/Shutterstock; p. 101, tichr/Shutterstock; p. 105, Everett Historical/Shutterstock; 145 y 147, Everett Historical/Shutterstock; p. 128, Time Life Pictures/ Mansell/The LIFE Picture Collection/Getty Images; p. 137, Bettmann/Getty Images; p. 142, Fondo Marín. Pascual Marín. Kutxa Fototeka (dueño) (Gure Gipuzkoa) [CC BY-SA 4.0]/Wikimedia Commons; p. 149, Mario Modesto Mata (Trabajo propio) [CC BY-SA 4.0]/Wikimedia Commons.

ISBN: 978-84-17822-61-3

Introducción

Una guerra civil de alcance internacional

«La Guerra Civil de 1936 a 1939, sin duda ninguna, es el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién sabe si el más decisivo de su historia», escribió Juan Benet cuando se cumplían cuarenta años de su comienzo. Y ahora, cuando han transcurrido otros cuarenta años, no cabe más que repetirlo suprimiendo sus cautelas: ya sabemos todos que lo fue, sin duda alguna. Guerras y revoluciones, hubo varias en España desde 1808: contra el invasor francés, pronto llamada de independencia; entre las facciones absolutistas y liberales, que han pasado a la historia con el nombre de carlistas; la guerra de Cuba, interminable y, a su fin, un desastre de contienda contra Estados Unidos en 1898. Y de desastre a catástrofe, la guerra de Marruecos, prólogo y motivo de la primera dictadura militar del siglo xx. Por lo demás, el recurso a la violencia fue habitual en las luchas políticas del siglo xix: decenas de algaradas, levantamientos e insurrecciones esmaltaron la historia política de España desde la revolución de los años treinta hasta la de 1868 y después.

Pero a pesar de las muchas guerras e insurrecciones, ninguna de ellas agota la explicación del siglo xix en España. El siglo xx, sin embargo, es radicalmente impensable sin la guerra civil. Y esto es así porque, a diferencia de las contiendas decimonónicas, que unas veces acabaron sin un claro vencedor y otras dieron lugar a paces y abrazos de diverso signo, la guerra civil de 1936 a 1939 logró plenamente el propósito de quienes la iniciaron tras una rebelión militar fracasada, pero no por ello sofocada: un vencedor que exterminó al perdedor y que no dejó espacio a una paz digna de este nombre.

Nuestra guerra civil —como fue llamada durante varias décadas— quebró un proceso de rápido cambio social y redujo la complejidad y múltiple fragmentación de la sociedad española a dos bandos enfrentados a muerte, con el resultado de que el vencedor nunca accedió a ningún tipo de reconciliación que

posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los vencidos. Desde el término de la guerra y hasta el fin de la dictadura que fue su inmediata secuela, España vivió las consecuencias de la guerra, que aun habría de extender su sombra durante todo el período de transición a la democracia.

Alcanzó tanta magnitud aquel crimen de lesa patria y sus efectos fueron tan perdurables que en ocasiones se buscan para la guerra civil causas metahistóricas, como situar su origen en el ser o carácter de los españoles, condenados desde el principio de los tiempos a enfrentamientos violentos. De este modo, nadie aparece como responsable y las culpas por las destrucciones y los crímenes causados quedan repartidas o no son de nadie, sino de una fatalidad que empujaría a los españoles desde siempre a matarse mutuamente. Es preciso, pues, al adentrarnos en la guerra civil española de 1936 a 1939, volver a recordar que no fue la culminación de una historia de mil años, ni siquiera de cien, sino su brusca quiebra, un corte profundo infligido por una rebelión militar, con amplias complicidades en fuerzas políticas y militarizadas de las diversas derechas monárquicas, católicas y fascistas, en una sociedad que experimentaba desde comienzos del siglo xx un proceso de rápida y profunda transformación económica, política, social y cultural, que la había llevado a un fecundo reencuentro con las democracias y las culturas secularizadas europeas.

Sin embargo, esta guerra entre ciudadanos del mismo Estado habría acabado, por agotamiento de los limitados recursos con los que la rebelión contaba, en algún tipo de negociación si la Alemania nazi y la Italia fascista, ante la parálisis de las potencias democráticas, no hubieran acudido, a las dos semanas de perpetrarse el golpe, en apoyo de los militares sublevados. De ahí que a la guerra de España, como guerra civil, se añadiera enseguida un alcance internacional, que la prolongó durante 32 meses y la convirtió en la primera batalla de la nueva Gran Guerra que se avecinaba, como advertía el presidente de la República, Manuel Azaña, desde los primeros días de agosto, a todo el que quisiera oírle. Y lo mismo repitió el ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo, ante la asamblea de la Sociedad de Naciones en septiembre de 1936: «Los campos ensangrentados de España constituyen ya un preludio de los campos de batalla de la próxima guerra mundial».

Y así, en esta guerra civil de alcance internacional se cruzaron viejos conflictos españoles con el anuncio de nuevas luchas que estallarían a su término. Fue una guerra social o una lucha de clases por las armas, de obreros y campesinos contra burgueses y terratenientes, pero también una guerra de religión, de nacionalismos enfrentados, una guerra entre dictadura militar y democracia republicana, de fascismo contra antifascismo, una guerra civil española que se habría consumido en su propia hoguera si no hubiera adquirido el carácter de guerra europea. No puede aislarse ninguno de estos elementos si se quiere dar cuenta cabal de todos los conflictos que en ella encontraron su punto de fusión. Eran conflictos que venían del pasado, de la frágil legitimidad que dañó al Estado liberal español desde su fundación en las Cortes reunidas en Cádiz en 1812; y que anunciaban un futuro en proceso de gestación, qué Estado habría de construirse: si una república sindical o popular, de una parte; o una dictadura militar, católica y fascista, de la otra.

De ahí que en las primeras semanas la contienda tuviera la inevitable apariencia de guerra antigua, con campesinos fusil al hombro haciendo frente como milicianos a un ejército mercenario, actuando a la manera de un ejército colonial; con obreros patrullando por las calles de las ciudades a la búsqueda del enemigo de clase; de muertos en ajustes de cuentas, de violencia sin control, a cargo de jóvenes fascistas, católicos, anarquistas, comunistas o socialistas: todo eso ponía en evidencia las raíces españolas de la guerra. Pero sobre ella cabalgaba el ensayo de una guerra moderna, de tanques y aviones, de ciudades bombardeadas desde el mar y desde el aire, de ejércitos extranjeros, una guerra europea en miniatura. La primera se habría agotado en unas semanas sin la segunda; pero la segunda no habría podido adelantar en suelo español el futuro que esperaba a Europa y al mundo, sin la primera. Aquí seguiremos su curso, dedicando preferente atención a sus contenidos políticos: rebelión militar y construcción de un Nuevo Estado Español, de un lado; revolución y defensa de la República del otro.

El gobierno espera

~ 10-17 de julio de 1936 ~

Corría el mes de julio de 1936 y, en unas horas, el golpe militar contra la República del que se venía hablando desde hacía meses constituyó para todos, incluso para quienes habían conspirado, un acontecimiento asombroso en su magnitud e incierto en su desarrollo. El gobierno de la República, presidido por Santiago Casares Quiroga, había celebrado el día 10 su acostumbrada reunión de los viernes, en la que el ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, Bernardo Giner de los Ríos, entregó unas notas con abundante documentación sobre las conversaciones captadas por la policía entre los militares que conspiraban contra la República. La sublevación militar, dijo Casares, puede ser inmediata, quizás mañana o pasado. Tenían en la mano todos los hilos de la trama y hasta las instrucciones enviadas por uno de los jefes de la conspiración, el general Mola, que habían sido recogidas por el director general de Seguridad, José Alonso Mallol. A la vista de estos informes, los presidentes de la República y del Gobierno habían decidido que solo existían dos opciones: abortar el movimiento ordenando la detención inmediata de todos los implicados o esperar a que la conspiración estallase para someterla y destrozar de una vez la amenaza constante que desde su nacimiento venía pesando sobre la República. Optaron por la segunda.

Esperar a que la sublevación se produjera fue lo que en agosto de 1932 habían decidido también Manuel Azaña, como presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, y Santiago Casares, como ministro de la Gobernación, ante los informes policiales sobre una inminente rebelión encabezada por el general Sanjurjo. Por aquel entonces, esperaron a que se diera y, cuando salieron a la calle los primeros insurrectos, fue suficiente la intervención de la policía y la Guardia Civil para sofocar en unas horas la rebelión.

Esa era la experiencia del Gobierno republicano y esa fue su posición desde que, a raíz del triunfo del Frente Popular en las elecciones de 16 de febrero de 1936, empezaron a correr rumores y a circular noticias sobre una nueva conspiración

militar. Manuel Azaña, que asumió la presidencia del Gobierno el 19 de febrero ante la precipitada dimisión de Manuel Portela, calificó a finales del mismo mes, en una entrevista con el embajador de Francia, como «charlas de café» todo lo que se decía acerca de la «pretendida agitación de los militares». Luego, desde la presidencia de la República, y cuando los informes policiales confirmaron los progresos de la conspiración militar, su respuesta, junto a la de su sucesor en la presidencia del Gobierno, Santiago Casares, fue que lo mejor era esperar a que los militares se decidieran de una vez para así poder aplastar la rebelión y acabar con la agitación de los cuarteles. Mientras tanto, habían tomado medidas que consideraron suficientes para desarticularla: detención y encarcelamiento del jefe nacional de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, y de algunos de sus camaradas, varios cambios o combinaciones de destino de mandos militares, ascensos y nombramientos de militares presuntamente leales al frente de la Guardia Civil y de la sección de Asalto de la Policía Gubernativa. Con eso, creían disponer de suficientes resortes de poder para sofocar la rebelión, pues estaban seguros de que la mayoría de generales, con quienes habían mantenido conversaciones en las que recibieron promesas de lealtad a la República, se mantendrían fieles a sus juramentos.

No faltaron, sin embargo, ocasiones en que el presidente del Gobierno recibió noticias alarmantes acerca de lo que se estaba tramando. Unos días antes de la rebelión, varios representantes de los partidos del Frente Popular de Ceuta le informaron de que, en Marruecos, algunas banderas del Tercio realizaban ejercicios tácticos sobre el supuesto de una sublevación comunista en la península. Casares cogió entonces un paquete de telegramas y, agitándolos, dijo a los emisarios: «Aquí tengo la adhesión de todos los capitanes generales… No se preocupen… No pasará nada… Estoy deseando que esos cobardes salgan a la calle, que a escobazos, con unos cuantos guardias de asalto, los meto en los cuarteles». Lo mismo había respondido al socialista Indalecio Prieto cuando, acompañado por dos miembros de la comisión ejecutiva del PSOE, había ido a informarle del complot militar: «Lo que yo quiero es que se echen a la calle de una vez para yugular la rebelión». Mejor que el grano estallase para sajarlo: esa era la estrategia concebida por el presidente del Gobierno con el beneplácito del presidente de la República.

La estrategia de esperar la sublevación para salir a su paso y aplastarla era compartida también por los partidos del Frente Popular y por los dos grandes sindicatos, aunque con propósitos finales bien distintos a los del Gobierno republicano. En mayo de 1936 la CNT celebraba en Zaragoza un congreso que dedicó lo mejor de su tiempo a debatir la organización de la futura sociedad libertaria. Los grupos de afinidad que formaban la FAI habían decidido que, con las izquierdas triunfantes en las elecciones de febrero, se produciría una sublevación militar y tendrían entonces que «salir a la calle a combatirla por las armas». Hasta tal punto estaban convencidos, que el Congreso confederal invitó a la UGT a «la aceptación de un pacto revolucionario» que reconociera el fracaso del sistema de colaboración política y parlamentaria con los republicanos y dejara de prestar su apoyo al régimen imperante. Para que la revolución social fuera una realidad efectiva —pensaban los anarcosindicalistas— era necesario destruir por completo el régimen político y social, y la respuesta a la rebelión militar sería la mejor oportunidad para acometer la tarea.

Con parecido argumento, en las últimas semanas de junio Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, evocaba en uno de sus discursos los rumores de conspiración militar: «Si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de Estado por sorpresa, que lo den… No conseguirán más que disfrutar unos días o unos meses de la satisfacción que pueda proporcionarles el mando, porque no quiero suponer que nos vayan a cortar a todos la cabeza». Entre los dirigentes de los dos grandes sindicatos reinaba la seguridad de que la revolución obrera sería esta vez la respuesta a un golpe militar que los republicanos en el poder no serían capaces de derrotar. Y si Casares había optado por esperar, a finales de junio Largo Caballero, ante los informes de inminente rebelión, respondía en el mitin de clausura del congreso de uno de los más veteranos y potentes sindicatos de la UGT, la Federación Nacional de la Edificación: «Se nos está hablando todos los días del peligro de la reacción y del golpe de Estado […] ¡Ah! Pero tengan en cuenta los que lo hagan que al día siguiente, por muchos entorchados en las bocamangas, la producción no la harán ellos, que tenemos que hacerla nosotros, y sin producción no hay entorchados ni hay fusiles». A la clase obrera no se la puede vencer: esa era una realidad histórica, política y económica, a la que se atenía el líder de la UGT; antes o después, la clase obrera siempre triunfa. En la primavera de 1936, los dirigentes de la UGT, como los de la CNT, estaban convencidos de que un gran sindicato, declarando una huelga general y la salida a la calle de sus afiliados, era capaz de derrotar a un ejército

que hubiera emprendido la conquista del poder por medio de un golpe de Estado.

De esta manera, republicanos, socialistas y anarcosindicalistas se mantuvieron desde principios de junio en una agotadora espera de la rebelión, los primeros repitiéndose que era necesario llevar la situación a la crisis total, para que estallase; los segundos, convencidos de que la iniciativa de los militares abriría a la clase obrera las puertas del poder oponiéndole una huelga general; los terceros, decididos a responder en la calle con las armas. Mientras tanto, las respectivas organizaciones juveniles, que esperaban cada día el golpe para «esta noche», se enfrentaban en la calle a tiros con sus enemigos de Falange Española, que engrosaba sus filas con los jóvenes de Acción Popular. Las voces de alerta sobre el creciente deterioro del orden público que llegaban de gentes más cautas cayeron en oídos sordos: eran, como respondían los jóvenes socialistas a las continuas advertencias de Indalecio Prieto, «cuentos de miedo».



Los dos presidentes de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora (1931-1936) y Manuel Azaña (1936-1939).

La conspiración avanza

Los conspiradores, sin embargo, no esperaban. En realidad, las conspiraciones contra la República se remontaban al día mismo de su proclamación, el 14 de abril de 1931, cuando se reunieron destacadas personalidades del monarquismo, como Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo, José Yanguas Messía, el marqués de Quintanar, Eugenio Vegas y José Antonio Primo de Rivera, en casa del conde de Guadalhorce para constituir —como ha escrito José Ángel de Asiaín— una escuela de pensamiento con el propósito de derrocar por todos los medios a la nueva República. Fueron también miembros de la aristocracia monárquica los que alentaron y financiaron el golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto de 1932 y quienes a través de Acción Española comenzaron a recaudar fondos con objeto de mantener viva la conspiración a pesar de su primer fracaso: duques, condes, marqueses y financieros, con el empresario Juan March en primera línea, aportaron a la causa más de 17 millones de pesetas, y fue un clérigo cercano a Acción Española y canónigo magistral en la catedral de Salamanca, Aniceto Castro Albarrán, quien publicó en 1933 El derecho a la rebelión, con el que proporcionaba una cobertura teológica a los planes de los monárquicos.

Un año después, en marzo de 1934, dirigentes de la Comunión Tradicionalista, de Renovación Española y de la Unión Militar Española visitaron a Benito Mussolini para solicitarle ayuda en forma de armas y de dinero en metálico. No fueron ellos los únicos: desde junio de 1935, Falange Española contaba con una subvención mensual de 50 000 liras del gobierno fascista de Italia, que José Antonio Primo de Rivera retiraba en París cada dos meses con el pensamiento puesto en el golpe de Estado del que la Junta Política de su partido había tratado durante el verano. Y cuando se acercaban las elecciones de febrero de 1936, los dirigentes de Falange planearon una insurrección desde Toledo sostenida por profesores y cadetes de la Academia, convencidos de que a su acción seguiría el levantamiento del resto del Ejército. En fin, a mediados de junio, José María Gil Robles, jefe aclamado de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), hará llegar al general Mola, que dirigía la conspiración desde

Pamplona, medio millón de pesetas como parte del remanente del fondo electoral de su partido, en la seguridad de que todos los donantes habrían estado de acuerdo en que se aplicara a ese fin.


Ω Ω
A Ω

José María Gil Robles, jefe aclamado de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), fotografiado en un acto en 1935.

Solo el temor a que la oficialidad no secundara en frío «un movimiento contra los poderes constituidos si la Guardia Civil y la Guardia de Asalto no formaban parte del mismo», impidió en febrero de 1936 a los generales Franco, Fanjul y Goded declarar por su cuenta el estado de guerra con el objeto de evitar la formación de un gobierno republicano, cuando la prensa daba por seguro el triunfo del Frente Popular en las elecciones del día 16. Dos semanas después, a principios de marzo, los generales Franco, Mola, Saliquet, Rodríguez del Barrio, Orgaz, Villegas, García de la Herrán, González Carrasco, Varela y Ponte, más el coronel Galarza, que llevaba la representación del general Sanjurjo, exiliado en Portugal, mantuvieron una reunión en casa de José Delgado Hernández de Tejada, que había sido candidato de la CEDA a diputado por la provincia de Madrid, en la que decidieron preparar un golpe de Estado que habría de ejecutarse el 20 de abril. Días antes de la fecha prevista, el 14, y mientras se celebraba el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la proclamación de la República, sonaron, muy cerca de la tribuna presidencial, unos disparos que acabaron con la vida de un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes. En su entierro un grupo de falangistas provocó disturbios, de los que resultaron varios muertos y heridos al enfrentarse con una patrulla de Guardias de Asalto al mando del teniente José del Castillo. Los planes de los conspiradores se vieron alterados hasta que, finalmente, tras los sucesivos asesinatos del capitán Carlos Faraudo y del mismo teniente Castillo, instructores ambos de milicias socialistas, y la venganza perpetrada en la persona de José Calvo Sotelo con su asesinato en una camioneta de la policía, decidieron ponerlos en marcha. Mientras Mola preparaba las órdenes de inmediata rebelión, el general Franco tomaba el avión que el escritor y periodista Torcuato Luca de Tena había contratado para su traslado a la península desde Canarias. De este modo, el viernes 17 de julio daba comienzo la rebelión militar apoyada por amplios círculos de la derecha monárquica y católica y por las milicias armadas del Requeté —organización paramilitar carlista, cuyos miembros eran conocidos también como boinas rojas — y de Falange.

La rebelión comienza en África

~ 18 de julio de 1936-4 de agosto de 1937 ~

Ese mismo 17 de julio, Santiago Casares informó al consejo de ministros de que la rebelión, tan prevista por todos, había triunfado en Melilla, que era de temer su triunfo en el resto de las plazas de África, y que él había dado órdenes para que los barcos de la Armada fondeados en Cartagena salieran hacia el Estrecho de Gibraltar a fin de impedir el paso a la península de las fuerzas sublevadas. Había terminado la espera, los rebeldes habían salido a la calle y se habían hecho rápidamente con el control de la situación. Pero el Gobierno, sin saber qué hacer, se limitó a publicar en la mañana del 18 un comunicado en el que daba ya la sedición por sofocada, y unos decretos que disolvían «todas las unidades del Ejército que toman parte en el movimiento insurreccional» y licenciaba a «las tropas cuyos mandos se han colocado frente a la legalidad republicana». El decreto produjo el resultado contrario a lo que el Gobierno pretendía: los rebeldes no lo acataron y no dejaron marchar a ninguno de sus hombres, mientras las tropas que podían quedar a las órdenes de mandos dudosos o leales abandonaban las filas, con lo que dejaron a la República sin una fuerza armada capaz de contener la rebelión.

▪

«La lucha definitiva entre Rusia y España»

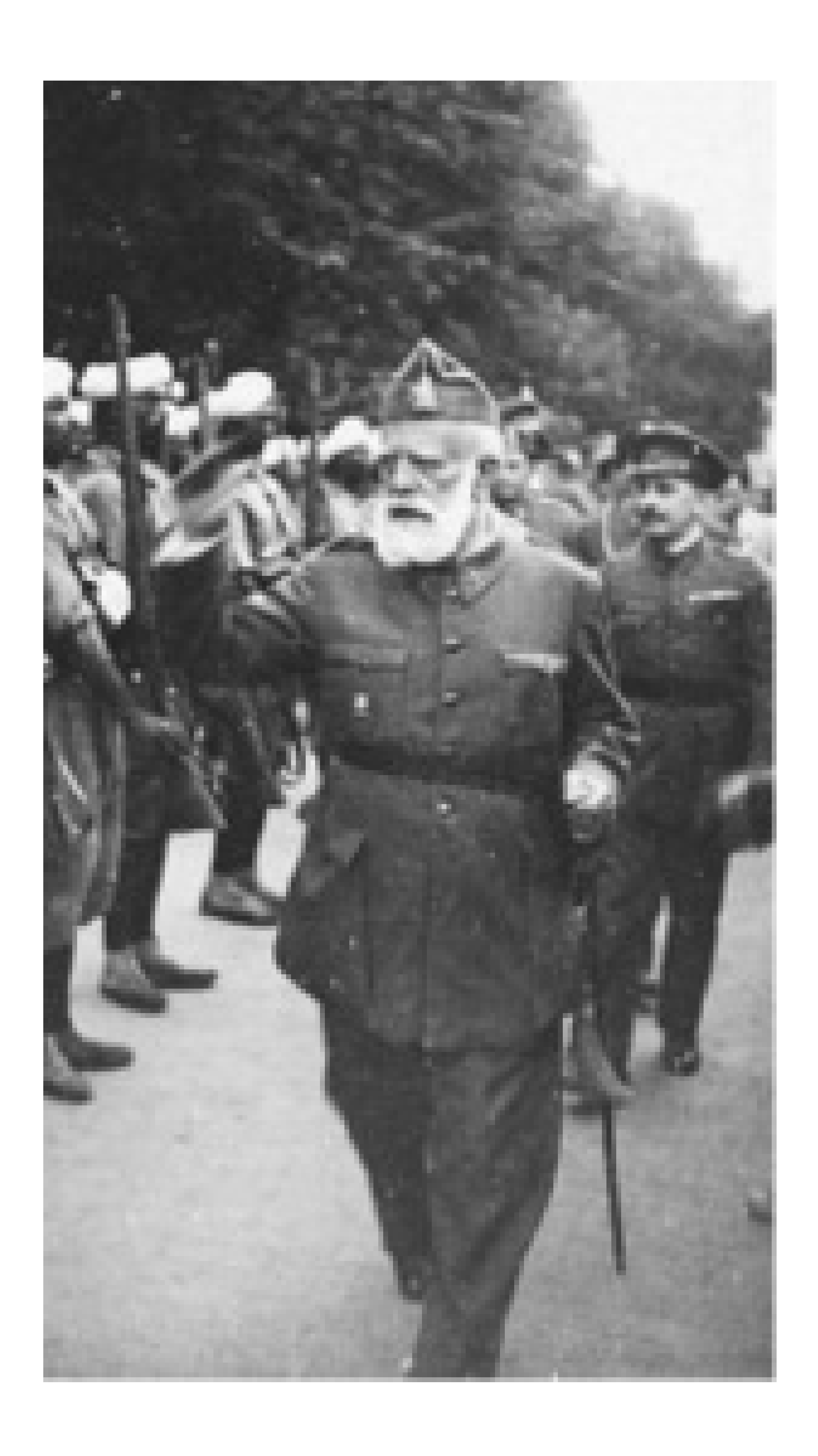
Así definió la lucha en esos primeros días el general Franco en una nota oficial publicada el 23 de julio en el diario ABC de Sevilla. No se trataba de un movimiento militar o de clase, sino de la vida de España, de un levantamiento nacional, de un movimiento salvador de España, y en ese trance no cabía vacilación alguna ante la imperiosa necesidad de rescatarla de las garras de la revolución y de los poderes ocultos que la auxiliaban.

¡Españoles!: La lucha establecida está vencida y la parte más difícil del triunfo está asegurada. Seguid con entusiasmo; todos tenéis el deber de cooperar en la lucha definitiva entre Rusia y España. Yo os afirmo que España está venciendo y vencerá. No se trata de un movimiento militar o de clase, se trata de la vida de España. No creáis las mentiras que difunden las estaciones de radio de Madrid y Barcelona en manos de partidarios del Gobierno derrotado […]

Fe en todo; no desmayar lo más mínimo; el triunfo total está muy próximo. No vacilar; energía y adelante: los pequeños episodios adversos de algún rincón explotado por la propaganda y las amenazas, reaccionan con energía, pues no son más que la palmaria demostración de cómo estaban corrompiendo a España. ¡Españoles! ¡Viva España y la República!

▪

El gobierno decretó también el cese en sus respectivos mandos de los generales Cabanellas, Franco y Queipo de Llano. Por la tarde, Casares convocó a consulta en consejillo a los ministros, al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, y a los dirigentes de las dos facciones que dividían a los socialistas tras la revolución de octubre de 1934: Francisco Largo Caballero, fuerte en la UGT, e Indalecio Prieto, que controlaba la ejecutiva del PSOE. La rebelión, mientras tanto, se había extendido por la península, sin que los comunicados sobre su derrota ni el decreto licenciando a las tropas de las guarniciones sublevadas hubieran servido más que para confundir a los gobernadores civiles que trataban de contenerla por medio de las escasas fuerzas de policía y Guardia civil y de militares leales que quedaban bajo sus órdenes.







En las primeras horas tras el alzamiento militar, el gobierno decretó el cese de los generales Cabanellas, Queipo de Llano y Franco, en las imágenes, de izquierda a derecha.

De manera que lo ocurrido en la tarde del sábado, día 18, excedía con mucho lo esperado; más aún, la insurrección en África y su rápida expansión por la península daba la medida de la estrategia suicida seguida por el Gobierno y los partidos que le servían de apoyo, al haber confiado todo a la lealtad de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil y, en el caso de las organizaciones obreras, a los efectos taumatúrgicos de una huelga general o a la resistencia que pudieran ofrecer las milicias socialistas y comunistas. Los rebeldes, que urdieron sus planes en la confianza de que todas las guarniciones obedecerían sus instrucciones, comenzaron a matar a mansalva cuando tropezaron con los primeros obstáculos: decenas de militares leales a la República o reticentes a sumarse a la rebelión fueron asesinados sobre la marcha por sus compañeros de armas en las primeras horas del golpe.

Violencia extrema

El golpe de Estado, que no consiguió su objetivo pero que tampoco fue derrotado, provocó de inmediato una fragmentación del poder con el hundimiento del aparato coactivo y judicial del Estado en las dos zonas en que quedó dividido el territorio de la República. Allí donde los militares lograron imponerse, surgieron voluntarios civiles con armas en las manos, encuadrados en milicias de Falange o del Requeté, que asistieron a los oficiales rebeldes en la tarea de consolidar un poder local, sin conexión con ningún órgano central, carente de un dispositivo capaz de dirigir eficazmente los acontecimientos en un ámbito más extenso que el alcance de los fusiles y ametralladoras de sus soldados. Si fue en los cuarteles donde comenzaron a caer la primeras víctimas del golpe militar, la violencia asesina, ya desatada, habría de extenderse, a cargo de grupos de voluntarios, por plazas, calles y edificios públicos, sedes de partidos, sindicatos y asociaciones culturales o viviendas privadas. En la instrucción reservada número 1 distribuida entre los conspiradores ya se indicaba que «la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado». Todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento serían encarcelados, «aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga».

Lo que habían previsto los conspiradores era que en el momento de la entrada en Madrid quedaría instaurada una dictadura militar que procedería a someter a la clase obrera socialista y anarquista y a las clases medias republicanas así como a destruir las instituciones democráticas. Pero al fracasar el golpe militar en puntos estratégicos como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Málaga, los generales que lograron imponerse en La Coruña, Pamplona y Burgos, o en Sevilla y Zaragoza, no necesitaron de mucho tiempo para amontonar cadáveres en calles y caminos: gobernadores civiles, alcaldes, dirigentes y afiliados de partidos y de sindicatos republicanos y obreros, o meros votantes y simpatizantes de estos partidos y sindicatos, fueron liquidados sobre la marcha. El triunfo solo parcial

de la insurrección militar modificó planes y estrategias para conquistar todo el poder, una vez que las columnas de legionarios y regulares trasladados a la península, subiendo desde Sevilla por Extremadura o bajando desde Pamplona por Castilla, comenzaran su marcha para ocupar Madrid. Mientras tanto, los falangistas, que hincharon en unos días sus filas con la incorporación en masa de católicos procedentes de las Juventudes de Acción Popular, y los tradicionalistas, que disponían de las milicias armadas conocidas como requetés, prestaron de inmediato en Pamplona y en Sevilla, y con efectos decisivos para el futuro, un apoyo popular a los golpistas. En las primeras semanas tras el golpe, dispusieron de autonomía suficiente para convertirse en partidos de masa dotados de sus propias organizaciones de milicias y actuar por su cuenta, aunque no de espaldas al mando militar, en detenciones, «sacas» y «paseos» dirigidos a liquidar físicamente a sus adversarios políticos.

De manera que allí donde los insurrectos habían triunfado por medio de una acción que comprendía el asesinato de militares y agentes del orden leales a la República o tibios en su adhesión a la rebelión, la violencia civil encontró una nueva ocasión abierta por el golpe militar para desplegarse fuera de todo control. En un caso, fue suficiente que un grupo de señoritos derechistas decidieran celebrar en Sevilla el día 10 de agosto el aniversario del fallido golpe de Sanjurjo para que varias personalidades de la izquierda (entre las que se encontraban un anterior alcalde de la ciudad, José González y Fernández de Labandera, el diputado socialista Manuel Barrios, el dirigente de la masonería andaluza, Fermín de Zayas Madera, y el padre del andalucismo, Blas Infante, esposo de Angustias García Parias, sobrina del gobernador civil Pedro Parias, nombrado por los sublevados) fueran asesinados. Algo parecido ocurrió en La Coruña, donde el fusilamiento de su joven gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, fue seguido unas semanas después por el de su esposa, encinta, Juana Capdevielle.

▪

«Se ha desencadenado contra el poder legítimo de la República una agresión sin ejemplo»

Transcripción de la alocución del Presidente de la República, Manuel Azaña, en la noche de 23 de julio de 1936.

«Españoles: En esta hora solemne que está viviendo nuestra patria, me he creído en el caso, con la anuencia del Gobierno de la República, de salir del mutismo y de la reserva a que me obliga mi función presidencial, para decir unas palabras de aliento y de gratitud a todos aquellos que, con entusiasmo y heroísmo, defienden la causa de la ley, que es la causa de la República, y unas palabras de grave y severa admonición a los culpables del horrendo delito que tiene destrozado el corazón de los españoles.

En estos momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el Poder legítimo de la República una agresión sin ejemplo, yo no diré una palabra más de violencia. Cuando toda la conciencia nacional, sin distinción de ideas políticas ni de partidos; cuando la conciencia de toda persona delicada y conocedora del impulso del deber está escandalizada por el hecho cometido, yo no voy a decir nada que agrave el hecho mismo ni escandalice más. Voy a decir solamente palabras de aliento y de gratitud.»

Incertidumbre del resultado, ausencia de información sobre la suerte corrida por los conspiradores en las grandes capitales, formación de grupos paramilitares de Falange o de la Comunión Tradicionalista, se añadieron así a la necesidad de conquistar (por medio de una tropa formada por legionarios, regulares, voluntarios falangistas o requetés) territorios y pueblos en los que la insurrección militar había encontrado resistencia en paisanos armados con fusiles o pistolas, apoyados o no por guardias civiles o policías: todo este cúmulo de circunstancias fue lo que movió la dinámica de la violencia que desde el primer momento acompañó al golpe de Estado. No se mataba solo para eliminar al enemigo, se mataba también para impedir que lo fuera o, como escribirá Manuel Azaña en La velada en Benicarló: los rebeldes «se conducen como si discurriesen así: cuantas más gentes matemos, mayor será nuestra autoridad». Eso es lo que piensan el teniente coronel al mando del Tercio, Juan Yagüe, y sus comandantes cuando

suben por la Ruta de la Plata cobrándose la vida, solo en la provincia de Badajoz, de más de siete mil campesinos.

A esta violencia, propia de militares africanistas habituados a actuar como fuerza de policía, se añadió, desde los primeros días de agosto, el principio de la depuración procedente de la incorporación en masa de la Iglesia católica a la causa militar. Los partidos políticos de la derecha quedaron disueltos y se puso fin a las divisiones políticas entre católicos, al tiempo que los obispos, salvo contadas excepciones, tomaban partido por los sublevados, bajo la dirección del cardenal Isidro Gomá, nuevo primado. En la multitud de actos de reparación y desagravio por los incendios o bombardeos de iglesias y basílicas, en los solemnes funerales por los muertos en defensa de la religión, elevados a la categoría de héroes y mártires, y en toda clase de procesiones, clero y obispos denunciaban la barbarie del calificado como bando «rojo» y pedían la adhesión de los católicos al bando que comienza a llamarse «nacional».

Y así, en iglesias, plazas y calles, la presencia de militares, de milicias de Falange, masculinas y femeninas, de jóvenes balillas, de requetés, reconstruía simbólicamente la unidad de la causa a la que todos ellos servían y que se identifica, a partir de agosto, como la causa de la Patria y de la Religión enfrentada a las fuerzas de la Antipatria o Anti-España, enemigos de la fe y de la nación que han de ser erradicados de la nueva España. Esta movilización católica tuvo un efecto inmediato sobre la legitimación de la rebelión, modificó el nombre con el que comenzaba a definirse la guerra y le insufló un fuego purificador. Antes de que hubiera transcurrido un mes desde la fecha del golpe militar, el 13 de agosto el cardenal Gomá informaba al secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, que «en la actualidad luchan España y anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie». Y en noviembre, en su carta pastoral publicada con el título El caso de España, además de reconocer en lo que está ocurriendo un espíritu de cruzada por la religión católica, afirma: «Aquí se han enfrentado dos civilizaciones […] Cristo y Anticristo se dan la batalla en nuestro suelo». «No es una guerra la que se está librando, es una cruzada», escribirá también el arzobispo de Pamplona.

Con el propósito de mantener activa esta sistemática y ejemplarizante represión, los militares insurrectos se apresuraron a dotarse de los correspondientes instrumentos jurídicos. A los bandos que los días 17 y 18 de julio declaraban el estado de guerra, con la consiguiente asunción de todos los poderes por las autoridades militares, siguió el publicado por la denominada Junta de Defensa Nacional el 28 de julio, que declaraba incurso en el delito de rebelión y sometido por tanto a la jurisdicción militar, que actuaría por procedimiento sumarísimo, a cualquiera que hubiera defendido, activa o pasivamente, el orden constitucional vigente o que, desde el 1 de octubre de 1934, hubiera sido miembro de sindicatos o partidos opuestos al Movimiento Nacional. Lo que en las primeras semanas del golpe de Estado fueron homicidios y asesinatos, se convirtió en ejecuciones decretadas por tribunales militares en aplicación del vigente código de justicia militar contra decenas de miles de españoles acusados de rebelión militar en alguno de los grados definidos por el mismo código. Fue, en verdad, una «justicia al revés», como la definirá en sus memorias Ramón Serrano Suñer —uno de los principales artífices del régimen franquista en sus primeros años—, o como escribirá años después Dionisio Ridruejo, jefe de Falange en Valladolid: «Una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República, y representaban corrientes sociales avanzadas o simples movimientos de opinión democrática y liberal».


Mar Cantábrico
FRANCIA
El Ferrol
Gijón
Santander
San Sebastián
Irún
La Coruña
Oviedo
Bilbao
Santiago de Compostela
Lugo
Durango
Vitoria
Pamplona
Ponferrada
León
Pontevedra
Orense
Miño
Logroño
Burgos
Huesca
Figueres
Girona
Palencia
Aranda de Duero
Ebro
Valladolid
Soria
Zaragoza
Lleida
Granollers
Zamora
Barcelona
Duero
Tarragona
OCÉANO ATLÁNTICO
Salamanca
Segovia
Puerto Alto de León
Puerto de Somosierra
San Rafael
Ávila
Guadalajara
Alcalá de Henares
Vinaroz
Menorca
Madrid
Teruel
Mallorca
Maó
Cuenca
Castellón de la Plana
Tajo
Toledo
Palma de Mallorca
Valencia
PORTUGAL
Cáceres
Ibiza
Albacete
Ibiza
Ciudad Real
Badajoz
Islas Baleares
Santuario de Ntra. Señora de la Cabeza
Alicante
Murcia
Córdoba
Jaén
Cartagena
Huelva
Mar Mediterráneo
Sevilla
Granada
Almería
Málaga
Cádiz
Algeciras
Ceuta
OCÉANO ATLÁNTICO
Lanzarote
Arrecife
La Palma
Islas Canarias
Santa Cruz de la Palma
Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Fuerteventura
Puerto del Rosario
Gomera
Las Palmas de Gran Canaria
Hierro
Gran Canaria
Tetuán
Melilla
Protectorado de Marruecos

En el mapa, el color más oscuro indica la zona ocupada por los republicanos el 23 de julio de 1936. El área bajo control de los sublevados está marcada con un color más claro, y los puntos indican los principales núcleos controlados por los sublevados.

Todos los poderes a Franco

El 23 de julio, el general Mola anunció la constitución de una Junta de Defensa Nacional de España que, por decreto del día siguiente, asumió sobre el papel todos los poderes del Estado y la representación del país ante las potencias extranjeras. Presidida por el general Cabanellas, la Junta publicó en el Boletín Oficial de 30 de julio un bando en el que declaraba el estado de guerra, la ilegalidad de todos los partidos y sindicatos del Frente Popular y la prohibición de todas las actuaciones políticas y sindicales obreras y patronales. Sus miembros y los que se añadirán después, los generales de división Andrés Saliquet, Queipo de Llano, Francisco Franco y Gil Yuste, actuaban bajo el supuesto de que la caída de Madrid ante la ofensiva combinada de las columnas procedentes del norte y del suroeste sería inminente y que en unas semanas ocuparían todos los centros de poder. La experiencia más reciente de una exitosa acción militar era la de Primo de Rivera en 1923, que no había tenido necesidad de abolir formalmente una constitución monárquica para implantar una dictadura militar. Ahora, aunque con más dificultades, iba a ocurrir lo mismo. No era preciso, por tanto, pensar en la construcción de un nuevo Estado, ni siquiera en la formación de un gobierno; lo urgente era la unidad de mando militar, desarticulada por el mismo efecto de la sublevación.

Este fue el problema que los caudillos de la rebelión se plantearon en una reunión convocada el 21 de septiembre, en la finca del ganadero salmantino Pérez Tabernero, mientras el ejército de África ocupaba Maqueda y se situaba en posición de lanzar su ofensiva contra Madrid. El plan de entrar en la capital bajo un mando supremo unificado, las presiones de Alemania e Italia, que ya venían tratando con Franco todo lo relativo a la ayuda en material y hombres, la iniciativa de los generales que aspiraban a una pronta restauración monárquica, más el número limitado de candidatos al mando supremo, favoreció la elección, propuesta por el general Alfredo Kindelán, del más cauto, el menos ideologizado, el más neutro de todos ellos en cuestión de régimen: tras acordar, contra el parecer de Cabanellas, la unidad de mando, los reunidos optaron por el

general Franco para concentrar en sus manos el poder militar. Quedaron excluidos otros firmes candidatos como Sanjurjo, muerto en accidente de aviación el 20 de julio de 1936, Cabanellas, un masón, y Queipo de Llano, exconspirador contra la monarquía.

Asumir el mando único militar no es lo mismo que ser jefe del gobierno de un Estado, pero eso fue lo que ocurrió también en Salamanca siete días después. Entre tanto, dos decisivas novedades aclaran la naturaleza del poder que, sobre una base estrictamente militar, se construía en la zona dominada por los rebeldes. A punto de lanzar su ofensiva sobre Madrid, Franco decidió desviar sus tropas hacia Toledo para liberar a los asediados en su Alcázar del cerco al que llevaban dos meses sometidos por las milicias republicanas. El Alcázar encerraba un tesoro de legitimidad simbólica, pues era una academia militar en la que los sitiados resistían en medio de las ruinas, con los muros medio destruidos, refugiados en los sótanos. Artífice de su liberación, Franco recibió un enorme capital político: aquella liberación se convertirá en prenda y símbolo de la salvación de España que, como una mártir, resucitaba del sepulcro al que la habían conducido sus enemigos. Allí abajo, en los sótanos de un alcázar militar que dominaba una ciudad imperial, germinaba una España nueva que encontraría en la persona de Franco su salvador invicto.

Pero no solo con capital simbólico se construye el poder. En esos días decisivos, Franco fue también receptor de dos legitimidades que venían a añadirse a la militar. La primera consistió en una concentración de masas organizada por Falange Española para aclamarlo como jefe y salvador. Fue en Cáceres, ciudad evocadora de los conquistadores, donde Falange Española mostró por vez primera su nueva faz como partido de masas a disposición del mando militar. Simultáneamente, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel, publicó el 30 de septiembre una carta pastoral titulada Las dos ciudades, en la que presentaba la guerra como «una cruzada por la religión, la patria y la civilización». Sobre su primer fundamento militar, la adhesión del partido fascista y la consagración de la Iglesia contribuyeron decisivamente a la concentración de todo el poder en la persona de Franco, una nota que caracterizará a su régimen hasta el mismo fin de sus días.

Nummer 35 27. August 1936

45. Jahrgang Preis 20 Pfennig

Berliner Illustrirte Zeitung



Die erste Begegnung der beiden Führer der spanischen Militärgruppe in Burgos.

Arm in Arm: General Franco, der Kommandeur der Süd-Truppen, und General Mola, der Befehlshaber der Nord-Truppen (mit Brille).

Associated Press

In diesem Heft beginnt:

Eine erschütternde Erzählung aus dem spanischen Bürgerkrieg: „Das Mädchen zwischen den Fronten“

Mola, el más alto, junto al general Franco en Burgos el 27 de agosto de 1936. Imagen publicada en el periódico alemán Berliner Illustrirte Zeitung.

Lo quiso dejar claro desde el primero. Franco había solicitado y obtenido la ayuda militar, en hombres y pertrechos de guerra, de Alemania e Italia; había llevado un ejército a las puertas mismas de Madrid y liberado el Alcázar de Toledo; había sido aclamado en una concentración de masas y bendecido por la Iglesia. Solo quedaba que sus compañeros de corporación militar culminaran la operación nombrándole Generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire y general jefe de los ejércitos de operaciones, y jefe del gobierno del Estado. Fue lo que acordó la Junta de Defensa por decreto el 29 de septiembre de 1936, un acto de transmisión plena, indefinida e ilimitada, no condicionada a ninguna circunstancia excepcional, ni al tiempo que durase la guerra, como se había escrito en un primer borrador, a la persona concreta de Francisco Franco. Un poder que el Generalísimo podrá ejercer sin limitación alguna; de hecho, al día siguiente, y sin ningún decreto que lo respaldara, convirtió la fórmula «jefe del gobierno del Estado» en «jefe del Estado». Lo que se creó aquellos días fue, por tanto, una dictadura cesarista, soberana, sin límites de tiempo o condición.





La liberación del Alcázar de Toledo se convirtió en un símbolo de la salvación de España. A la izquierda, milicianas republicanas durante el asedio al Alcázar en 1936. A la derecha, el oficial nazi Heinrich Himmler visita las ruinas del Alcázar en 1940 acompañado de José Moscardó, líder de la sublevación en esta ciudad.

Y aunque no había gobierno ni Estado, Franco recibió complacido el nombramiento. «Ponéis en mis manos España. Me tengo que encargar de todos los poderes.» Eran palabras mayores: España en sus manos y en ellas todos los poderes del Estado. Para administrarlos, lo primero que hizo, como se ha visto, fue transformar la jefatura del gobierno del Estado en jefatura del Estado sin más, como así apareció en el decreto publicado el día 30 de septiembre. Una vez aclarado que el suyo no era un nombramiento parcial ni interino, convirtió la Junta de Defensa Nacional en Junta Técnica del Estado, una repetición de la experiencia de Primo de Rivera a la que añadió, para mostrar mejor su irrelevancia como órgano de poder, la dispersión por Burgos, Salamanca y Valladolid de las distintas comisiones técnicas que reproducían en su denominación las habituales de los ministerios: Justicia, Hacienda, Industria, Comercio y Abastos, Agricultura, Trabajo, Cultura y Enseñanza, Obras Públicas y Comunicaciones. Presidida por el general Fidel Dávila, la Junta Técnica del Estado contaba con un gobernador general del Estado para todas las provincias «liberadas», y dos secretarías generales, la de Relaciones Exteriores y la del Jefe del Estado, de la que fue titular su hermano Nicolás, muñidor de todas las operaciones políticas.

-

Junta de Defensa Nacional

Del 24 de julio de 1936 al 29 de septiembre de 1936.

Presidente:	Miguel Cabanellas
Vocales:	Antonio Saliquet.
	Miguel Ponte.
	Emilio Mola.
	Fidel Dávila.
	Federico Montaner.
	Fernando Moreno.

-

Crisis de abril en Salamanca

Desde esa posición de poder personal, con el respaldo de sus compañeros de armas, sin necesidad de contar con un gobierno formal, y obligado por la resistencia de Madrid y la perspectiva de una guerra larga, Franco se dispuso a construir un nuevo Estado sobre una triple base institucional y jerárquica: las Fuerzas Armadas, el Movimiento Nacional y la Iglesia Católica. Ya la Junta de Defensa se había encargado de prohibir todos los partidos políticos, pero era preciso unificar en una sola organización a las fuerzas civiles que habían incorporado sus milicias a los militares sublevados. Los carlistas o requetés fueron los primeros en comprobar de qué se trataba exactamente: su jefe-delegado, Manuel Fal Conde, al decretar por su cuenta la creación de una Real Academia Militar en la que formar a oficiales para sus tropas, levantó las iras de Franco, que ordenó su arresto y le dio a elegir entre el exilio o un consejo de guerra. Fal Conde optó por lo primero y Franco aprovechó la ocasión para ordenar la publicación, el 21 de diciembre de 1936, de un decreto por el que todas las milicias y fuerzas auxiliares movilizadas quedaban sujetas al Código de Justicia Militar y situadas a las órdenes de las autoridades militares y «mandadas y encuadradas por jefes y oficiales del Ejército». Cualquier veleidad de disponer de una fuerza armada a las órdenes de un partido o comunión política quedaba, pues, eliminada.

El paso siguiente no tardaría mucho en producirse, favorecido por los enfrentamientos en Falange con motivo de la sustitución de su jefe nacional, José Antonio Primo de Rivera, fusilado el 20 de noviembre en la cárcel de Alicante. Elegido Manuel Hedilla como sustituto provisional, la muerte de dos falangistas el 16 de abril de 1937 en un choque entre diferentes facciones que acudían a la reunión del Consejo Nacional convocada en Salamanca, precipitó el proyecto ya elaborado por Franco y su cuñado Ramón Serrano Suñer, decidido a convertir el «estado campamental» que encontró a su llegada a Salamanca en un nuevo estado fascista, fundiendo en una sola organización a Falange y la Comunión Tradicionalista.

El decreto 255, de 19 de abril, conocido desde ese día como «de unificación», estaba motivado por la necesidad de poner fin, como se decía en su preámbulo, «a la lucha de partidos y organizaciones políticas que, si bien pugnan noblemente por el mejor servicio de España, gastan sus mejores energías por el predominio de sus estilos peculiares o, lo que es peor, en cuestiones de tipo personalista que dan lugar a discordias pequeñas dentro de las organizaciones, resucitando la vieja intriga política». En consecuencia, Franco exigía la unificación de las dos organizaciones en el nombre de España y en el nombre sagrado de los que por ella cayeron; Falange y Comunión Tradicionalista quedaban integradas bajo su jefatura en una sola entidad política de carácter nacional que «de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS», con el resultado inmediato de que las milicias falangista y tradicionalista quedaban fundidas asimismo en una sola milicia nacional.

Y para que no quedara duda sobre la ubicación real del poder en lo que el mismo decreto definía como Nuevo Estado Español, el jefe nacional de Falange, Manuel Hedilla, fue juzgado y condenado a muerte (una pena que luego fue conmutada por otra inmediatamente inferior) por su «manifiesta actuación de indisciplina y de subversión frente al Mando y el Poder únicos e indiscutibles de la España nacional». El atrevimiento de Hedilla consistió en negarse a aceptar su nombramiento como vocal del Secretariado o Junta Política del nuevo partido único, formado por cuatro carlistas y seis falangistas por la omnímoda voluntad del Jefe del Estado, sin tener en cuenta lo acordado en el Consejo Nacional recién celebrado y reservándose para sí mismo la Jefatura Nacional del nuevo partido. Hedilla, midiendo mal sus fuerzas, pudo comprobar enseguida que las órdenes de Franco eran de obligado cumplimiento.

Lo que había quedado claro en el decreto de 19 de abril era que el Nuevo Estado en formación se construía bajo lo que podría entenderse como modelo fascista vuelto del revés en lo que se refería a la relación del partido con el Estado. Por supuesto, a Falange Española y a los requetés se les reconocía haber sido los dos exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional, pero se les recordaba a renglón seguido que aquel alzamiento había sido iniciado por «nuestro glorioso

Ejército» el 17 de julio. Todo quedaba, pues, bajo la suprema jefatura militar o, como afirma el mismo decreto, «bajo Mi jefatura», entendiendo por «Mi» al Jefe del Estado, que se identifica también como Jefe Supremo de la Milicia. Un general del Ejército con dos subjefes militares procedentes de las milicias de Falange Española y de los requetés, que podían conservar sus emblemas y signos exteriores, se haría cargo de la jefatura efectiva: no había mejor manera de mostrar que el nuevo partido único quedaba a todos los efectos bajo el mando del poder militar.

Todo quedó mucho más claro cuando el 4 de agosto de ese mismo 1937 se aprobaron los estatutos del nuevo partido, denominado ya para siempre Falange Española Tradicionalista y de las JONS, al que se define como Movimiento Militante inspirador y base del Estado Español y se le asigna la tarea de devolver a España el sentido profundo de una indestructible unidad y la fe resuelta en su misión católica e imperial. El partido único así creado es la disciplina por la que el pueblo unido y en orden asciende al Estado. En contrapartida, el Estado infunde al pueblo las virtudes de Servicio, Hermandad y Jerarquía. Ascender el pueblo al Estado no es conquistar el Estado, como había sido la primera consigna de los fascistas españoles, puesto que el Nuevo Estado ya había sido ocupado por los militares. Esto era otra cosa: un movimiento por el que el Estado infunde al pueblo ciertas virtudes con vistas a la grandeza imperial de la nación. La simbología, los saludos brazo en alto, el Cara al sol, y los uniformes serán los de Falange, con la concesión de la boina roja a los requetés; pero en lo que se refiere al mando, el nuevo partido único ha de tener claro que reside en la Jefatura de los Ejércitos, del Movimiento y del Estado fundidas en un Caudillo.

Un Movimiento, por lo demás, que ofrece un amplio campo para colmar todo tipo de ambiciones en una cascada de órganos y cargos que pretenden influir en su práctica, aunque no suprimen, a la administración del Estado: las Falanges locales, cada una con su jefe local, secretario, tesorero, delegados de servicios y jefes locales de milicias; las jefaturas provinciales, encomendadas directamente cada una por el Caudillo a un solo militante, y en las que también hay botín que repartir entre secretarios, tesoreros y demás; luego vienen los servicios —exterior, educación nacional, prensa y propaganda… hasta doce—, cada uno a cargo de un delegado nombrado y destituido libremente por el Jefe Nacional. Sin

olvidarnos de la milicia, cuyo mando supremo encarna el Caudillo (y los sindicatos, creados y mantenidos por Falange) y que estaba regida por una Junta Política como delegación permanente de un Consejo Nacional. Una vez conquistada la paz, este Consejo Nacional quedará integrado, además de por el Jefe del Movimiento, por el secretario general, el jefe de milicias y los delegados de todos los servicios y por militantes directamente designados por el Caudillo en número no mayor de cincuenta ni menor de veinticinco. En conjunto, una hórrida burocracia que duplica la del Estado, coronadas ambas por un mismo jefe.

Resistencia y revolución

~ 18 de julio-15 de agosto de 1936 ~

La rebelión militar que no logró acabar con el gobierno legal modificó también las expectativas acariciadas y las acciones emprendidas por los partidos y sindicatos obreros que desde las primeras horas se movilizaron en defensa de la República. El presidente del Gobierno, Santiago Casares, abrumado por las noticias de la progresiva insurrección militar, no supo qué hacer excepto ordenar la disolución de las guarniciones sublevadas y eximir a los soldados del deber de lealtad hacia sus jefes. Eran órdenes sobre papel mojado, porque un rebelde no obedece, y respecto al deber de lealtad de la tropa, el soldado que no obedezca al mando es fusilado. Por lo demás, al tiempo que las guarniciones se sublevaban, el Gobierno se hundía.

El presidente de la República llamó a los dirigentes de los partidos para discutir con ellos cómo debía responderse a la sublevación: su primer propósito fue formar un gobierno de unidad nacional que incorporara desde republicanos de derecha hasta socialistas —desde Miguel Maura por la derecha hasta Indalecio Prieto por la izquierda—, liderado por el presidente de las Cortes, Martínez Barrio; un gobierno que, por una parte, fuera capaz de controlar o encauzar lo que ya estaba ocurriendo en las ciudades con la aparición de grupos armados dispuestos a hacer frente a la rebelión y, por otra, que intentara convencer a los rebeldes de que depusieran su actitud. Maura rechazó la oferta y Prieto consultó con su partido, que le volvió a negar su autorización para incorporarse a un gobierno de coalición con los republicanos: los socialistas, según Largo Caballero, llegarían solos al poder cuando los republicanos hubieran agotado su programa o se hubieran visto desbordados por los acontecimientos. Martínez Barrio siguió adelante y entró en contacto con algunos de los comandantes generales de las divisiones orgánicas y con el general Mola, jefe efectivo de la VI división: «Es tarde, muy tarde…», respondió Mola. Martínez Barrio, sin embargo, continuó con su plan y a primeras horas de la madrugada del día 19 logró formar un gobierno con miembros de tres partidos republicanos: Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano.

Mientras tanto, el rumor y la excitación propia de los acontecimientos que se saben inevitables adquirieron una importancia crucial para el comienzo de la acción revolucionaria. En Madrid, como en tantas otras ciudades y pueblos, desde la tarde del 18 de julio y en la mañana del día siguiente una inmensa multitud se echó a la calle para oponer resistencia al golpe militar, identificado rápidamente como fascista: se había salido a la calle para resistir al golpe, pero la sola respuesta a un ataque de la reacción se vivía como el comienzo de una revolución. Por eso, el primer paso consistiría en rechazar lo que se estaba tramando a esas horas en la sede del Ministerio de la Guerra, donde los intentos del gobierno para llegar a un acuerdo con los rebeldes encontraron rápidamente la oposición de socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, que convocaron una gran manifestación. Desde primeras horas de la mañana del domingo día 19 llegaron hasta Martínez Barrio las voces de los manifestantes que exigían armas y gritaban «abajo el gobierno». El recién nombrado presidente, fracasado en su gestión, y con los partidos obreros manifestándose contra su gobierno, dimitió: su presidencia había durado poco más de seis horas.

El presidente de la República habló por teléfono con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, para informarse de cómo iban las cosas en Barcelona y recibió una respuesta tranquilizadora: la rebelión está vencida; solo quedaba un núcleo de resistencia en la antigua Capitanía General, que se rendiría ante la acción combinada de los militantes de la CNT y de las fuerzas armadas y de seguridad, con una especial intervención de la Guardia Civil. Sin tiempo ni razón para abrir las consultas previas a la formación de un nuevo gobierno, Azaña convocó de nuevo al Palacio Nacional a los dirigentes de los partidos y sindicatos con objeto de resolver la crisis de manera que todos se sintieran implicados en la fórmula adoptada. De esa reunión, José Giral salió investido como presidente de un nuevo Gobierno, similar al anterior, que también estaba formado exclusivamente por republicanos. Largo Caballero, que había acudido a la cita, rechazó por tercera vez la participación socialista y, confiado en que el poder llegaría pronto a manos de la clase obrera, solo prometió su apoyo al gobierno bajo la condición de que procediera a repartir armas a los sindicatos.

El reparto de armas marcó un punto de no retorno en la revolución

desencadenada por la rebelión. Por una parte, el gobierno perdió el control de los acontecimientos, pues pasó a carecer de instrumentos propios para sofocar la rebelión y para contener la revolución: no disponía del Ejército que, cuando no se había sumado a la rebelión, había quedado inservible para controlar el orden interior; y no podía fiarse de las fuerzas de seguridad, aunque la Guardia Civil hubiera respondido con lealtad a la República no solo en Barcelona. Tampoco disponía el gobierno de aparato judicial, que se vino abajo por completo: los jueces carecían de poder para detener o incoar procesos a los cómplices de la rebelión ni a quienes por su cuenta los buscaban, los detenían y los mataban. No había funcionarios que permanecieran en sus puestos para sostener la maquinaria del Estado. La revolución, pues, parecía haber triunfado. Cierto, quedaban las instituciones de la República y nadie había asaltado el Banco de España, pero el poder se desvanecía ante la patrulla que, en cada localidad, controlaba la salida y entrada de forasteros o que en las calles de la ciudad detenía a los transeúntes, exigía documentación, encarcelaba y mataba, cumpliendo funciones de juez y de policía sin control superior alguno.

En este marco general de un Estado que se hunde y una revolución que carece de dirección, las situaciones singulares abundaron en la zona leal a la República. En Cataluña, la revolución social protagonizada por la CNT procedió por decreto a la colectivización de la industria mientras respetaba, si no el fruto, al menos la propiedad de la tierra, en manos de pequeños y medianos propietarios. Ni la CNT ni la FAI, de pronto dueñas «del todo», como decía el anarquista Juan García Oliver, extendieron su dominio de la calle hasta el palacio de la Generalitat: una revolución social muy avanzada en las ciudades, sobre una base rural apenas modificada y un gobierno «burgués» al que se permitió subsistir. Mientras, los verdaderos burgueses ponían tierra de por medio, si no querían caer asesinados, y la Iglesia sufría la peor hecatombe de su historia: hasta el 80 por ciento del clero de Lérida fue exterminado en unas semanas. «Nosotros hemos resuelto la cuestión religiosa», proclamaba Andreu Nin, dirigente del POUM, «hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto».



Dos milicianas republicanas se toman un descanso durante los combates en verano de 1936. En esos primeros meses de guerra, las milicias de los partidos asumieron un gran peso en la resistencia frente a los sublevados hasta que se creó el Ejército Popular de la República.

En Aragón, las columnas de milicianos impusieron una colectivización de la tierra contra la voluntad de una clase de pequeños y medianos propietarios, y establecieron un órgano de poder político —el Consejo de Aragón— al margen de la legalidad republicana. Mientras, en extensas zonas de Castilla, Valencia y Andalucía los sindicatos de campesinos jornaleros ocuparon las fincas abandonadas por sus propietarios y el poder político local pasó a manos de comités conjuntos de sindicatos y partidos del Frente Popular. En el Norte, sin conexión territorial con el resto de la República, quedaron Asturias —excepto Oviedo y Gijón— y Santander, gobernados por comités del Frente Popular al mando de fuerzas milicianas que habían de actuar por su propia cuenta. El País Vasco constituye otro caso singular, pues mientras Álava se unía a Navarra en su adhesión popular a la rebelión militar rodeándola de calor civil, en Guipúzcoa socialistas y anarquistas resistieron solo durante unas semanas a los rebeldes. En Vizcaya, el PNV mantuvo su lealtad a la República y el control de la situación, a pesar de que su máximo dirigente, José Antonio Aguirre, reunía varias de las cualidades que le habrían llevado al paredón en otros territorios de la República: era católico, ingeniero e industrial. En Bilbao, durante las primeras semanas de guerra, las iglesias estaban llenas a rebosar, como en Pamplona.

«Hemos sido los destructores por excelencia», escribía en 1937 el secretario general de la CNT. Y en efecto, el poder del Estado se disolvió porque el sujeto de la revolución no era, a la manera de la revolución bolchevique o de la conquista del poder fascista, el partido que controlaba desde el primer momento el aparato del Estado, sino los comités que comenzaban a organizar todo lo relacionado con la continuación de la lucha armada contra el agresor y con la represión de los enemigos de la revolución. Los comités proclamaban con un manifiesto su propia existencia y el comienzo de un nuevo orden social. Se destruyeron por medio del fuego los símbolos del viejo orden derrocado, se

quemaron los archivos de ayuntamientos que guardaban los registros de propiedad, se roció de gasolina y se incendiaron las iglesias —en ocasiones, como ocurrió en Fuente de Cantos (Badajoz), después de haber encerrado bajo llave a decenas de los identificados con el orden social derruido—, se dio muerte a quienes se reconocían como enemigos de la clase obrera y de la revolución, a propietarios, clérigos, guardias civiles; se capturó a los militares y fuerzas de policía de los que se sospechaban intenciones de sumarse a la rebelión, que en la mayoría de los casos fueron asesinados, como ocurrió con la mitad de los jefes y oficiales de la Armada. Mientras tanto, se suprimió el dinero, se incautaron empresas, se organizó el aprovisionamiento por medio de bonos o de vales, se patrullaron las calles y se colocaron guardias en las entradas de la carretera.

La simbología revolucionaria, impregnada de contenidos religiosos, con su lenguaje de redención por la muerte y de purificación por el fuego, giraba en torno a la inevitable violencia que acompaña al alumbramiento del nuevo mundo, a la sangre que mana durante el parto y al fuego que limpia hasta reducir a cenizas el carcomido edificio destinado a desaparecer. Como un panadero de Alhaurín (Málaga) le decía al escritor británico Gerald Brenan, hablando de las ejecuciones sumarias cometidas por los jóvenes de la FAI: «Es lo único que se puede hacer. Por el bien de todos tenemos que eliminar a unos cuantos. De no ser así nunca mejoraremos la situación del mundo». Y añadía Brenan: «Tres camiones de las juventudes de la FAI llegaron hasta Ronda e insistieron en que el comité entregara a los prisioneros. Una vez en su poder los arrojaron al tajo desde los jardines públicos. Quinientas doce personas murieron de esta manera, entre ellas, algunas mujeres». Este es el contexto, también, de la particular violencia ejercida contra sacerdotes, religiosos y seminaristas, que pagaron a la revolución en sus dos primeros meses un tremendo tributo de sangre: 12 obispos, 4184 sacerdotes y seminaristas, 2365 religiosos y 283 religiosas fueron asesinados, en muchas ocasiones después de rituales de extrema crueldad. Y es que también aquí funcionaba la depuración preventiva, también aquí se trataba de una política de venganza y exterminio, como las definió el presidente de la República: si los rebeldes razonaban diciéndose «cuantas más gentes matemos, mayor será nuestra autoridad», los revolucionarios parecían encerrarse en «un razonamiento vicioso: en todas las revoluciones hay crímenes; como ahora hay crímenes es que estamos en revolución; o más aún: a fuerza de crímenes habrá revolución».

En otras ocasiones, no fue el comité, o el pequeño grupo de milicianos, el que actuó. Las matanzas que hasta el mes de diciembre tuvieron lugar en Madrid no se debieron en todos los casos a lo que se define como «cólera popular», sino al terror impuesto sobre la ciudad por acciones de masa, multitudinarias, o por la decisión tomada por los nuevos poderes que ocuparon el lugar que el hundimiento del Estado y el comienzo de la guerra había dejado desierto. A lo primero pertenece la matanza provocada por una multitud airada en la cárcel Modelo la noche del 22 de agosto, cuando, tras uno de los bombardeos sufridos en la capital, fueron asesinados algunos de los presos políticos a los que el gobierno había encarcelado para protegerlos del peligro que corrían sus vidas; a lo segundo, las masivas «sacas» de cárceles decididas en los primeros días de noviembre cuando los rebeldes habían llegado a las puertas de la capital y se disponían a asaltarla. Son las «sacas» que harán tristemente célebres los nombres de Paracuellos y de Torrejón, adonde son conducidos para ser fusilados alrededor de 2500 detenidos en las cárceles madrileñas considerados opuestos al bando republicano.

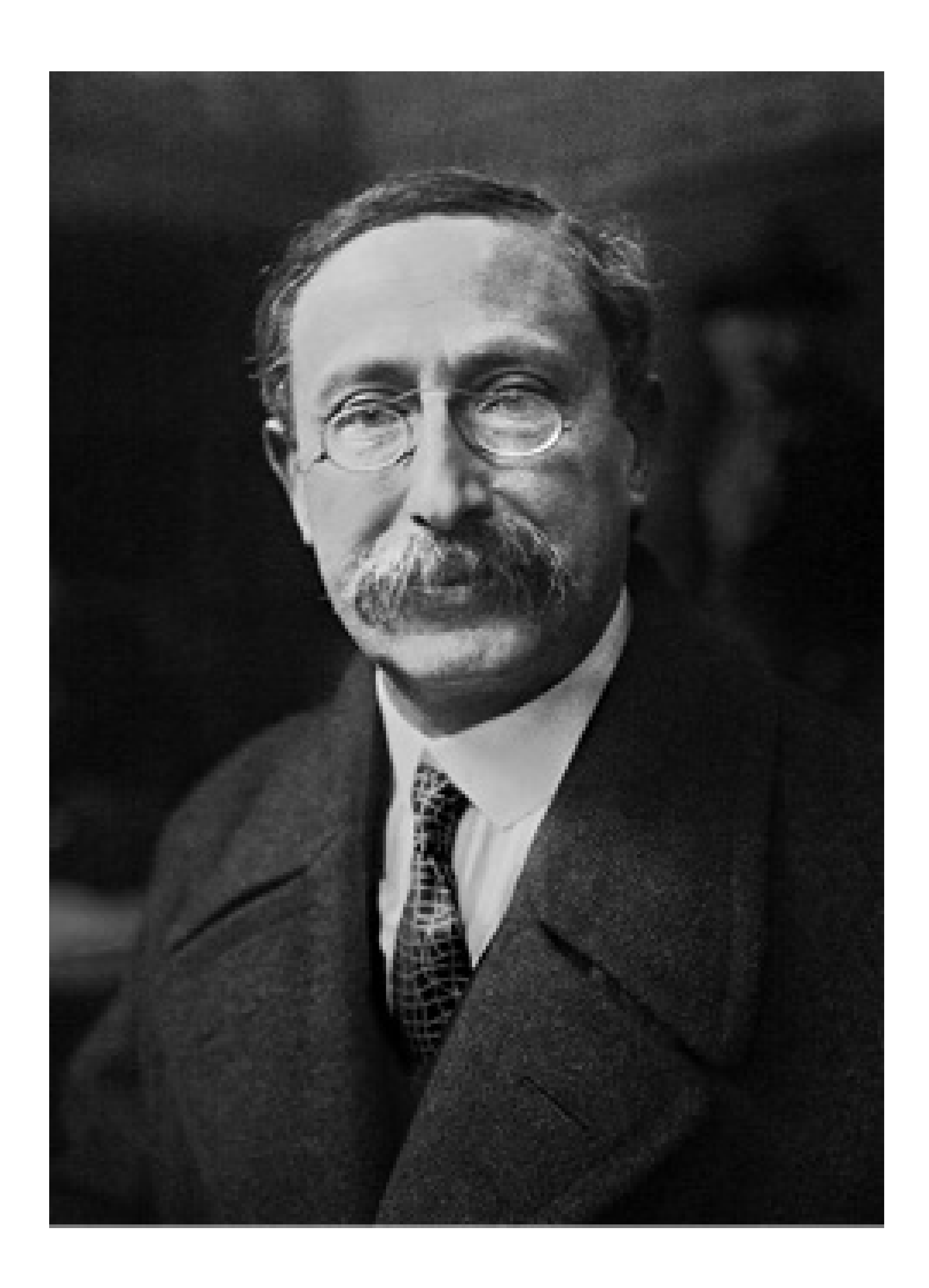
La farsa de la No Intervención

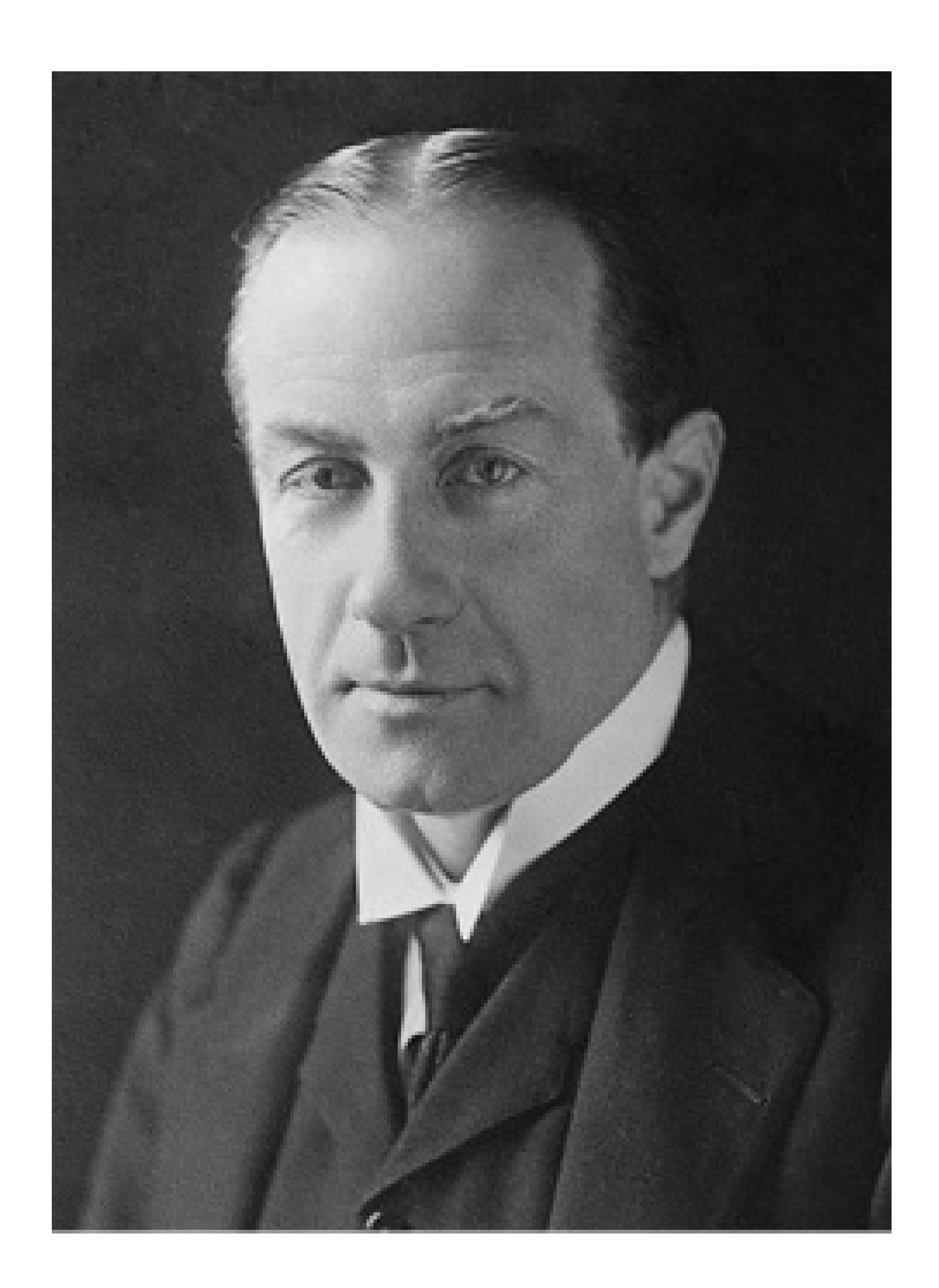
Los grupos de milicianos armados con pistolas, fusiles y algunas ametralladoras eran por su propia naturaleza, y por su falta de organización y disciplina, incapaces de sofocar la rebelión allí donde había triunfado y oponer una defensa eficaz del territorio allí donde los rebeldes disponían de tropas para pasar a la ofensiva. El gobierno republicano intentó llenar por medio de decretos, el vacío en que lo dejaba la ausencia de un ejército profesional con las miras puestas en la transformación de milicianos en soldados. El primero, de 20 de julio, concedía el ingreso en el servicio activo, a petición propia, a los jefes y oficiales retirados, de reserva, complemento y cualquier otra situación militar que, a juicio del mismo gobierno, hubieran prestado servicios a la República y estuvieran dentro de los límites de edad reglamentaria. Fue el camino por el que jóvenes oficiales que se habían acogido al decreto de retiros firmado por Manuel Azaña en abril de 1931 se reincorporaron al servicio activo, aunque no siempre con la simpatía de los milicianos, que aborrecían los uniformes y no estaban dispuestos a obedecer sin más a los mandos oficiales.

Luego, y tras superar no pocos obstáculos, vino la creación de Batallones de Voluntarios para premiar la actuación de milicianos que, al lado de las fuerzas leales a la República, contribuyeron al aplastamiento de la rebelión, y que quedarían encuadrados bajo el mando de oficiales y clases del Ejército, Guardia Civil, Asalto o Carabineros. Los milicianos irán, además, uniformados, llevarán un distintivo especial, tendrán derecho a alojamiento, manutención y vestuario en las mismas condiciones que los soldados del ejército regular en campañas y disfrutarán de los mismos haberes y pluses. Se trataba, pues, de ensayar la posibilidad de crear un nuevo ejército a partir de las milicias, con un ámbito de aplicación reducido a Madrid. Poco después, el 7 de agosto, y con objeto de reconstruir una línea de mando, el general Jesús Hernández Saravia, ministro de la Guerra, era autorizado a conceder, previo informe favorable de los jefes de columnas, los empleos de sargento, brigada, alférez, teniente y capitán a quienes se hicieran acreedores de ello.

En su intento de dotar a la República de un ejército equipado para derrotar a los rebeldes, el 20 de julio José Giral envió al gobierno de la República francesa, presidido por el socialista Léon Blum, un telegrama en el que le solicitaba la compra de armas, especialmente veinte aviones de combate. Pocos días después, llegaba a París el diputado socialista Fernando de los Ríos con el propósito de reforzar las gestiones ante las autoridades francesas. Pero antes de que la ayuda se materializara, Léon Blum y su ministro de Exteriores, Jean Yvon Delbos, salían para Londres, donde estaba previsto un encuentro con sus homólogos británicos Stanley Baldwin y Anthony Eden. Las conversaciones entre británicos y franceses condujeron a sellar la política de No Intervención, propuesta por el gobierno francés, e inmediatamente adoptada por el británico. El 8 de agosto, Francia declaró el embargo de armas a la República española y el 12 sugirió a Londres establecer un comité de control.

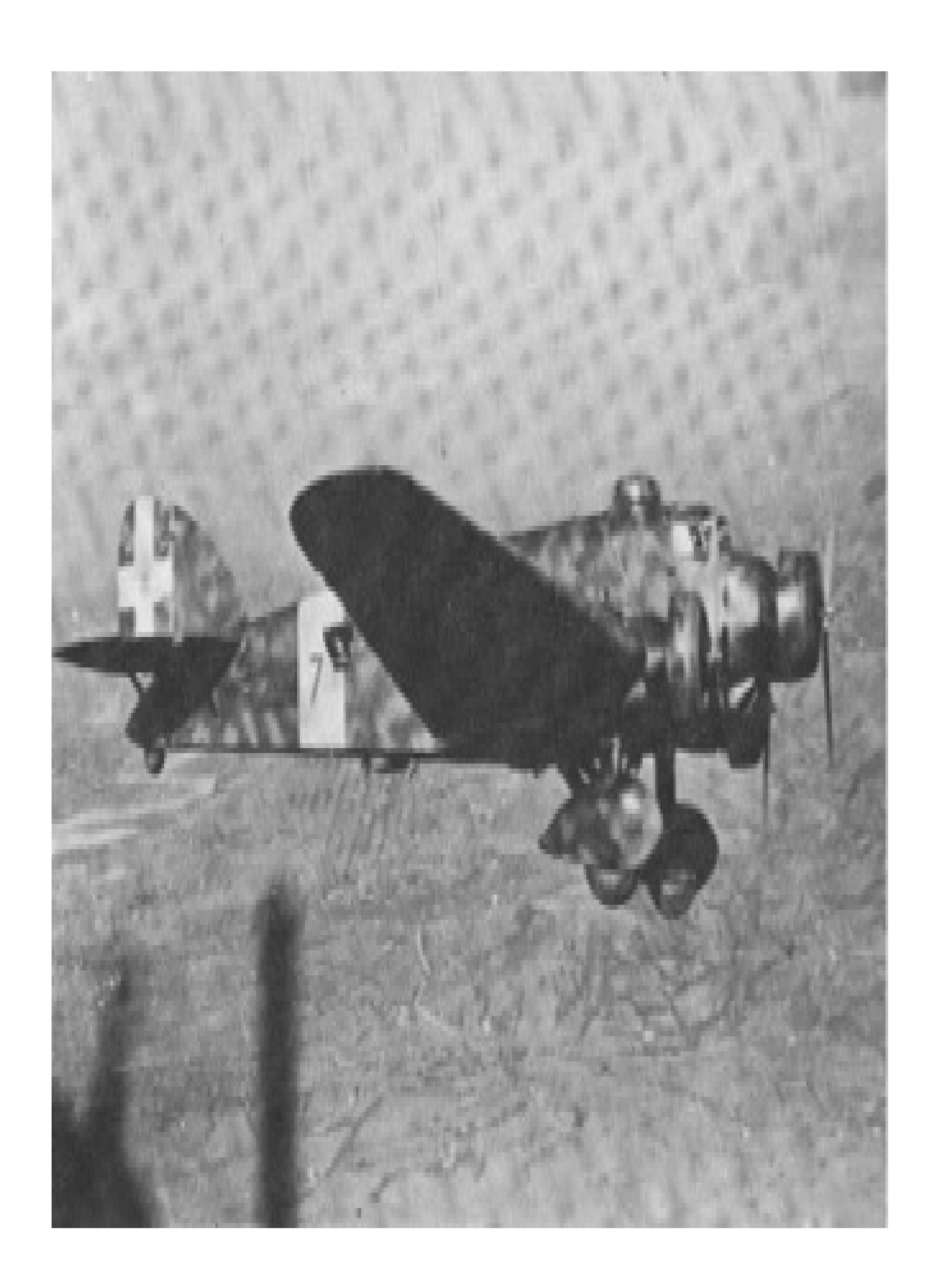
En un intercambio de notas, el día 15 de agosto los gobiernos francés y británico se comprometían a poner en vigor una prohibición de envío de material de guerra a España si Alemania, Italia, la Unión Soviética y Portugal hacían lo mismo. Sin esperar respuesta, Eden anunció que aplicaría el embargo unilateralmente, mientras Alemania e Italia quedaban con las manos libres para seguir enviando a los rebeldes, como ya hacían desde los últimos días de julio, aviones, tanques, ametralladoras y cuerpos de ejército y de aviación. Y así, la política de No Intervención consistió en prohibir a todos los Estados firmantes el tránsito y la exportación hacia España de material de guerra, barcos y aviones, aunque el comité encargado de vigilar el cumplimiento de lo acordado nunca tuvo poderes para imponerlo, ni los países firmantes se sintieron vinculados por la prohibición. Fue, de hecho, más que una política, una farsa, como ya entonces se la llamó, porque en ningún momento Alemania e Italia dejaron de enviar de forma regular y durante toda la guerra su ayuda a los sublevados.





El primer ministro francés Léon Blum y su homólogo británico Stanley Baldwin acordaron la No Intervención en la guerra civil española.

Con el propósito de no quedar descolgada de la política de seguridad, la Unión Soviética se adhirió también al pacto de No Intervención mientras, a finales de agosto, llegaba a Madrid su primer embajador ante la República española, Marcel Rosenberg, y otro histórico de la Revolución rusa, Vladimir Antonov-Obseenko, se hacía cargo del consulado en Barcelona. Poco después se convocó en Moscú una gran manifestación para mostrar la solidaridad de los comunistas rusos con la República española, expresión de un giro en la actitud mantenida hasta entonces por la Unión Soviética en el comité de Londres. Desde principios de octubre, la URSS no ocultó su apoyo a la causa republicana e incluso la convirtió en centro de propaganda y movilización internacional, lo que tuvo el inmediato efecto de implicar a la Internacional Comunista en el reclutamiento de voluntarios para dirigirlos hacia España. Armas, tanques y aviones, comprados con el oro del Banco de España que el gobierno de la República depositó en la Unión Soviética, y los voluntarios que formaron las Brigadas Internacionales comenzaron a llegar a España cuando las tropas de Franco se acercaban peligrosamente, sin encontrar serios obstáculos, a las puertas de la capital.



Avión italiano Savoia-Marchetti S.M. 81, utilizado por la aviación legionaria, desde sus bases en Mallorca, para bombardear las ciudades y los puertos republicanos de la costa mediterránea. Debajo, avance de las tropas italianas de la CTV durante la batalla de Guadalajara.



Del «No pasarán» a la caída del Norte

~ Septiembre de 1936-septiembre de 1937 ~

Pérdida de terreno en el interior y reveses en el exterior convencieron a José Giral, en los primeros días de septiembre de 1936, de que había llegado el momento de entregar al presidente de la República su dimisión y la de todos los ministros. También opinaba que debía formarse un gobierno capaz de «representar a todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales u obreras de reconocido influjo en la masa del pueblo español, de donde nacen siempre todos los poderes». Azaña, que consideraba a los dirigentes sindicales los mayores responsables del despilfarro de tiempo, energía y recursos, de la parálisis del gobierno y de los desastres cosechados por la República en el campo de batalla, no tuvo más remedio que aceptar como hecho consumado esta especie de transferencia de poder al líder de la UGT, aunque no era capaz de ver en Largo Caballero a un Lenin redivivo y estaba convencido de que su presidencia sería un fracaso.

-

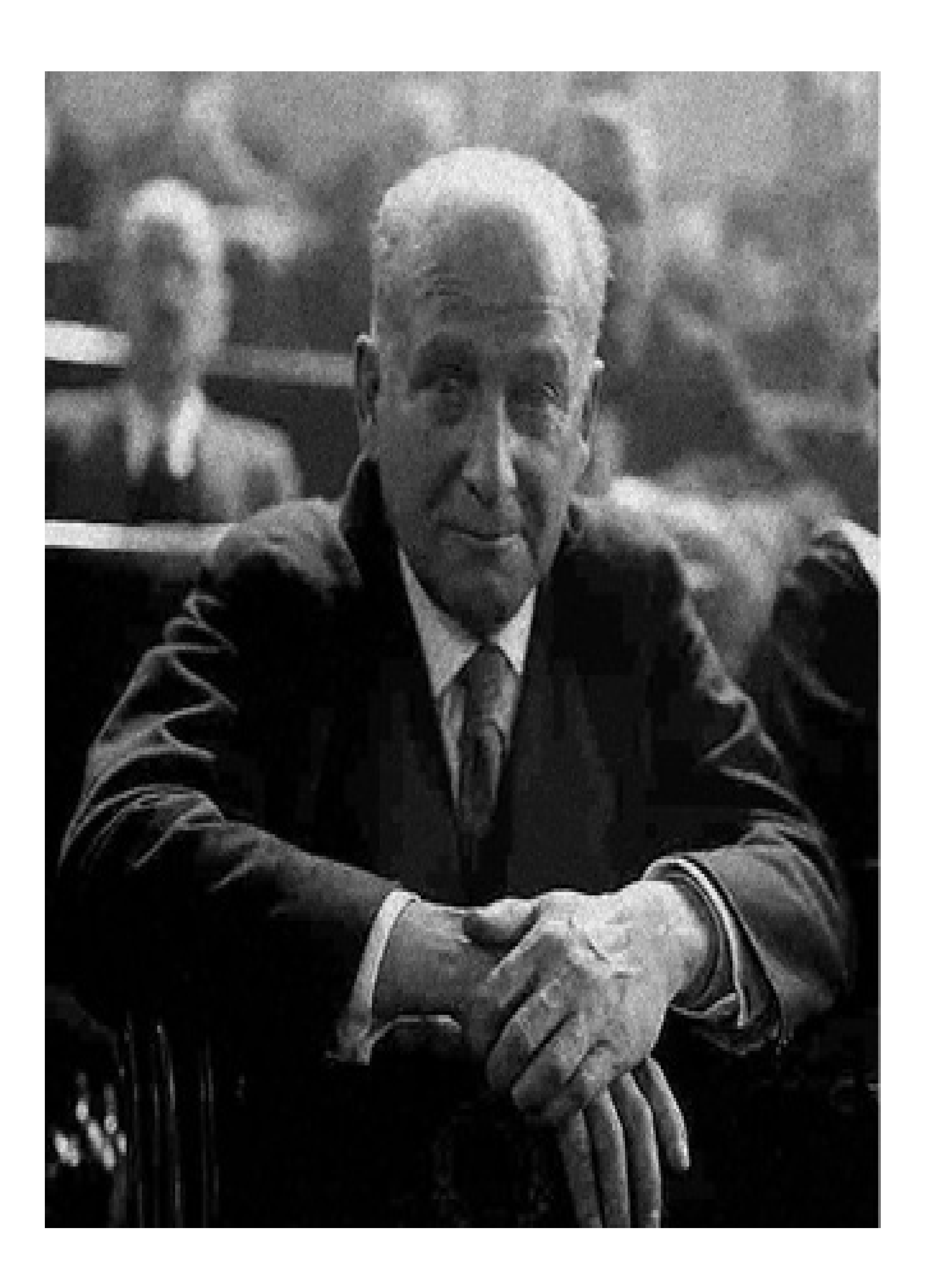
Primer gobierno de Francisco Largo Caballero

Presidencia y Guerra	Francisco Largo Caballero, UGT.
Hacienda	Juan Negrín, PSOE.
Estado	Julio Álvarez del Vayo, UGT.
Justicia	Mariano Ruiz-Funes, IR.
Gobernación	Ángel Galarza, UGT.
Marina y Aire	Indalecio Prieto, PSOE.

Instrucción Pública y Bellas Artes	Jesús Hernández, PCE.
Obras Públicas	Julio Just, IR.
Industria y Comercio	Anastasio de Gracia, PSOE.
Trabajo y Previsión Social	José Tomás, ERC.
Agricultura	Vicente Uribe, PCE.
Comunicaciones	Bernardo Giner de los Ríos, UR.
Sin cartera	José Giral, IR.
Sin cartera	Manuel de Irujo, PNV.

El 4 de noviembre se incorporaron al Gobierno cuatro ministros de la CNT: Juan García Oliver, Justicia; Juan López, Comercio; Federica Montseny, Sanidad y Asistencia Social; Joan Peiró, Industria. Jaume Ayguader, ERC, sustituyó a José Tomás como ministro sin cartera.

▪



Francisco Largo Caballero.

El nombramiento de un gobierno de coalición, con seis socialistas representando a la UGT y al PSOE en los principales ministerios, cuatro republicanos en posiciones secundarias, la participación de dos comunistas por vez primera en un gobierno de Europa, y la incorporación posterior, tras negociar la aprobación del Estatuto de autonomía del País Vasco, de un representante del PNV como ministro sin cartera, no detuvo el avance de los rebeldes. Fue este gobierno el que impulsó la reconstrucción del Ejército, y estableció, según decreto de 28 de septiembre, que pasaran a las escalas activas «todos aquellos Jefes, Oficiales y clases de milicias que debidamente controlados por la Inspección General de Milicias […] sean acreedores de ello». Al día siguiente, un nuevo decreto ordenaba la movilización de todas las clases e individuos de tropa pertenecientes al cupo de filas de los reemplazos de 1932 y 1933 que se encontraran dentro de las provincias que en esa fecha quedaban en zona republicana.

Fue más fácil ordenarlo que realizarlo, pero finalmente estos decretos constituyeron, en condiciones harto dramáticas, el embrión del nuevo Ejército de la República, cuando Madrid estaba a punto de sucumbir ante el avance rebelde. En esas últimas semanas de octubre, y al tiempo que la Unión Soviética se convertía en el principal apoyo exterior de la República, con México prestando también su ayuda, los comunistas españoles modificaban su posición en el entramado de fuerzas leales al unificar bajo su control a las nuevas generaciones socialistas y comunistas en unas nuevas Juventudes Socialistas Unificadas, que desempeñarán un importante papel en la movilización y encuadramiento de jóvenes. Habían culminado también la unificación de varios grupos socialistas y comunistas de Cataluña para crear el Partido Socialista Unificado deCataluña, que quedó, como la UGT catalana, bajo dirección comunista; y habían participado activamente en la creación de un ejército regular incorporando a los militantes que formaban parte de su Quinto Regimiento de Milicias en las filas del nuevo ejército popular en construcción.

Esta nueva influencia ejercida por los comunistas entre la clase obrera, los jóvenes y los militares, corría pareja con el imparable avance del ejército de África, que desde el paso del Estrecho el 5 de agosto protegido por los Savoia italianos, continuaba su progresión hacia Madrid por la Ruta de la Plata sin encontrar resistencia eficaz: el 30 de octubre ocupaba una línea a solo 15 kilómetros de la capital y el 4 de noviembre llegaba ya a Alcorcón, Leganés y Getafe; el 6, alcanzaba Campamento y los Carabancheles; el 7, Villaverde. Y, cuando ya vadeaba el Manzanares, el gobierno, que se había ampliado el día 4 con la incorporación de cuatro ministros de la CNT —Juan Peiró, Juan López, Juan García Oliver y Federica Montseny, todos ellos designados por la misma organización sindical—, dio por inevitable la caída de la capital. Fue por ello que resolvió trasladarla a Valencia y encomendar su improbable defensa a los generales José Miaja y Sebastián Pozas y a una Junta de Defensa, en la que de inmediato los jóvenes comunistas ocuparon puestos de responsabilidad. Quienes permanecieron en Madrid no pudieron interpretar estos hechos sino como una huida y se aprestaron a su defensa.

Contra todo pronóstico, los madrileños fueron capaces de organizar la defensa, y Madrid resistió el primer asalto frontal dirigido desde la Casa de Campo, y también rechazó los siguientes, deteniendo así el avance del ejército rebelde, una empresa en la que tuvieron especial relevancia dos fenómenos llamados a influir de manera perdurable en la política republicana. Por una parte, al organizar su defensa dos militares profesionales, el general Miaja, como presidente de la Junta de Defensa, y el teniente coronel Vicente Rojo, como jefe de su Estado Mayor, el ejército republicano mostró en la práctica su superioridad sobre las milicias. Por otra, el PCE, fortalecido por los envíos de armamento soviético y la presencia de las Brigadas Internacionales, decidió asumir «la gran tarea de defender Madrid» y hacerlo de forma que sus militantes comenzaran a «sobresalir dos palmos por encima de cualquier obrero de otra organización y de otros partidos». Las consignas de «No Pasarán» y «Resistir es Vencer», su política de «antes la guerra que la revolución», su capacidad para mantener el orden y disciplina, los trabajos en la fortificación de la ciudad, la defensa de los intereses de la muy numerosa clase media de pequeños propietarios, comerciantes y artesanos, y su mayor capacidad organizativa los convirtieron en una fuerza de apoyo político imprescindible para los mandos militares, que comenzaron a considerarlos como su mejor aliado. A partir de la batalla de Madrid, los comunistas adquirieron un mayor peso político mientras los

militares ampliaban su esfera de poder: dos factores que serán decisivos para el curso de la guerra y para el futuro del gobierno presidido por Largo Caballero.


¡NO PASARAN!
EL FASCISMO QUIERE CONQUISTAR MADRID
MADRID SERA LA TUMBA DEL FASCISMO 6

Cartel en las calles de Madrid que reza «No pasarán. El fascismo quiere conquistar Madrid. Madrid será la tumba del fascismo». Las consignas de «No pasarán» y «Resistir es Vencer», lanzadas por los miembros del Partido Comunista Español, se convirtieron en los lemas de la resistencia republicana durante el asedio de Madrid.

Porque la resistencia de Madrid revistió, en los duros combates que se sucedieron en torno a la Ciudad Universitaria, el puente de los Franceses y hasta el Hospital Clínico, el carácter de una epopeya en la que un pueblo sitiado se defiende contra tropas invasoras, legionarias y regulares, apoyadas desde el aire por los intensos bombardeos de la aviación nazi y fascista, destinados a provocar la desmoralización de la población. La llegada del material soviético, aviones incluidos, la entrada en acción de las Brigadas Internacionales, la incorporación a primera línea del frente de una columna de tres mil hombres al mando de Buenaventura Durruti, más los quince mil milicianos que por vez primera actuaban como soldados al mando de oficiales profesionales, levantaron la moral de resistencia de la población hasta el punto de obligar a las tropas rebeldes a suspender los asaltos frontales el 23 de noviembre.



Rendición de soldados republicanos en Somosierra.

No tuvieron más éxito los posteriores intentos de cercar la capital cortando las carreteras de La Coruña, con avances en Aravaca y Majadahonda a costa de numerosas bajas, ni la ofensiva en campo abierto por el valle del Jarama, que pudo ser contenido por las tropas al mando del general Pozas. Detenido el ataque, los republicanos pudieron pasar a la ofensiva, impidiendo a los sublevados alcanzar la carretera de Valencia: un empate, a costa de 40 000 bajas. Todavía habría otro intento de entrar en Madrid, tras la caída de Málaga en febrero, esta vez a cargo del llamado Corpo Truppe Volontarie, dispuesto a experimentar la táctica de la guerra relámpago en un ataque desde Guadalajara. Después de un avance espectacular, iniciado el 8 de marzo, los italianos tropezaron con un enemigo inesperado, una lluvia persistente que impidió intervenir a la aviación y atascó en fango el avance hasta que el general Roatta ordenó la retirada. Ni asaltada, ni cercada, la capital había resistido. Franco decidió entonces abandonar temporalmente la partida y destinar el grueso de sus tropas a la conquista de todo el Norte: la guerra sería larga.



Instantánea de un grupo de jovencísimos milicianos republicanos atacando una posición rebelde en la sierra de Madrid en el mismo verano de 1936.

Sindicatos frente a partidos

Entre los distintos partidos y sindicatos que sostenían al gobierno se multiplicaron, tras la defensa de Madrid, las iniciativas unitarias, convencidos todos de que para ganar la guerra no se podía seguir como hasta entonces, haciéndola cada cual por su cuenta. La fuerza siempre viva de la utopía, o el mito, de la unidad obrera como arma del triunfo, se manifestó de nuevo en las continuas llamadas a la unión o alianza que los dos sindicatos mutuamente se dirigieron. En enero de 1937, la Federación Local de Sindicatos Únicos de Madrid, de la CNT, evocando la sangre marxista y libertaria que corría por un mismo surco en las trincheras, dirigió a sus «hermanos de la UGT» una llamada para llegar «pronto a una unión apretada con lealtad, con sinceridad, con calor de efusión, con ansia fraternal, con anhelos de compenetración y amor». Los hermanos de la UGT respondieron con propuestas de unión del proletariado, mientras denunciaban la confusión y el desbarajuste que se manifestaba en el terreno político. En Valencia, comenzaron a celebrarse frecuentes reuniones entre la comisión ejecutiva de la UGT y el comité nacional de la CNT hasta el punto de anunciar que se estaban «jalonando los cimientos de algo que tal vez pueda ser definitiva y rápida solución del presente».

Este nuevo lenguaje tenía, por parte de la CNT, el propósito de llegar a una Alianza Obrera Revolucionaria como instrumento para someter todas las actividades de la guerra a un plan conjunto y a una sola dirección y eliminar «las maniobras de los profesionales de la política». La Alianza se presentaba como condición para mantener un firme control de los sindicatos sobre la producción y la vida social y como baluarte contra el que se estrellarían las maquinaciones políticas para desplazar a las organizaciones obreras de la dirección del Estado. La CNT insistía en su tradicional visión de la revolución social como «administración por medio de los sindicatos de todo cuanto ayer tenían en sus manos las clases capitalistas», una visión en la que no quedaba lugar alguno para «la política, el mangoneo de los charlatanes de la vida pública del país», que sería sustituida «por la administración directa de la economía».

Formar esta Alianza Obrera les parecía urgente porque percibían ya en el horizonte la amenaza de comunistas y socialistas, que si llegaban a formar el partido único del que tanto se hablaba en aquellas semanas pretenderían «dirigir políticamente lo que los sindicatos de productores habrían de administrar por sí mismos». La CNT no desesperaba del buen sentido de la UGT y daba por seguro que muy pronto se plasmaría en hechos concretos la Alianza. Mientras tanto, su prensa publicaba un Proyecto de bases de un Estatuto de Levante que contenía un proyecto muy avanzado de convertir la República, burguesa al fin y al cabo, en un Estado sindical: la función legislativa recaería sobre el Pleno Nacional de Regionales, que elegiría además al presidente del País Valenciano; el Consejo Ejecutivo Regional sería elegido por el presidente de entre una terna presentada por el Pleno para cada consejería; presidente y consejeros serían responsables individual y colectivamente, en el orden civil y criminal, ante el Pleno de Sindicatos.

No eran solo los sindicatos, también los partidos andaban a la búsqueda de la unidad que permitiera multiplicar sus fuerzas. Divididos los socialistas desde la revolución de octubre de 1934, la facción de izquierda, controlada por Largo Caballero, proponía a la dirección del Partido Comunista la fusión de los dos partidos marxistas y la unificación total del proletariado español en un solo partido que acabara forjando el «órgano político de la Revolución». Era una propuesta insólita en la historia del socialismo español, que los comunistas dejaron correr, más interesados por estrechar relaciones con la otra facción, liderada por Indalecio Prieto, que controlaba la ejecutiva del PSOE y que acababa de dirigir una circular a todas sus agrupaciones dándoles cuenta de la necesidad y la urgencia de un estrecho contacto «entre nuestro Partido y el Comunista, de igual raigambre marxista y de coincidencias cada día mayores en la apreciación de los problemas del momento».

Al recibir los requerimientos de las dos facciones del socialismo, los comunistas percibieron de inmediato la oportunidad de convertirse en árbitros de la disputa interna del socialismo y acordaron la creación de un comité de enlace con la ejecutiva del PSOE, pero señalando la conveniencia de que se invitara a formar

parte de ese comité a la UGT, porque de esa forma «estarían representadas las dos corrientes del partido». La UGT aplazó su puesta en marcha, aduciendo que debía resolver antes los problemas de sus relaciones con la CNT, que le presionaba desde el otro frente para formar una alianza puramente sindical. La dilación en incorporarse al comité explica las presiones que durante esas semanas ejercieron los comunistas, comenzando por el delegado de la Internacional, Victorio Codovilla, y el embajador Rosenberg, ante Largo Caballero para que impulsara el proceso unificador que su propia facción había propuesto a principios de enero. Largo rechazó esas presiones calificándolas de intolerable intromisión de los soviéticos en la política española.

La entrada de las tropas franquistas y de los legionarios italianos en Málaga el 8 de febrero, con la brutal matanza que siguió a su conquista, agravó la distancia entre el presidente del Gobierno y el Partido Comunista, que suscitó un agrio debate sobre el papel de los sindicatos en la política. El gobierno, lamentaba Largo Caballero ante Azaña, no carburaba; los ministros de la CNT trataban de ayudar y predicaban la disciplina, pero las masas no obedecían; la militarización avanzaba más lentamente de lo deseado; los choques entre unos y otros, con resultado de muerte, abundaban; la falta de coordinación entre los distintos ministerios y el gobierno central y los poderes regionales o provinciales impedían una eficaz organización de la defensa.

Ante semejante panorama, Azaña preguntó a Largo si creía llegado el momento de prescindir de los ministros de la CNT y, como el presidente del Consejo le dijo que no, respondió que entonces tendría que sustituirlos. No era en eso en lo que pensaba Largo, sino en la posible formación de «un gobierno con las dos sindicales y todo lo más unas gotas de los partidos», una idea que Azaña rechazó de plano: jamás presidiría «una república sindical». Tampoco los partidos políticos estaban dispuestos a seguir esa deriva: el comité nacional del PSOE había llamado la atención de sus militantes sobre los peligros inherentes a la «sobreestimación de los sindicatos». Los sindicatos, añadía el comité, debían constreñirse a su misión específica, sin crear milicias ni justicias propias, sin ensayar nuevas formas de economía ni emitir órdenes que interfirieran con las de los partidos. El comité reafirmaba la doctrina tradicional que situaba al partido político como rector y al sindicato como auxiliar en la lucha política: era un error

atribuir al sindicato, como a un nuevo Saturno revolucionario, la misión de «disminuir, sustituir y devorar a los partidos políticos».

Que los sindicatos se limitaran a su función y dejaran la política en manos de los partidos: tal era la exigencia en que el comité nacional del PSOE coincidía con los dirigentes comunistas que, por su parte, plantearon ante el presidente de la República, a mediados de marzo de 1937 y como resultado de la caída de Málaga, la necesidad de sustituir a Largo Caballero al frente del Ministerio de la Guerra aunque mantuviera la presidencia del Consejo. Ellos estaban también, como Azaña, «contra las sindicales» y por estarlo decidieron acelerar su entendimiento con el PSOE y con los republicanos. El acercamiento culminó en el acuerdo de 15 de abril por el que ambos partidos decidieron constituir comités de enlace en todos los niveles de sus respectivas organizaciones, prescindiendo ya por completo de la UGT. Era una buena plataforma para emprender una ofensiva en toda regla contra el presidente del Consejo.



El Almirante Cervera fue uno de los tres buques que dispararon sus cañones contra los milicianos y los civiles que huían de Málaga por la carretera de Almería, ante el avance de las tropas franquistas. El ataque, producido el 8 de febrero de 1937, causó la muerte de miles de civiles.

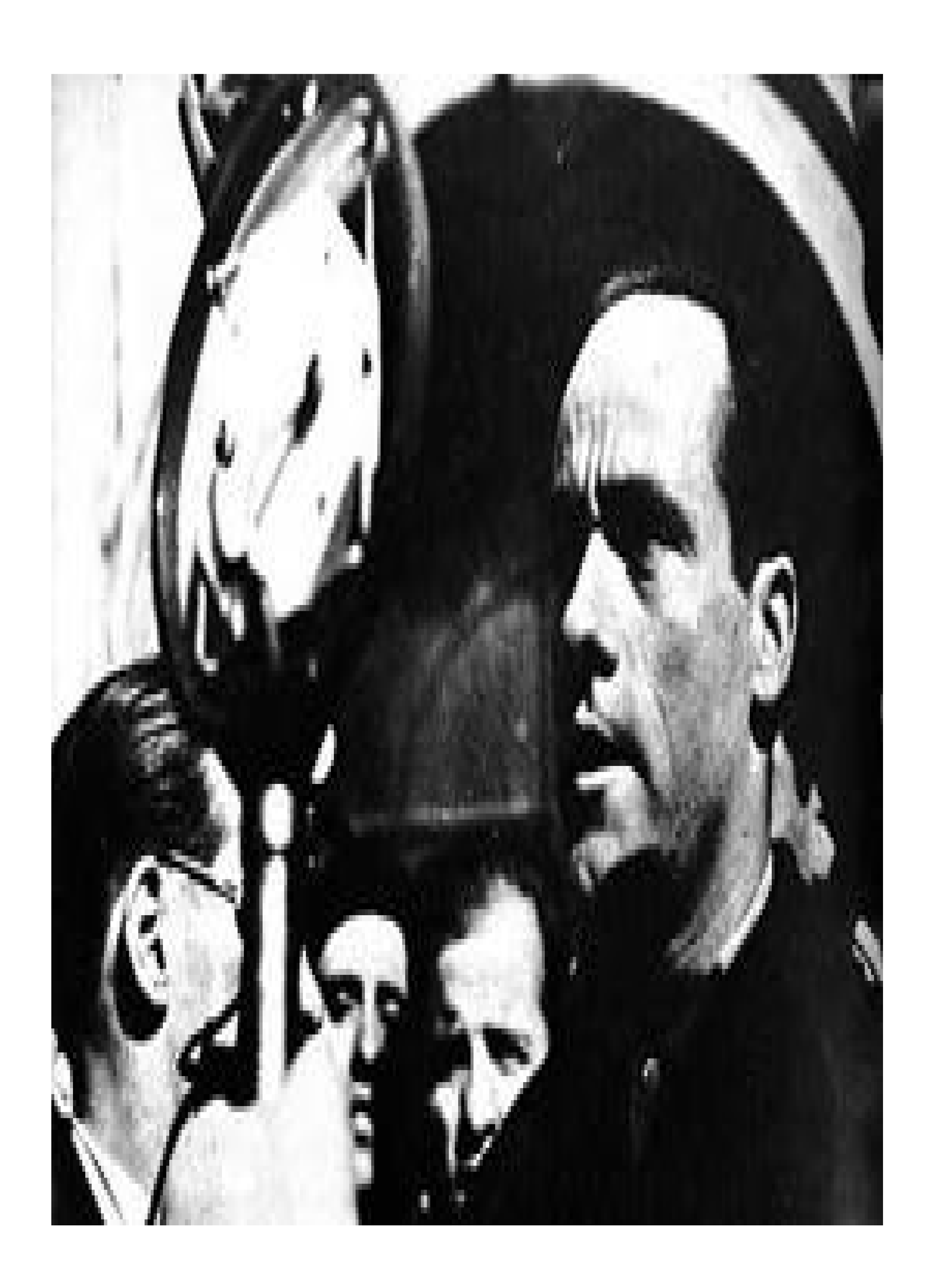
Crisis de mayo

La crisis se abrió, en efecto, como consecuencia de los enfrentamientos iniciados en Barcelona el 3 de mayo de 1937, cuando un destacamento de la Guardia de Asalto intentó recuperar para la Generalitat el edificio de la Telefónica, ocupado por la CNT. Varios grupos del sindicato respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha, en un intento de imponer una dirección revolucionaria a quienes siempre había considerado como revolucionarios descarriados. Los incidentes entre policías de la Generalitat y patrullas de la CNT y los asesinatos de dirigentes comunistas y anarcosindicalistas se habían sucedido desde enero, pero ahora la lucha se extendió por toda la ciudad, pues en el otro bando, la Generalitat y el PSUC hicieron frente a la rebelión, provocada en buena medida por ellos mismos, para inclinar a su favor el control del orden público en Cataluña y, de paso, liquidar al POUM, acusado de trotskista.

Era la quiebra total de la coalición que había gobernado Cataluña desde la revolución de julio: Esquerra Republicana no había podido controlar a la CNT, ni el PSUC había podido liquidar al POUM; ahora unían sus fuerzas iniciando así lo que bien podía entenderse como una guerra civil dentro de la guerra civil. La lucha, que se prolongó varios días, estuvo a punto de ocasionar una intervención de las fuerzas de Marina y Aire enviadas por el Gobierno central; finalmente fue evitada gracias a la mediación de los ministros y dirigentes nacionales de la CNT, que convencieron a sus correligionarios de deponer las armas, no sin que se abriera dentro de la misma CNT una profunda crisis que no se resolvería en el futuro y sin que, entre comunistas, comenzara el intento de liquidación de los dirigentes del POUM, que conduciría al asesinato de Andreu Nin.

El presidente de la República se encontró en el centro de la batalla, encerrado en el palacio de Pedralbes y sin posibilidad de moverse de allí, atrapado entre dos

fuegos. Azaña era por entonces un crítico acerbo de lo ocurrido en la República desde septiembre de 1936: lo que muchos llamaban revolución no era para él sino «abundancia de desorden», inevitable cuando la revolución carece de un contenido político, de pensamiento, de autoridad, de capacidad organizadora y de eficacia con respecto a los fines que la desatan. No reprochaba a los revolucionarios que lo fueran, sino que se mostraran incapaces de llevar a cabo la revolución que proclamaban. Una revolución —escribió por aquellos días— necesita apoderarse del mando, instalarse en el gobierno, dirigir al país según sus miras. No lo ha hecho. Por falta de fuerza, de plan político, de hombres con autoridad, se había creado la situación propia de los alzamientos que empiezan y no acaban, que infringen todas las leyes y no derriban al gobierno para sustituirlo; una situación de «indisciplina, anarquía, desorden», de la que se había derivado «la impotencia y el barullo» ante los que el gobierno no había podido nada.



El líder anarquista Juan García Oliver lanza un llamamiento radiofónico para pedir la unidad ante los hechos de mayo de 1937.

El análisis de Azaña expresaba un pensamiento muy extendido en abril de 1937: que el gobierno presidido por el secretario general de la UGT, con una sustancial presencia de dirigentes de la CNT y una representación subalterna de partidos políticos no podía continuar por más tiempo. Mientras los dos grandes sindicatos hablaban de sellar su alianza revolucionaria, el PSOE se había aproximado al PCE para contrarrestar la sindicalización del Estado y reducir a los sindicatos a una función económica. Fue esa situación de enfrentamiento entre sindicatos y partidos lo que hizo posible que el presidente de la República, que compartía la idea de separar la presidencia del Consejo de Ministros del Ministerio de la Guerra, recuperara la capacidad de iniciativa perdida desde noviembre de 1936 y asumiera un decisivo papel en la búsqueda de una solución a la crisis abierta tras lo sucedido en Barcelona. Finalmente, pudo salir de Pedralbes, se trasladó a Valencia y, en conversación con Giral, comprobó que el acuerdo alcanzado entre comunistas, socialistas y republicanos era sólido y que todos ellos formaban una piña que facilitaría cualquier solución.

La crisis política estalló cuando los dos ministros comunistas abandonaron la reunión celebrada por el gabinete el 14 de mayo tras comprobar que Largo no estaba dispuesto a emprender una implacable persecución contra el POUM. Prieto advirtió a Largo Caballero, que pretendía continuar la reunión como si nada hubiera ocurrido, que eso abría una crisis de gobierno y que debía comunicarlo enseguida al presidente de la República. Azaña recobraba así la necesaria libertad para resolver la crisis en el marco del acuerdo previo gestado en las últimas semanas entre socialistas, comunistas y republicanos. Estaba claro que el futuro presidente de gobierno no podía proceder de las filas republicanas, ya que no sería aceptado por los demás y habría que dar en ese caso «por descompuesto e inutilizado el Frente popular». Tampoco podía ser un comunista, hipótesis que ni siquiera se planteó. No quedaban más que los socialistas, pero de estos, descontados los caballeristas, quedaban únicamente los de la facción prietista, que controlaban la ejecutiva. La opción parecía clara: Prieto. Eso era, al

menos, lo que casi todo el mundo esperaba.

Azaña eligió, sin embargo, a Negrín, aunque disponiendo la fusión de los Ministerios de Guerra y de Marina y Aire en un nuevo Ministerio de Defensa que sería confiado a Prieto, mientras Gobernación iba a uno de los socialistas más cercanos a sus posiciones, Julián Zugazagoitia. El Partido Comunista mantuvo los dos ministerios que ya ocupaban Jesús Hernández y Vicente Uribe; Giral sustituyó a Álvarez del Vayo en el Ministerio de Estado; Manuel Irujo, del PNV, se hizo cargo de Justicia; Jaume Ayguader, de Esquerra Republicana, de Trabajo y Asistencia Social, y Bernardo Giner de los Ríos siguió en Comunicaciones, con Transportes y Obras Públicas. Un gobierno más reducido y, en efecto, de Frente Popular, del que los sindicatos quedaron desplazados, con predominio socialista/comunista y presencia, con un solo representante cada uno, de los partidos republicanos y nacionalistas catalanes y vascos, presidido por lo que Azaña consideraba «la tranquila energía de Negrín». «La gente, al enterarse, dijo ‘ufff’», escribió en su diario, aliviado al culminar sin mayor sobresalto una operación que se anunciaba muy conflictiva.

▪

Primer Gobierno de Juan Negrín

Presidencia y Hacienda y Economía	Juan Negrín, PSOE.
Estado	José Giral, IR.
Justicia	Manuel de Irujo, PNV.
Defensa Nacional	Indalecio Prieto, PSOE.
Gobernación	Julián Zugazagoitia, PSOE.
Instrucción Pública y Sanidad	Jesús Hernández, PSOE.

Obras Públicas y Comunicaciones	Bernardo Giner de los Ríos, UR.
Trabajo y Asistencia Social	Jaume Ayguarder, ERC.
Agricultura	Vicente Uribe, PCE.


LORCA

Juan Negrín (1892-1956), presidente de la Segunda República entre 1937 y el final de la guerra civil y más allá, en el exilio.

▪

De este gobierno esperaba el presidente de la República que restableciera la autoridad y el poder del gobierno central; que reorganizara y reforzara el ejército y unificara los planes militares bajo un solo mando; que estrechara, después de los recientes conflictos, las relaciones con los gobiernos vasco y catalán y que restableciera el orden público y las garantías jurídicas de los ciudadanos. Fueron estas, además, las indicaciones que el nuevo gobierno recibió de Azaña en la primera sesión celebrada con él, en la que transmitió a los ministros sus dos grandes preocupaciones: consolidar la autoridad del gobierno en materias de Orden Público y de Guerra y buscar la mediación internacional o, como lo había expresado en otras ocasiones: defensa en el interior, lo que requería reconstrucción del Estado y del Ejército; y no perder la guerra en el exterior, lo que implicaba una acción diplomática dirigida a convencer a las potencias democráticas de que sustituyeran la política de No Intervención por una positiva acción de mediación. Azaña creía necesario preparar políticamente el desenlace de la guerra, empezando por aquello que podría alterar la situación a favor de la República: la retirada de extranjeros bajo control internacional que se acompañaría de lo que llamaba una suspensión de armas que, añadida al creciente cansancio de la población, haría muy difícil reanudar la guerra. Y esa fue también una de las principales razones por las que confió a Negrín la presidencia del gobierno.

Carta colectiva del episcopado español

El problema de una mediación en España también había sido objeto de atención en medios intelectuales católicos, españoles y franceses, que formaron el Comité por la paz civil en España, presidido por Alfredo Mendizábal, y el Comité pour la paix civile et religieuse en Espagne, que presidió Jacques Maritain, que en un prólogo al libro Aux origines d’une tragédie, de Mendizábal, negaba a la guerra civil el carácter de guerra santa. Estos comités elaboraron un plan de mediación, muy similar al de Manuel Azaña, que comenzaría con una declaración de las potencias —Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Unión Soviética— sobre su intención de preservar la paz en Europa. Una vez proclamada esa voluntad, las potencias se dirigirían a la Junta Militar preguntándole si, con el propósito de salvaguardar la paz y la civilización europeas, estaría dispuesta a suspender las hostilidades durante el tiempo necesario para que delegados del Comité de Londres estudiaran sobre el terreno las posibilidades de que España, «por medio de la libre expresión de la voluntad del país, llegara a una solución pacífica de su conflicto armado». Si la respuesta era afirmativa —y lo sería si Alemania e Italia lo querían—, las potencias se dirigirían al Gobierno de la República y le pedirían lo mismo que a la Junta Militar, que permitiera a una delegación realizar sobre el terreno el estudio de las posibilidades de paz. A las respuestas de la Junta Militar y del Gobierno de la República seguiría una tregua entre las dos partes, la repatriación de todas las tropas extranjeras y voluntarias y la elaboración por las cinco potencias de un plan, que todos se comprometían de antemano a aceptar, por el que la nación española expresaría su voluntad sobre el régimen que quería darse en el futuro.

Giuseppe Pizzardo, enviado del Vaticano y secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, entregó al secretario del Foreign Office, Anthony Eden, este documento durante su visita con motivo de la citada coronación de Jorge VI y trasladó al cardenal Gomá una copia en una entrevista concertada en Lourdes el 22 de mayo para que los obispos españoles consideraran la posibilidad de apoyar una mediación que pusiera fin a la guerra.

Gomá, que además de primado de España ejercía como representante oficioso del Vaticano ante el gobierno de Burgos, acababa de mantener dos horas de interesante conversación con el general Franco, que se había quejado duramente de que la prensa católica de Francia, Inglaterra y Bélgica, por malquerencia tradicional, por miedo a situaciones de dictadura, por la acción neutra del populismo contemporizador, por la influencia del judaísmo y la masonería y por el soborno de algunos directores o redactores de periódicos, estaba totalmente disociada del criterio del episcopado español. Para contrarrestar el efecto de esa actitud hostil, Franco pidió a Gomá que el episcopado español publicara un escrito «sobrio, breve, absolutamente ajustado a la verdad», que pusiera «en buena luz las características de las dos Españas que hoy se baten en duelo tremendo».

■

«La victoria es una ilusión»

Azaña partía del supuesto de que era imposible para la República ganar la guerra. «La victoria es una ilusión», le dijo a Ángel Ossorio, embajador en París, ya en septiembre de 1936. Y como Ossorio le replicara que entonces había que tratar con Franco, le contestó: «No lo creo; hay que defenderse y procurar que no perdamos la guerra en el exterior». A este principio se atuvo desde entonces y en plena crisis de mayo ofreció a Julián Besteiro la representación oficial de la República en la ceremonia de coronación de Jorge VI con objeto de explorar las posibilidades de una gestión de paz de la que se encargaría el gobierno británico. Madrid había resistido, y los italianos acababan de fracasar en su intento de tomar la capital desde Guadalajara. Había razones para esperar una salida negociada y así se había expresado el diputado conservador Winston Churchill. Besteiro habló, pues, con Eden, que necesitaba pruebas de la buena voluntad italiana para seguir con su política de seguridad y prestó más atención de la acostumbrada a la propuesta que le transmitía. Preguntó a los embajadores concernidos que sondearan a sus gobiernos ante la posibilidad de una mediación en España y aprovechó la presencia en Londres del enviado de Pío XI a la misma ceremonia, Giuseppe Pizzardo, para preguntarle si Italia se uniría a una llamada conjunta de las potencias en favor de un armisticio.

Así aleccionado por el general Franco, no es sorprendente que al escuchar a Pizzardo se convenciera Gomá de que «fuera de España no se sabe, al menos de la blanca, ni la media de la misa», como le escribió al obispo Gregorio Modrego, manifestándole su cansancio y desorientación tras aquella entrevista con el enviado de la Santa Sede que calificó de una lástima y una vergüenza. Desolado porque en Roma no se percataban de la naturaleza de la guerra civil y de la necesidad de que la guerra terminara con un vencedor y un vencido, Gomá respondió a Pizzardo, y este comunicó al consejero de la embajada de Italia ante la Santa Sede que «el pensamiento dominante entre los nacionales era el del retorno a la Monarquía» y que en poco tiempo los nacionales conseguirían «una victoria brillante que significará el principio de una completa derrota de los rojos». Si «los nacionales» pretendían restaurar la monarquía y si estaban en vísperas de un resonante triunfo, ¿cómo podía ocurrírsele a un enviado del Vaticano proponer una especie de armisticio con los rojos a punto de ser derrotados?



El cardenal Isidro Gomá convenció a Giuseppe Pizzardo, representante de la Santa Sede, de la conveniencia de que la guerra acabara con un vencedor y un vencido.

Tres días después de su decepcionante entrevista, Gomá escribió a Pizzardo confesándole que desconocía las iniciativas de algunos políticos extranjeros sobre el armisticio y afirmando «rotundamente que toda mediación en este punto estaba condenada al fracaso» por la muy simple razón de que un armisticio a aquellas alturas de la guerra no sería más que «un voto y un auxilio a una de las partes que ve perdida su causa». El pueblo anhela la paz, reconocía el cardenal, pero no está cansado de la guerra, que juzga necesaria para lograr una paz decorosa y duradera: la cuestión fundamental, de vida o muerte, solo podrá ventilarse en los campos de batalla, cualquier otro arreglo haría que algún día resurgiera el problema con más virulencia. Y así, el cardenal Gomá, tras pedir formalmente a la Santa Sede que no colaborara en la consecución de un armisticio, se aplicó a escribir la carta que el general Franco le había solicitado y que puede considerarse como el infranqueable obstáculo opuesto por la Iglesia católica española a considerar la eventualidad de una mediación que pusiera fin a la guerra sin un vencedor ni un vencido, para luego decidir el futuro del Estado por medio de una consulta a la nación.

La guerra, se decía en la Carta colectiva del episcopado español a sus hermanos de todo el mundo, fechada el 1 de julio de 1937, era ya el «plebiscito armado», el levantamiento cívico-militar que había tenido en la conciencia popular un doble arraigo, el del sentido patriótico y el del sentido religioso, y que, por tanto, no podía terminar más que «con el triunfo del Movimiento Nacional». Para defender esa doctrina, los obispos recurrieron al argumento ya utilizado por los militares para legitimar su rebelión, que será idéntico al que utilizará la comisión de juristas encargados por Ramón Serrano Suñer en diciembre de 1938 de dictaminar sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936. Los obispos compartían el veredicto según el cual el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero no pasó de ser un fraude porque, según sus cuentas, las derechas consiguieron ochocientos mil votos más que las izquierdas aunque

fueran estas las que cosecharon más escaños. De ahí que la rebelión contra un poder así constituido fuera, además de santa por su fin, legítima por su origen: la guerra solo podía terminar con el triunfo total de los que se levantaron contra un gobierno ilegítimo.

La caída del Norte

¿A qué victoria brillante, preludio de la completa derrota de los rojos, se refería el cardenal Gomá cuando se negaba a tomar en consideración ningún plan de mediación? Sin duda, a la ofensiva desplegada en el Norte desde el 31 de marzo por cuatro brigadas navarras y las tropas italianas al mando del general Roatta, dispuestas a romper las dos líneas de fortificaciones que defendían Bilbao y proseguir su ofensiva sobre Santander y Asturias, aisladas del resto de la República y sin posibilidad ninguna de defensa aérea. Tras duros combates, con la costa cantábrica bloqueada por la marina franquista, aviones italianos y alemanes bombardearon durante tres horas, el 26 de abril, la villa de Gernika hasta dejarla completamente arrasada en la primera avalancha aérea de la historia destinada a incendiar una ciudad para destruir en el fuego la moral de sus ciudadanos. Era un día de mercado y los muertos se contaron por centenares.

Bilbao cayó sin que de nada sirviera el cinturón de hierro construido para su defensa, haciendo bueno el presagio de Azaña cuando escribió que una vez vencida la defensa en el campo, la villa no resistiría. Sin cumplir la orden de destruir las instalaciones industriales, los batallones vascos desobedecieron también la de replegarse hacia Santander y Asturias para continuar allí la lucha y se rindieron el 26 de agosto en Santoña ante las tropas italianas.

Dueños del aire y con una abrumadora superioridad en hombres y artillería, las tropas al mando de los generales Aranda y Solchaga culminarán su ofensiva el 21 de octubre, a pesar de la fuerte resistencia y de las pausas y demoras impuestas por las sucesivas maniobras de distracción republicanas en Segovia, Brunete y Belchite, iniciadas invariablemente con la ruptura del frente enemigo y la ocupación de unos kilómetros de terreno, y seguidas luego por las contraofensivas que acababan siempre con el repliegue a las posiciones de partida.

Y es que la guerra civil se había transformado, en estos meses de la primavera y el verano de 1937, de unos enfrentamientos entre miles de milicianos mal armados en una auténtica guerra entre ejércitos regulares, formados en regimientos, divisiones y cuerpos de ejércitos por decenas de miles de hombres a las órdenes de militares profesionales, procedentes o no de las milicias. Educados la mayoría de ellos en las tácticas y estrategias de la Gran Guerra, ocupar terreno se convirtió en una obsesión, en el principal fin de toda operación militar. De ahí la concentración de hombres y material de guerra destinados a romper un frente, aprovechando la sorpresa o las condiciones del terreno, para ocupar una loma, un pueblo, sin tener muy claro cómo se podría mantener la conquista ni cómo seguir avanzando tras las primeras posiciones ocupadas. De ahí también que en los «enfrentamientos de carneros» por la ocupación o defensa de lugares de nulo o dudoso valor estratégico comenzaran a contarse las bajas por decenas de miles, como ocurrió en las tres ofensivas del nuevo ejército de la República —reorganizado por Indalecio Prieto y su jefe de Estado Mayor, el ya general Vicente Rojo y fuerte ahora con más de medio millón de hombres en sus filas—, destinadas a aliviar la presión sobre los territorios del Norte pero guiadas también por la expectativa de que de la ruptura del frente enemigo, y de la combustión de sus reservas en el intento de taponarlo, se derivaría un cambio en el curso de la guerra: era una vez más la doctrina de la batalla decisiva, directamente heredada de los estrategas de la Gran Guerra.



Imagen de Gernika en ruinas. Pronto, la destrucción de esta villa se convirtió en el símbolo de la guerra que amenazaba Europa.

▪

La guerra civil en la Exposición Universal de París

Gernika pasó a ser símbolo de la guerra que amenazaba a Europa cuando la exposición de París abrió sus puertas y en el pabellón de España apareció colgado el cuadro que el gobierno de la República había encargado a Pablo Picasso en enero de 1937. El pabellón, obra de Luis Lacasa y de Josep Lluís Sert, con la Columna de Alberto, a la que puso el título El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, a su entrada, y con la Cabeza de mujer y la Dama oferente, también de Picasso, La Montserrat de Julio González y las Cabezas de Emiliano Barral, además del monumental El payés catalán en revolución, pintado sobre una de las paredes por Joan Miró, compendia el extraordinario esplendor vivido por la arquitectura, la escultura y la pintura españolas durante los años de República, y por el fotomontaje y el cartel, presentes también en el pabellón, con obras de Josep Renau.

El Guernica era como un grito lanzado por la República desde París a las potencias democráticas que con la farsa de la No Intervención la habían abandonado a su suerte, y era como un anuncio del horror y espanto que esperaba a Europa si Francia y Gran Bretaña seguían mirando hacia otro lado. No se trataba solo de una obsesión de políticos o artistas españoles. También André Malraux, con l'Espoir, o Bernanos, con Les grands cimetières sous la lune, advertirán muy pronto de que la guerra de España era algo más que una guerra civil entre españoles, un presagio sombrío de lo que habría de ocurrir en Europa si nadie hacía frente al fascismo.



Fragmento de la reproducción del cuadro de Picasso en un mosaico de azulejos que se expone en Gernika.

▪

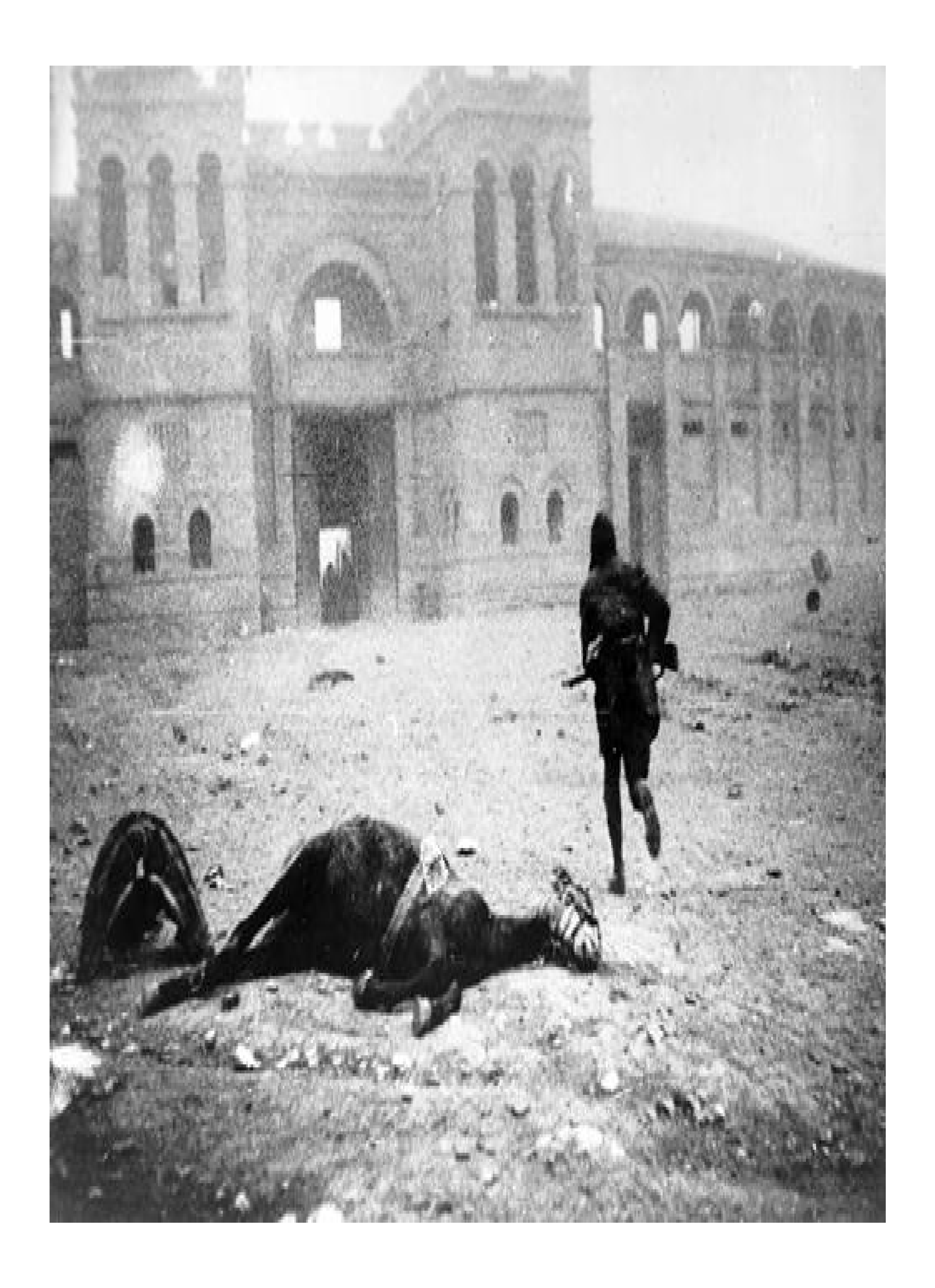
La República pasa al ataque

~ Octubre de 1937-julio de 1938 ~

Cuando comienza el otoño de 1937, la marcha de la guerra, tras la conquista de toda la cornisa cantábrica por las tropas franquistas, parecía inclinarse lenta pero progresivamente del lado de los rebeldes. Negrín, en todo caso, había reforzado su posición y trasladado a finales de octubre la sede del Gobierno a Barcelona, después de haber recuperado el control del orden público en Cataluña y haber disuelto el Consejo de Aragón en agosto por la fuerza de las armas. Fue entonces cuando el ya general Rojo, jefe del Estado Mayor Central de la República, concibió una brillante ofensiva sobre Teruel con el propósito de entorpecer un nuevo ataque de Franco sobre Madrid. Dos semanas antes de que se desencadenase la batalla, The Guardian publicó extractos de sendas entrevistas mantenidas por Negrín y por Franco con corresponsales extranjeros. El primero dijo, en broma, que establecería su próxima residencia en Zaragoza. La guerra, añadió, terminará en dos años más, palabras que fueron interpretadas como el definitivo rechazo a los planes de armisticio de los que por entonces se hablaba. El segundo, incapaz de bromear, fue más directo: «¡Impondré mi voluntad por la victoria y no entraré en ninguna discusión!», exclamó ante el periodista, que le preguntó si eso significaba un desmentido de los rumores según los cuales estaba dispuesto a un intercambio de puntos de vista con las potencias europeas con vistas a una mediación. Y Franco, muy en su estilo, respondió: «Exactamente».

La guerra, pues, continuaba, pero contra lo que todo el mundo esperaba, la gran ofensiva de invierno no fue lanzada por los rebeldes sino por los leales a mediados de diciembre de 1937 y, para gran sorpresa de todos, culminó con la toma de Teruel por las tropas republicanas y la efusiva felicitación que los generales Rojo y Hernández Saravia dirigieron el 8 de enero de 1938 al ministro de Defensa, Indalecio Prieto, y al presidente del Gobierno, Juan Negrín, expresándoles su deseo de «poder seguir bajo la dirección de ustedes hasta el triunfo total». Entendían ambos militares que esta vez se trataba de una batalla decisiva que cambiaba el rumbo de la guerra. Eufórico, Prieto exclamó que su ministerio tendría que denominarse en adelante de la Defensa y del Ataque. Y todavía en su discurso ante el Congreso de los diputados el día 1 de febrero de 1938, Negrín repitió que la guerra no podía terminar «más que con el triunfo

incondicional del pueblo español y del Gobierno legítimo de la República».



Un soldado republicano corre ante la plaza de toros de Teruel durante la batalla por el control de la ciudad a principios de 1938.

Pero, convencidos de haber asestado un golpe definitivo al enemigo, de haber desbaratado sus planes de llevar a cabo una ofensiva sobre Madrid y consumido sus reservas, y de haber provocado la admiración en las cancillerías extranjeras, al final resultó todo lo contrario. Franco suspendió, en efecto, su ofensiva sobre Guadalajara, abandonando así los planes de un inmediato ataque a Madrid, y envió lo mejor de su ejército a la reconquista de Teruel, que cayó en sus manos, tras una fuerte contraofensiva por el río Alfambra, el 20 de febrero. Dos semanas después, el 7 de marzo, en una avalancha dirigida por el general Dávila en la que participaron cinco cuerpos de ejército al mando de los generales Yagüe, Varela, Solchaga, Moscardó y Aranda, los nacionalistas reiniciaron la contraofensiva con el objetivo de alcanzar el Mediterráneo y partir en dos el territorio de la República.


GRADAS
TRITURADORES

Soldados republicanos avanzando por las calles de Teruel.

Lo alcanzaron el 15 de abril. Tras la ofensiva de Aragón y el acceso al Mediterráneo, Cataluña había quedado aislada. «Nosotros derrochamos nuestro Ejército de Maniobra y no teníamos ningún tipo de reserva», escribiría Stoyan Minev, delegado de la Internacional Comunista en España, conocido como Stepanov. El fin estratégico de destruir las reservas del enemigo, como se supone que ocurre en las batallas decisivas, acabó tras el repliegue republicano con la destrucción de las propias: «en dos o tres días, el frente del Este se derrumbó en una extensión de más de 300 kilómetros. Esto da idea de la magnitud de la catástrofe en la que desaparece el Ejército con todo su armamento», escribirá en el verano de 1939 el Partido Comunista en un informe secreto dirigido a Stalin. Y Julián Zugazagoitia, ministro de la Gobernación, no recordará otra cosa: «La desmoralización es grande, es todo el frente el que se ha hundido. El adversario es dueño de la situación».

Antes de que el derrumbe se consumara, Manuel Azaña había conversado largamente el 24 de febrero con Eric Labonne, embajador de Francia, para sugerirle la firma de un acuerdo que pondría a disposición de Francia y Gran Bretaña las bases navales de Cartagena y de Mahón con objeto de equilibrar las de Ceuta, Málaga y Palma, en manos de los rebeldes. «¿Qué harían ustedes si esas bases cayeran también en manos de los invasores de España?», le preguntó. Con la habitual lucidez con que había juzgado la política franco-británica desde los días de la rebelión militar, Azaña había entendido correctamente la reciente dimisión, o destitución, de Anthony Eden como secretario del Foreign Office: Chamberlain y Halifax tenían prisa por llegar a un acuerdo con Mussolini sin exigir previamente la retirada de las tropas italianas de España, y él —dijo al embajador— estaba convencido de que Francia seguiría por el mismo camino. «¿Debemos resistir? ¿Debemos oponernos o permanecer inertes?», se preguntó. «No lo creo. Hay que entrar sinceramente en estas perspectivas y en este juego», como diciendo: puesto que Gran Bretaña y Francia se disponen a efectuar concesiones a Alemania e Italia, sepan que la República española estaría dispuesta a seguir el juego concediéndoles a ustedes instalaciones en sus bases

navales. Y para convencer al embajador de que hablaba en serio, le recuerda que su autoridad había crecido durante los últimos meses y que estaría en condiciones de presionar a su propio gobierno en esa dirección.

Por su parte, el presidente del Gobierno, después de urgir al embajador en Moscú, Marcelino Pascua, una gestión directa ante Stalin para la concesión de un crédito que permitiera realizar una importante compra de armamento, y tras recibir noticias esperanzadoras de la disposición del presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, a permitir la venta de armas, volaba a París el 8 de marzo a pedir auxilio militar al gobierno francés, enfrentado esos días a la crisis provocada por la anexión de Austria por el Tercer Reich. En Barcelona, los ministros se reunían paralizados por la duda de solicitar de la embajada francesa una mediación urgente de tipo humanitario que pusiera fin a la guerra o mantener a toda costa la resistencia con la única esperanza puesta en la llegada de una masiva ayuda francesa por la frontera pirenaica. José Giral, ministro de Estado, visitó también a Labonne para informarle de que el ejército republicano, formado con tropas demasiado jóvenes, no había podido resistir a las formaciones motorizadas y a los terribles bombardeos de la aviación. «¿Qué debemos hacer?», le preguntó: «¿Debemos pedir un armisticio por intermedio de las potencias amigas o neutras? ¿Debemos dirigirnos directamente al general Franco que nos responderá con toda seguridad: rendición sin condiciones? ¿Debemos declarar que la resistencia prosigue hasta el final…?» El embajador, incapaz de proponer ninguna política, se limitó a ofrecerle su domicilio, en Caldetas, «y un barco para recibir a las personalidades y a sus familias».

Crisis política en Barcelona

Al día siguiente, 16 de marzo, con Negrín ya de vuelta, el gobierno mantuvo una reunión en presencia del presidente de la República. Una gran manifestación con la consigna «Ningún compromiso, ninguna capitulación, expulsar del gobierno a los capitulacionistas, Gobierno de guerra» había silenciado a quienes aún dudaban entre poner fin a la guerra o resistir. Poco antes de la reunión, Negrín pidió a Prieto y Zugazagoitia, como correligionarios suyos, que si alguien en el consejo proponía que se entablaran negociaciones de paz, se sumaran los dos a su criterio negativo. Él, por su parte, se encargó de explicar las razones que le movían a considerar inaceptables las propuestas del gobierno francés y a responder negativamente al embajador asegurándole que cualquier tentativa de mediación sería vana, que estaría condenada al fracaso total, que, aun si la quisiera el general Franco, los alemanes y los italianos opondrían un veto y que el único resultado sería un debilitamiento de la confianza del ejército y de la moral de retaguardia. En el curso de la entrevista, el presidente del Gobierno exclamó: «La resistencia no tolera estas vacilaciones. Yo sabré restablecer el buen orden. Por muy altas que estén situadas las resistencias, serán quebrantadas». Días después, le ratificó que no había más que una línea, una línea recta, la resistencia, la movilización, el estado de sitio y para expresarle una vez más su fe en la batalla definitiva: «Fuerte gracias al apoyo de las masas en todo el territorio de España, volveremos a tomar ventaja: la primera gran victoria republicana será suficiente; será la victoria total».

Todo lo que se requería en aquella situación militar era resistir, afirmó Negrín en una alocución por radio emitida el día 28, el mismo día en que su gobierno entró en crisis. La consigna que había corrido a mediados de noviembre de 1936 por las trincheras y por las calles de Madrid recuperó todo su vigor para una situación bien diferente: ¡Resistir es vencer! ¡Resistir! La orden es terminante, clamaba Negrín en su alocución dirigida por igual a todos los españoles, a los que combaten en el frente y a los que combaten en la retaguardia: «resistir, el soldado en el frente, el obrero en el taller, la mujer en el hogar, el niño en la

escuela; resistir, porque cada día de resistencia es un día que nos acerca a la anhelada victoria».

Pero la equiparación de resistencia con victoria de Juan Negrín chocó con la convicción de su ministro de Defensa y viejo amigo, Indalecio Prieto, que había dado la guerra por perdida y consideraba urgente negociar un armisticio para hacer la paz mientras todavía quedara tiempo, como dijo a tres dirigentes de la CNT, Galo Díez, Segundo Blanco y Horacio M. Prieto, que fueron a visitarle el 3 de abril para convencerle de que no abandonara el Gobierno. El mismo Horacio Prieto, en un pleno extraordinario de comités regionales de la CNT celebrado a la mañana siguiente de esta entrevista, afirmó, en medio de un impresionante tumulto, que era necesario tratar de salvar lo que todavía fuera posible, abandonar la resistencia a ultranza y permitir que quienes estaban dispuestos a ello negociaran un armisticio. La guerra estaba perdida, escribirá, ya en el exilio, al comité nacional, y «la CNT debía utilizar su influencia para sacar provecho del derrotismo de republicanos y socialistas, conseguir una paz honorable y dejar de hacer conscientemente el juego a los rusos».



Bombardeo sobre Barcelona el 17 de marzo de 1938, fotografiado desde un bombardero italiano.

Un ministro de Defensa que da una guerra por perdida no puede continuar al frente de su ministerio: esto fue lo que pensó Negrín, que el 5 de abril cerró la crisis de gobierno con la salida de Prieto y la asunción por él mismo de la cartera de Defensa. Fue el comienzo de una segunda e irreparable escisión en el Partido Socialista, que se arrastraría durante todo el exilio; pero fue también la constatación de una profunda divergencia entre el presidente de la República, que insistía en la necesidad de buscar por todos los medios una solución, como decía, que pusiera fin al estrago. Y es que la ruptura del frente de Aragón por el ejército franquista, apoyado en la aviación alemana, había sembrado en un amplio sector de dirigentes republicanos y socialistas y de mandos militares la desolación que sigue a las victorias pírricas, aquellas que al consumir las reservas del vencedor portan en sí mismas las causas de una inminente derrota; brillantes operaciones ofensivas, a cargo de lo mejor y más numeroso del ejército propio contra el enemigo que terminan con más daño del vencedor que del vencido, una historia que se venía anunciando desde Segovia, pasando por Brunete y Belchite y que se consumó en Teruel y de la que nunca los estrategas del Estado Mayor Central de la República ni el presidente del Gobierno llegaron a sacar la vieja lección conocida desde los años de la Gran Guerra: que ya no había batallas decisivas como en las guerras napoleónicas.

Pese a los peores augurios, el ejército republicano, mejor dotado para resistir que para vencer, pudo contener la ofensiva, que inmediatamente reanudó Franco dirigiendo el grupo de sus tropas hacia Valencia, solo para comprobar la resistencia de las fortificaciones republicanas: tuvo que detener la marcha a las puertas de Sagunto, a diez kilómetros de su último objetivo. Consolidado de nuevo el frente gracias a la apertura de la frontera francesa, Negrín amplió el gobierno con la reincorporación de los dos grandes sindicatos, la CNT y la UGT. El ejército de la República, pertrechado con nuevo armamento, podría recuperar la iniciativa y pasar de nuevo a la ofensiva. La primera victoria republicana será suficiente y será la victoria total, volvía a decir Negrín. Y mientras creyera lo

mismo el general Vicente Rojo y el Estado Mayor Central, el Partido Comunista era imprescindible para mantener la disciplina en el frente y el orden en la retaguardia. Formar un gobierno prescindiendo de los comunistas para iniciar, sin garantías firmes de apoyo internacional, una negociación que Franco siempre había rechazado, como fue la intención de Azaña desde que los ejércitos rebeldes llegaron al Mediterráneo, era de todo punto imposible sin que antes se produjera la ruptura entre el Partido Comunista y el Estado Mayor.

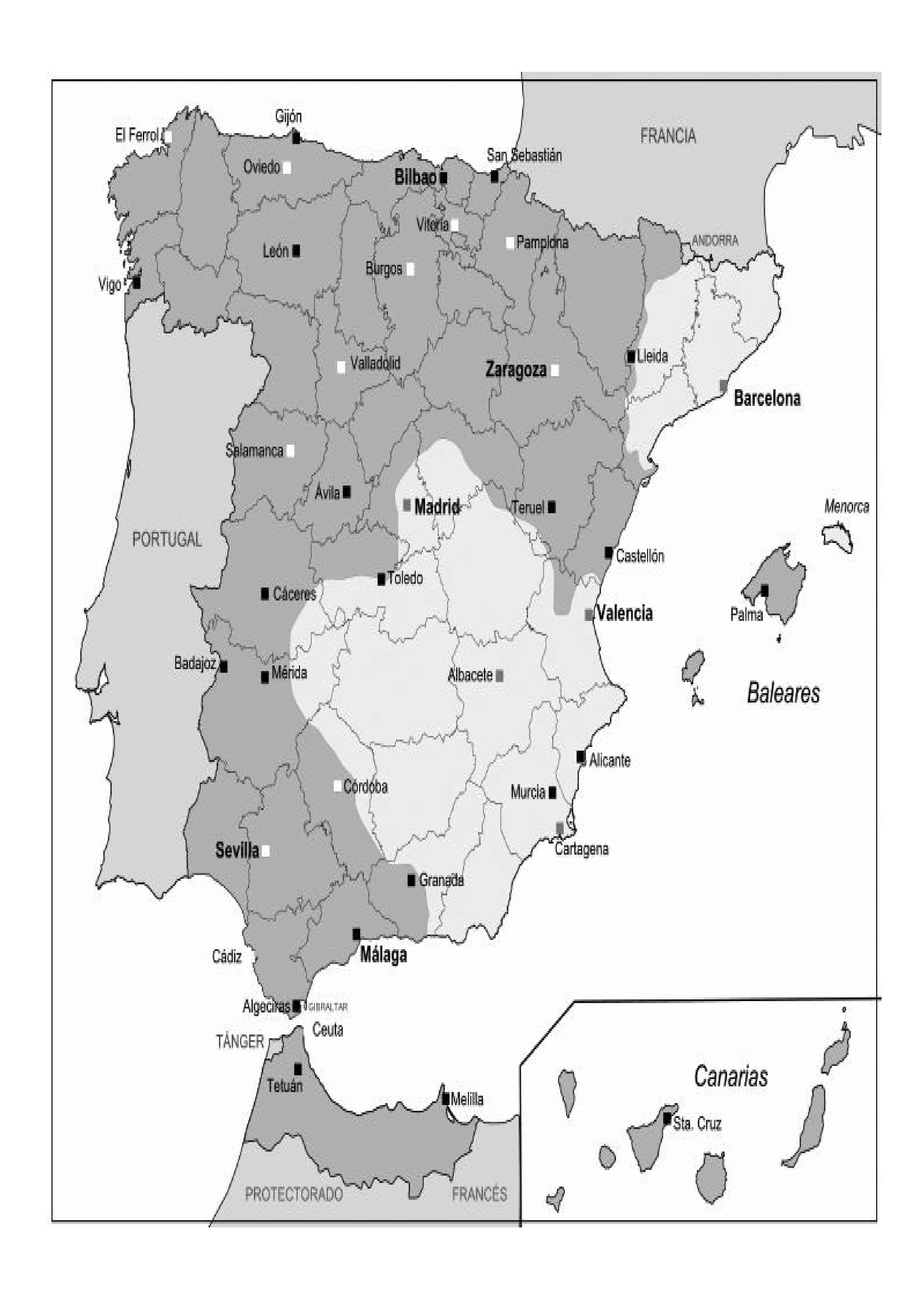
Los Trece Puntos de Negrín

Resignado a mantener su confianza presidencial en Negrín y en su gobierno, todavía volverá Azaña el 23 de mayo, en conversación con Álvarez del Vayo, que había vuelto al Ministerio de Estado en sustitución de Giral, a insistir en la necesidad de tener «una política detrás de la resistencia», señalándole tres posibles direcciones: con los anglo-franceses, para la suspensión de armas y el plebiscito; con Italia, para hacer la paz, sobre bases comerciales e internacionales; con los rebeldes, sobre la unión nacional contra los extranjeros. Álvarez del Vayo acababa de defender ante el Consejo de la Sociedad de Naciones el programa de trece puntos en que el nuevo gobierno de Negrín, bautizado como de Unión Nacional, anunciaba que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de la nación frente a las fuerzas extranjeras que la habían invadido y afirmaba su respeto a la propiedad legítimamente adquirida y la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada. En su punto cuarto, anunciaba el Gobierno que la estructuración jurídica y social de la República sería obra de «la voluntad nacional libremente expresada mediante la celebración de un plebiscito que tendrá efecto tan pronto termine la lucha, realizado con plenitud de garantías, sin restricciones ni limitaciones y asegurando a cuantos en él tomen parte contra toda posible represalia».

Recogía así Negrín la propuesta del plebiscito que Azaña había sugerido un año antes, aunque situándolo en un horizonte sine die —tan pronto termine la lucha — y con el propósito de dar a la «República popular», anunciada en el tercer punto, su definitiva estructura jurídica y social. Por supuesto, una «amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España» ahogaría toda idea de venganza y represalia, de manera que en el plebiscito participarían todos los españoles, incluso aquellos que, «engañados por un grupo reducido de traidores a su país, se levantan contra él con las armas en la mano», como dijo Álvarez del Vayo en su discurso ante el Consejo de la Sociedad de Naciones. Será, pues, esta política de unión nacional, con amnistía y «celebración de un plebiscito nacional para

cuando termine la guerra», la que parezca al ministro de Estado la mejor de las tres direcciones posibles.

Azaña se ofrece a preparar un discurso llamando a la unión contra los extranjeros que acabará pronunciando el 18 de julio de 1938, para recordar desde el Ayuntamiento de Barcelona a todos los españoles el día en que tendrán que «sustituir con la gloria duradera de la paz la gloria siniestra y dolorosa de la guerra». Entonces, unos y otros, vencedores o vencidos, comprobarán una vez más —dijo Azaña— lo que nunca debió ser desconocido: que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Azaña vuelve a negar que la nación pueda construirse sobre un dogma que excluya a todos los que no lo profesan. Ese es el concepto islámico de nación y de Estado, pero «nosotros vemos en la patria una libertad, fundiendo en ella no solo los elementos materiales del territorio, sino todo el patrimonio moral acumulado por los españoles en veinte siglos, que constituye el título grandioso de nuestra civilización en el mundo». Ahora ya no es la República lo que Azaña tiene en mente al evocar la patria; ahora es todo ese patrimonio moral, toda esa civilización, construidas sobre esa «tierra materna» que abriga a tantos muertos y que, con ellos, está en trance de desaparecer.



FRANCIA
El Ferrol
Gijón
Oviedo
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Pamplona
ANDORRA
León
Burgos
Vigo
Lleida
Valladolid
Zaragoza
Barcelona
Salamanca
Ávila
Madrid
Teruel
Menorca
PORTUGAL
Castellón
Toledo
Cáceres
Valencia
Palma
Badajoz
Mérida
Albacete
Baleares
Alicante
Córdoba
Murcia
Cartagena
Sevilla
Granada
Cádiz
Málaga
Algeciras
GIBRALTAR
Ceuta
TÁNGER
Tetuán
Melilla
Canarias
Sta. Cruz
PROTECTORADO
FRANCÉS

Mapa de julio de 1938, tras la Ofensiva de Aragón y previo al inicio de la batalla del Ebro. En oscuro, el territorio dominado por los sublevados, y en claro, la parte conservada por el gobierno republicano.

Por eso, una vez más, pero ahora con emoción redoblada, cuando en esa tarde de julio de 1938 emboca el final del último de sus discursos de guerra, dirigido a preparar los espíritus para la paz, Azaña deja de lado los argumentos políticos para insistir en la profunda conmoción moral y la obligación de pensar en todos los muertos, en «tantos hombres que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a sus hijos: Paz, Piedad, Perdón». Entre sus oyentes, Julián Zugazagoitia, secretario general de Defensa, creía que muchos compatriotas no habrían podido escuchar esas palabras sin un estremecimiento de emoción, y Mariano Ansó, que hasta unos meses antes había sido ministro de Justicia, recuerda que «la emoción producida en el auditorio que los escuchó fue considerable».

El gobierno de Negrín se encontraba, sin embargo, en la imposibilidad de impulsar o aceptar una mediación, precisamente porque gracias a lo que Vicente Rojo consideraba «uno de esos maravillosos fenómenos de fortaleza moral que ha dado nuestro pueblo», los frentes se habían de nuevo estabilizado y el gobierno preparaba otra ofensiva de gran envergadura, esta vez por el sur del Ebro. «¿Cómo concebir un reparto de poderes entre el general Franco y los republicanos?», preguntaba el subsecretario de Estado del nuevo Gobierno, José Quero Morales, al encargado de negocios de Francia en Barcelona, Jacques Fouquet-Duparc. «¿Cree usted que hemos luchado durante dos años para inclinarnos ante un general o ceder nuestros despachos al señor de Madariaga?» No sabe Quero si el general Franco puede aceptar una mediación; lo que sabe es que su gobierno depende de quienes lo han llevado al poder tras la crisis de marzo «con una llamada a las masas y un programa político en el que la anti-mediación era el artículo fundamental». La guerra debía continuar hasta el triunfo, o la derrota, final.

Construyendo el Nuevo Estado

~ Enero de 1938-marzo de 1939 ~

Negrín y su gobierno tenían razón en un punto fundamental: Franco nunca abrigó la más mínima intención de acabar la guerra con una paz de conciliación. Depositario ya del supremo poder militar y político como generalísimo de los Ejércitos y jefe nacional del Movimiento, confirmaba ahora por la ley del 30 de enero de 1938 la doble jefatura del Estado y del gobierno atribuyéndose además «la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general»: todos los poderes, que con este decreto se extienden también hasta el poder constituyente, fundidos en su persona, a la que comenzaba a rendirse culto como enviado de Dios, caudillo y salvador de España. A su alrededor, directamente relacionados con él, pero nada coordinados entre sí, los titulares de los ministerios, con una distribución equilibrada de las distintas fuerzas que serán permanentes suministradores de alto personal político y administrativo: militares, falangistas, católicos y las dos ramas del monarquismo, la alfonsina y la tradicionalista, con el añadido de algún técnico sin adscripción política.

Será este gobierno el que con sus leyes y decretos inicie el lento proceso de institucionalización del Nuevo Estado nacional y católico: el 2 de marzo quedó suspendida por decreto la sustanciación de los pleitos de separación y de divorcio y diez días después el Ministerio de Justicia derogó la ley de matrimonio civil, considerada en la exposición de motivos como una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles. El 5 de abril se derogaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña y comenzaban a llover las órdenes y decretos prohibiendo el uso del catalán en documentos públicos y en la conversación privada. Por Ley de Prensa de 22 de abril corresponderá al Estado la regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas, la designación del personal directivo, la reglamentación de la profesión de periodista, la vigilancia de la actividad de la prensa y la censura mientras no se disponga su supresión. En fin, una orden de 25 de marzo de 1939 establecía que las ocupaciones de fincas realizadas por el Instituto de Reforma Agraria después del 18 de julio de 1936 se consideraban como invasiones y despojos ilegales, quedando por consiguiente a la libre disposición de sus propietarios, como sería también el caso de las ocupadas entre

el 16 de febrero y el 18 de julio de 1936.

Particular empeño pusieron los nuevos poderes en la definición como católico del Estado en construcción. Con la Ley de Enseñanza Media, de 20 de septiembre, el ministro de Educación, y destacado miembro de Acción Española, Pedro Sainz Rodríguez, anunciaba el renacer de España a su auténtico «Ser cultural», a su vocación de misión y de ejemplaridad, a su tensión militante y heroica para lo que se imponía una sólida instrucción religiosa desde «el Catecismo, el Evangelio y la Moral, hasta la Liturgia, la Historia de la Iglesia y una adecuada Apologética». «Nuestra posición», escribió el jefe del servicio de Educación Superior y Media, José Pemartín, «es de intolerancia absoluta para doctrinas y opiniones erróneas, y de compasión y caridad cristiana para las personas que las sustentan»; caridad que no alcanzó a impedir que el atroz desmoche infligido a la Universidad culminara con dos órdenes de 4 de febrero de 1939 separando definitivamente del servicio a decenas de catedráticos, entre otros, Luis Jiménez de Asúa, José Giral, Pablo de Azcárate, Julián Besteiro, Gustavo Pittaluga, Blas Cabrera, Felipe Sánchez Román, José Castillejo... Más tarde, terminada la guerra, consciente el Estado español de que su unidad y grandeza se asentaban en los sillares de la Fe católica y deseoso de mostrar su filial adhesión a la Iglesia además de reparar lo que califica como inicua expoliación que los Gobiernos liberales hicieron de su patrimonio, restablecía por Ley de 9 de noviembre de 1939 los haberes del clero, suprimidos por la República. En fin, y a la espera de un nuevo Concordato que tardará en llegar, el convenio firmado por el Estado español y la Santa Sede el 7 de junio de 1941 restauraba a la religión católica, apostólica y romana como única religión del Estado, con exclusión de cualquier otro culto, y concedía al jefe del Estado el privilegio de presentación de obispos.

Primer Gobierno de Francisco Franco

Presidencia	Francisco Franco.

Vicepresidente y Asuntos Exteriores	Francisco Gómez-Jordana.
Justicia	Tomás Domínguez Arévalo.
Defensa Nacional	Fidel Dávila.
Orden Público	Severiano Martínez Anido.
Interior y Secretario del Gobierno	Ramón Serrano Suñer.
Hacienda	Andrés Amado.
Industria y Comercio	Juan Antonio Suanzes.
Agricultura	Raimundo Fernández Cuesta.
Educación Nacional	Pedro Sainz Rodríguez
Obras Públicas	Alfonso Peña Boeuf
Organización y Acción Sindical	Pedro González Bueno

Tras la muerte de Martínez Anido (26 de diciembre 1938), Orden Público quedó fusionado con Interior bajo la denominación de Ministerio de la Gobernación.

▪

Entre este conjunto de leyes que van configurando durante la guerra y en los años inmediatamente posteriores el Nuevo Estado, adquirió especial relevancia la aprobación, por decreto de 9 de marzo de 1938, del Fuero del Trabajo, formulado por el consejo nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS sobre una ponencia del Gobierno, que establecía los principios del sindicalismo vertical y de la intervención del Estado en la economía según el modelo fascista, y que será considerada más adelante como la primera Ley Fundamental del Nuevo Estado. Como se afirma en el Preámbulo de la Ley, con este Fuero pretendía el Estado, que se define como Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, renovar «la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio» y emprender la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.



Francisco Franco observa los avances de sus hombres en el frente durante la batalla del Ebro.

Así pues, Estado Nacional, tradición católica, Imperio, sindicalismo, totalitarismo, Revolución, espíritu militar, religioso: nada falta y nada sobra en esta mezcolanza de atributos procedentes de la tradición militarista y católica con el nuevo ingrediente fascista, que solo pueden mantenerse en armónica compañía porque todos ellos confluyen en la persona del Jefe del Estado, que es cada vez más objeto de culto como generalísimo, enviado de Dios y caudillo. Un Estado y una doble administración que se ofrecen, además, como promesa a la juventud combatiente de que en sus instituciones encontrará los puestos de trabajo, de honor o de mando a los que tienen derecho estos soldados como españoles y que han conquistado como héroes, palabras con las que se cierra la declaración de este Fuero del Trabajo: revolucionarios, totalitarios, católicos, militares, imperiales, sindicalistas, todos encontrarán en el Estado un puesto de trabajo, de honor o de mando.

Guerra a la mediación en la guerra

En plena construcción de su Nuevo Estado, sus máximas jerarquías no tardaron en reaccionar ante la celebración en París, durante los días 30 de abril a 2 de mayo, de una Conférence privée internationale des comités pour la paix civile et religieuse en Espagne, presidida por Salvador de Madariaga, que instó a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña a emprender urgentemente una acción diplomática entre las dos partes españolas en conflicto y los Gobiernos de Alemania, Italia, Portugal y la Unión Soviética, «para facilitar negociaciones directas entre los dos campos españoles con vistas a una paz de conciliación y en la intención de promover la conclusión de un armisticio y la suspensión de hostilidades». Cuantos desean la mediación, dirá Franco a un periodista extranjero, consciente o inconscientemente sirven a los rojos y a los enemigos encubiertos de España. La guerra es la coronación de un proceso histórico en la lucha de la Patria con la anti-Patria, de la unidad con la secesión, de la moral con el crimen, del espíritu contra el materialismo, y no tiene otra solución que «el triunfo de los principios puros y eternos contra los bastardos españoles».

Ninguna exageración, pues, en titular «¡Guerra a la mediación en la guerra!», un amplio editorial de ABC de Sevilla en el que llamaba a los españoles contra los traidores y exigía la victoria incondicional de Franco en nombre de los Destinos de España, de sus mártires y de sus héroes. Un abismo separaba a quienes habían traicionado la unidad y el destino de la Patria, sus expresos vasallajes a la dictadura soviética, sus crímenes atroces y el desate inenarrable de su ferocidad de delincuentes comunes contra el honor, la vida y la propiedad de los españoles. Un abismo del que no había pacto ni mediación que los salvase jamás; un abismo que está abierto de manera irreparable. A un lado, los victimarios y verdugos; al otro, el espíritu y la gloria invictos de los soldados… Así se expresaba el diario que, desde Sevilla, encarnaba la ideología y representaba los intereses de la facción monárquica en la guerra.

No muy diferente fue el tono y el contenido de las diferentes reacciones de la jerarquía católica a estas iniciativas. El obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay, respondiendo a una encuesta dirigida en octubre de 1938 a diversas personalidades civiles y eclesiásticas por el ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, afirmó que la mediación significaría una transacción y componenda en ideales y principios, y la declaró «absolutamente inadmisible» por cuatro razones: el desconocimiento que los posibles mediadores tendrían del «espíritu de nuestra Cruzada»; porque era imposible conciliar los principios de la Revolución francesa, cuya consecuencia extrema era el marxismo, con la política tradicional; porque transigir con el liberalismo democrático, máscara encubridora del tiránico absolutismo marxista, sería traicionar y escarnecer a los mártires; y porque se frustraría para todo el mundo el ejemplo de salvación que Dios le deparaba por medio de España. Añadió Leopoldo Eijo que tal transacción «entregaría el Poder público a los indignos logreros que no han sabido estar a la altura de esta hora heroica de la Patria, mientras el Caudillo y sus abnegados seguidores quedarían relegados y equiparados a los monstruos rojos». Y terminaba su iracunda respuesta preguntándose: «¿Nueva mediación? ¿Nueva componenda? ¡Jamás! Las madres españolas no consienten que se reserve a sus nietos la trágica suerte que un siglo de suicidas transacciones ha deparado a sus hijos». El jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, fundador del Instituto Católico de Artes e Industrias, manifestó que si lo que se pretendía con la mediación era una transacción, una reconciliación por medio de pactos entre los dos gobiernos, entonces la mediación supondría un reconocimiento de que los hombres de Barcelona eran un gobierno legítimo y no «una pandilla de ladrones y asesinos».

Con lenguaje diferente, el duque de Alba, representante oficioso del Gobierno de Franco ante el de su Majestad Británica, vino a decir lo mismo al Foreign Office cuando informó de que bajo ninguna circunstancia aceptará Franco una intervención de potencias extranjeras con vistas a un armisticio: los masivos asesinatos cometidos por el Gobierno de la República en las primeras etapas de la guerra lo impedían. Nada de extraño, por tanto, que ante las últimas iniciativas tomadas por los comités por la paz civil y religiosa en España, la respuesta fuera siempre la misma: en su visita al cardenal Eugenio Pacelli el 2 de noviembre de 1938, cuando este habló por una última vez de una posible tregua ante la proximidad de la festividad navideña, el embajador Yanguas Messía le replicó que «existe una imposibilidad intrínseca y absoluta de mediación» y le informó

de que «los rojos y sus amigos buscaban complicar al Vaticano en sus maniobras». Y por si no hubiera quedado claro en anteriores manifestaciones, el general Franco condenará, un día de noviembre de 1938, toda idea de mediación, afirmando que «los criminales y sus víctimas no pueden vivir juntos» e indicando que el Gobierno Nacional poseía alrededor de «dos millones de fichas en las que se registran los testimonios suministrados sobre los crímenes marxistas».

La última batalla decisiva

A finales de julio de 1938 tampoco existía ninguna posibilidad de que el plan propuesto por los comités de paz encontrara ninguna acogida en el gobierno de la República. Finalizada la ofensiva sobre Aragón, Franco no continuó su avance hacia Barcelona, demorando así su llegada a la frontera por no dar pie a una intervención francesa, y dirigió sus tropas hacia Valencia, eficazmente defendida por el Grupo de Ejércitos de la Región Central al mando del general Miaja. El general Vicente Rojo concibió entonces otra brillante operación ofensiva destinada a aliviar la presión sobre Levante, y creó de nuevo un Ejército de Maniobra, de 100 000 hombres, formado con las mejores divisiones del Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, en una operación que confió al mando del coronel Juan Modesto, y de los tenientes coroneles Enrique Líster y Manuel Tagüeña, los tres procedentes de las milicias, los tres militantes del Partido Comunista, que apoyaba sin fisuras la política de resistencia de Juan Negrín. Había llegado, pues, la hora de lanzar la última batalla decisiva, iniciada el 25 de julio con el despliegue del Ejército Popular tras la ruptura del frente por el sur del Ebro, estancada luego frente a Gandesa y terminada con una nueva, y esta vez decisiva, derrota de la República, después de tres meses de duros combates, con la Legión Cóndor y la aviación italiana dueñas del aire, siete contraofensivas y más de cien mil bajas.

En plena batalla, Negrín dio un paso adelante en sus conflictivas relaciones con la Generalitat e incautó para el Estado toda la industria de guerra, lo que motivó la dimisión el 11 de agosto de Jaume Ayguader y de Manuel Irujo, de Esquerra y del PNV, respectivamente, sustituidos por Josep Moix, del PSUC, y Tomás Bilbao, de Acción Nacionalista Vasca, una crisis menor en relación con las anteriores, pero no por eso menos significativa: Negrín perdía la presencia en el gobierno de los nacionalistas catalanes y vascos, que ya habían presentado por su cuenta planes de mediación y paz separada ante el Foreign Office y el Quai d’Orsay, identificándose reiteradamente como un «tercer grupo moderado y democrático», distinto de los dos «bandos españoles ahora en lucha», o bien

como «una tercera fuerza en la guerra peninsular […] equidistante de los dos elementos extremistas ahora en guerra». Los nacionalistas catalanes y vascos ofrecían a Reino Unido y Francia, sobre un territorio que estaban bien lejos de controlar, una especie de protectorado que se extendería desde el Cantábrico al Mediterráneo, desde Bilbao a Barcelona, por encima del «cadáver de Navarra», una fantasía que fue recibida por sus destinatarios como un indicio más de las divisiones en el campo republicano.

Mientras la suerte final de la República se jugaba a la carta del Ebro, Chamberlain y Hitler, en presencia de Mussolini y Daladier, acordaban en Munich, a finales de septiembre de 1938, la partición de Checoslovaquia, última cesión franco-británica al Tercer Reich. La escasa atención que en aquella reunión se prestó a la guerra de España, de la que, según dijo el británico al germano, el italiano se sentía tan cansado que acogería positivamente cualquier plan de mediación; el creciente desinterés de la Unión Soviética, una vez comprobada la defección franco-británica, en mantener la baza menor de una resistencia a ultranza de la República española; y, en fin, la definitiva ruptura del frente republicano por las tropas al mando de los generales nacionalistas, convencieron al presidente del Gobierno de que la única opción posible consistía en buscar lo que comenzó a llamar una «paz honrosa», sin especificar en qué exactamente consistía la honra de esa paz. No, desde luego, en «una mediación entre los rebeldes y nosotros», que Negrín descartó rotundamente en su discurso de 14 de octubre de 1938: «Eso sería una mediatización, no una mediación; y España no es un país de capitulaciones»; tampoco en «estabilizar los frentes y tejer una frontera de artificios entre la zona rebelde y la leal. Eso, nunca», insiste Negrín, que denuncia a quien plantea esa hipótesis, sin nombrar a nadie pero indicando al presidente de la República, como «culpable de un delito de máxima traición a la patria».

Rotas todas las defensas republicanas, el 26 de enero de 1939 Barcelona cayó en poder del enemigo sin ofrecer resistencia. «Qué ambiente tan distinto! ¡Qué entusiasmo entonces! ¡Qué fiebre de lucha más ardiente y qué decaimiento ahora!», escribirá Vicente Rojo años después, recordando el Madrid de noviembre de 1936, el de resistir es vencer, y comparándolo con esta Barcelona, que le parece una ciudad muerta, caída sin gloria. En realidad, a medida que la

República perdía territorio, el carácter de la capital catalana se modificaba por la afluencia de población de las ciudades ocupadas por el ejército franquista. De los 300 000 refugiados estimados a finales de 1936 se había pasado a 700 000 tras la batalla de Teruel, y el flujo no se detenía. Los problemas derivados de ese incremento demográfico, como la escasez de alimentos, el paro masivo, las enfermedades, afectaron a la voluntad de resistencia, que se hundió con la llamada a filas de los reemplazos de 1940 y 1941, las quintas del biberón como fueron conocidas, la despedida de las brigadas internacionales o de lo que quedaba de ellas, los sistemáticos y masivos bombardeos de la ciudad y la presencia de tropas en orden de retirada. Reproducir en esas condiciones la voluntad de resistencia con un «No pasarán», a la manera de Madrid en noviembre de 1936, era de todo punto imposible por más que se empeñara el partido de la resistencia a ultranza, el PSUC junto al PCE. Barcelona, en efecto, cayó sin gloria.



El general Yagüe y su ejército, arrodillados en el centro de Barcelona el 29 de enero de 1939, agradecen a Dios la victoria sobre los republicanos en la ciudad condal.

Derrota incondicional

Manuel Azaña, evacuado de Terrassa con el ejército de ocupación pisándole los talones, envió el 28 de enero a Juan Negrín un recado diciéndole que le parecía necesario mantener una entrevista y que viniera acompañado del general Rojo para que asistiera a una parte de la conversación. En el castillo de Perelada, a los once de la noche, el general jefe del Estado Mayor Central explicó a ambos presidentes que ya no podría lograrse nada, ni en Cataluña ni en el centro, que todo estaba irremediablemente perdido, que «el Estado en Cataluña se había hundido verticalmente y que en el terreno militar estábamos hundidos». Azaña le instó a repetir estas afirmaciones para dar ocasión a que Negrín respondiera y, como este permaneciera callado, le requirió, en el terreno oficial y constitucional, para que reuniese al consejo de Ministros y tomara un acuerdo sobre el dilema al que Rojo había llegado: «liquidar el conflicto o continuar la guerra». Negrín pidió a Rojo que le acompañara el domingo, 29, a la reunión del Consejo, y le sugirió que evitara comentarios radicales para que los ministros no derivaran de aquel informe una impresión deprimente. Rojo, sin embargo, en un encuentro previo al Consejo, extendió ante los ministros un mapa manifestándoles «que la guerra estaba perdida y que no veían solución de ninguna especie». Negrín solo pudo confirmar a Azaña el lunes 30, por la tarde, esta vez en presencia del presidente de las Cortes, Martínez Barrio, que no pensaba plantear en consejo de ministros lo hablado el día 28 porque, si lo hiciera, acabaría por difundirse y era de temer que se produjeran desórdenes e incidentes.

Antes de emprender el camino al exilio, Azaña todavía envió sendos mensajes a Jules Henry, nuevo embajador de Francia, y a Ralph Skrine Stevenson, encargado de negocios británico, expresándoles su deseo de hablar urgentemente con ellos. Cuando Henry se acercó en la tarde del 4 de febrero a la última residencia de Azaña, en La Vajol, a tres kilómetros de la frontera francesa, el presidente le expresó su vehemente deseo de que Francia e Inglaterra, a las que podía asociarse Estados Unidos, hicieran todo lo que estuviera en su poder para

poner fin a la guerra. «Hagan algo», le repitió, una tregua inmediata con objeto de arreglar las cuestiones humanitarias, seguida de la formación de un comité con representantes del Gobierno de la República que entraría en contacto con representantes del Gobierno de Franco, a fin de discutir las cuestiones políticas, las condiciones de paz propiamente dicha. En su entrevista con Stevenson fue más explícito: Francia y Gran Bretaña debían hacer todo lo posible para presentar al gobierno de Franco un plan de paz en los siguientes términos: tregua inmediata y fin de las hostilidades, designación por los dos campos de representantes que negociaran las condiciones materiales de la toma de posesión de todo el territorio por el gobierno de Franco, y evacuación de personas y familias no toleradas por el nuevo régimen. El gobierno de la República se rendiría sin ninguna condición política y el gobierno de Franco aceptaría la rendición y ofrecería una garantía de trato humanitario a sus enemigos.



FRANCIA
Gijón
El Ferrol
Oviedo
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Pamplona
ANDORRA
León
Burgos
Vigo
Valladolid
Zaragoza
Lleida
Barcelona
Salamanca
Ávila
Madrid
Teruel
Menorca
PORTUGAL
Castellón
Toledo
Cáceres
Valencia
Palma
Badajoz
Mérida
Albacete
Baleares
Alicante
Córdoba
Murcia
Cartagena
Sevilla
Granada
Cádiz
Málaga
Algeciras
GIBRALTAR
Ceuta
TÁNGER
Tetuán
Melilla
Canarias
Sta. Cruz
PROTECTORADO
FRANCÉS

Mapa de las posiciones ocupadas por cada bando en febrero de 1939.

La suerte que esperaba a estas dos últimas llamadas del presidente de la República habría de ser idéntica a la que el presidente del Gobierno anunció el 1 de febrero, en la reunión de los diputados a Cortes celebrada en el castillo de Figueras, tras recibir el día anterior del general Rojo un plan «para terminar la guerra de manera digna» que consistía en «suspender las hostilidades bruscamente y por sorpresa para el enemigo, para nuestra población civil y para nuestro propio ejército […], levantar bandera blanca, dejar las armas y permanecer en el frente sin huir», y a la misma hora, «prevenir por radio al enemigo que avance urgentemente con sus columnas motorizadas». Negrín resumió sus trece fines de guerra en tres condiciones o «clases de garantías», que se vio obligado a presentar porque en el panorama internacional «casi se nos indicaba que si no cedíamos se nos asfixiaría»: primera, la independencia de nuestro país y la libertad contra toda clase de influencias extranjeras; segunda, que fuera el pueblo español quien determine libremente y sin presiones extranjeras su régimen político; y tercera, que, liquidada la guerra, habrá de cesar toda persecución y toda represalia, y esto en nombre de una labor patriótica de reconciliación, base necesaria para la reconstrucción de nuestro país devastado. Negrín hizo saber que las fuerzas de la República abandonarían las armas si se cumplían esas tres condiciones, garantizadas por los gobiernos de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña, porque cualquier propuesta que viniera de él sería «rechazada por los nacionales».

En lugar de atender los llamamientos de las autoridades republicanas, Francia y Reino Unido se apresuraron a reconocer al gobierno de Burgos el 26 de febrero, liquidando así cualquier posibilidad de actuar como mediadores de un acuerdo de paz humanitaria, o de rendición con condiciones, que asegurara a los vencidos el fin de las represalias. Al día siguiente, Manuel Azaña, exiliado en Francia desde el día 5, dimitió de la presidencia de la República argumentando que el reconocimiento de Franco le privaba de «la representación jurídica internacional necesaria para hacerse oír por los gobiernos extranjeros». El general Vicente Rojo, por su parte, se negó a cumplir las órdenes del presidente del Gobierno y

decidió permanecer en Francia para atender a los exiliados, mientras en Los Llanos, el 16 de febrero, altos mandos del Ejército Popular (entre otros, los generales Miaja y Matallana y el coronel Casado) dan la guerra por perdida e instan a Negrín a negociar con Franco su final.

El resultado fue, para la República, el peor de todos los posibles: divididas y enfrentadas las fuerzas que durante treinta y dos meses habían combatido en su defensa, el coronel Casado formó el 5 de marzo un Consejo Nacional de Defensa presidido por el general Miaja e integrado por republicanos, socialistas y anarquistas, unidos en la hora de la derrota contra el gobierno de Negrín. El socialista Julián Besteiro rompió un largo y penoso silencio para negar la legitimidad al gobierno y otorgársela al poder militar, al que proclamó único «Poder legítimo de la República». La resistencia al golpe de Estado en Madrid por algunas unidades comunistas, mientras los máximos dirigentes del partido emprendían el vuelo hacia el exilio, fue aplastada con el resultado de dos mil muertos y el fusilamiento del coronel Barceló. En Cartagena, la flota al mando del almirante Buiza se sublevó el mismo día que Casado y se hizo a la mar rumbo a Bizerta, para entregarse a las autoridades francesas.



Ciudadanos de Madrid buscan algo que rescatar entre las ruinas de sus hogares tras la Ocupación de Madrid el 28 de marzo de 1939.

Es el fin; muy diferente sin embargo al que habían abrigado quienes ocuparon desde principios de marzo ese «poder legítimo» invocado por Besteiro. Como Mola en julio de 1936, Franco tampoco estaba dispuesto en marzo de 1939 a revivir un abrazo de Vergara entre dos ejércitos contendientes: se negó a ofrecer a Casado ninguna de las garantías imploradas por sus emisarios, y contestó a británicos y franceses que el «espíritu de generosidad» de los vencedores constituía la mejor garantía para los vencidos. Los vencedores avanzaban por los últimos territorios republicanos como un ejército de ocupación, como rezaban los membretes impresos en sus oficios, tanto en Barcelona como luego en Valencia y finalmente en Madrid, ciudad hambrienta después de sufrir tres años de escasez, desmoralizada, en la que era frecuente ver a niños escuálidos desmayándose mientras hacían cola para conseguir pan. La suya había sido una guerra de conquista para destruir un Estado republicano y construir desde las ruinas y la devastación provocada por la guerra una dictadura militar, católica y fascista: ningún tipo de acuerdo, de paz negociada, ni siquiera de rendición acordada sobre una mesa y firmada en un papel, era posible.

Y así, consumada la victoria, el terror administrado por los consejos de guerra y azuzado sin piedad por las llamadas de obispos y sacerdotes a depurar y exterminar a la Anti-España, proyectaron sobre los vencidos la paz fúnebre de la que Azaña había hablado a Giral, construida sobre el aplastamiento de la República y el exilio, la cárcel o el fusilamiento de todos los que habían tomado las armas, o prestado apoyo político, para su defensa.

Epílogo. Un estado de guerra continuado

La guerra, en realidad, no había terminado, pues el fin de las hostilidades como derrota incondicional de la República supuso, para quienes habían combatido en su defensa y no pudieron atravesar la frontera, su detención en campos de concentración, por los que pasaron un mínimo de 400 000 prisioneros en tres años, mientras cerca de medio millón traspasaban las fronteras, o lo habían hecho desde semanas antes, camino del exilio. De los campos, decenas de miles de socialistas, anarquistas, republicanos, comunistas o simples soldados de reemplazo, salieron hacia las cárceles o nuevos campos de concentración, como el de Albatera, donde se hacinaban hasta 30 000 reclusos, enfrentados a miserables condiciones de vida, a la tortura, el hambre y las epidemias que asolaban a la población penitenciaria. Con los prisioneros en edad de cumplir el servicio militar se constituyeron las colonias penitenciarias militarizadas, en las que se comenzó a poner en práctica la redención de penas de inspiración católica: un día de prisión por tres de trabajo. El ritmo del trabajo, los castigos y la mala comida provocaban entre los penados graves enfermedades que causaban no pocas muertes. Sobre decenas de miles de españoles recayeron sentencias de muerte dictadas por consejos de guerra, sin importar que no hubieran cometido delito alguno, como fue el caso del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, o de los ministros de la República, el socialista Julián Zugazagoitia y el anarquista Joan Peiró, capturados en Francia y entregados a la policía española por la Gestapo.



Soldados republicanos acampados en Boulou, Francia, en febrero de 1939, en su camino al exilio.

A esta actividad represora, que se mantuvo hasta que el signo de la guerra mundial cambió a favor de los aliados, se añadió la de los tribunales de Responsabilidades Políticas, creados por la Ley de 9 de febrero de 1939 e integrados por miembros del Ejército, Falange y magistratura, y la de los instructores encargados de investigar la conducta de los funcionarios según lo establecido por la Ley de 10 de febrero de 1939, que fijaba normas para la depuración de funcionarios públicos. Tribunales e instructores abrieron expediente a decenas de miles de ciudadanos —artistas, profesores, maestros, funcionarios— que podían ser sancionados con la adscripción de residencia obligada, la pérdida de su cargo o empleo y con fuertes multas y el embargo e incautación de sus bienes: la Universidad sufrió lo que el médico e historiador Pedro Laín Entralgo, entonces joven falangista, llamaría años después «un atroz desmoche». Todos estos procesos de represión y depuración se acompañaban además de la convocatoria de testigos para que denunciaran a los procesados, lo que extendió por toda la sociedad española un clima de delación y de sospecha.

Las cifras del horror

Los estudios sobre la represión franquista realizados hasta ahora elevan a alrededor de 150 000 los asesinados extrajudicialmente y los ejecutados por sentencias de consejos de guerra durante la guerra y la posguerra. De ellos, cerca de 56 700 corresponden a las provincias andaluzas, que fueron las más castigadas. Asturias, con 7160 y Zaragoza, con 6679, no les van a la zaga, lo mismo que Badajoz, donde la represión alcanzó extremos de crueldad, con asesinatos masivos en su plaza de toros, de los que se hizo eco la prensa de todo el mundo. Entre dos y cuatro mil víctimas sufrieron La Rioja, Navarra, Toledo, Valencia y Madrid, donde los ejecutados solo en el cementerio del Este

ascendieron, entre 1939 y 1944, a 2663 personas. En el resto de las provincias no se alcanza la cifra de dos mil, aunque en Albacete ascendió a 1600 y en Barcelona a 1716, sumando en el conjunto de Cataluña 3346 los ejecutados después de su ocupación.

Estas cifras, todavía incompletas, no comprenden las víctimas del terror que a partir de noviembre de 1936 se desencadenó desde el aire en acciones que mal pueden llamarse de guerra porque su objetivo, en Madrid, como en Gernika o Barcelona, era la población civil; ni entran aquí tampoco los muertos en campos y cárceles y a causa del hambre y enfermedades, que pudieron elevarse a más de 100 000. Si a ellas se añaden los asesinados y ejecutados en zona republicana, que ascendieron a unos 50 000, los muertos en combate, que fueron alrededor de 200 000, y los que murieron a causa del hambre y de las enfermedades directamente relacionadas con la guerra, el número total de víctimas alcanzaría la cifra de 600 000, que coincide con los resultados de varios estudios demográficos sobre las pérdidas de población que pueden atribuirse a la guerra.



Fosa común en Estepar, provincia de Burgos, con 26 víctimas.

▪

Un año después de terminada la guerra, la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre Represión contra la masonería y el comunismo comenzó a aplicarse a todos aquellos que sembraran «ideas disolventes» contra la Religión, la Patria, las instituciones fundamentales del Estado o contra la armonía social. La Ley de 29 de marzo de 1941 para la Seguridad del Estado tipificaba como delitos susceptibles de ser juzgados por tribunales militares la circulación de noticias y rumores perjudiciales a la seguridad del Estado y ultrajes a la Nación, las asociaciones y propagandas ilegales, la suspensión de servicios públicos y las huelgas. En fin, la Ley de 2 de marzo de 1943 equiparaba al delito de rebelión militar las transgresiones de orden jurídico que tuvieran «una manifiesta repercusión en la vida pública» como la divulgación de noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público, los plantes, huelgas y sabotajes, las uniones de productores y demás actos análogos «cuando persigan un fin político y causen graves trastornos de orden público». El 15 de noviembre de este mismo año se creaba por ley en cada región militar un juzgado especial encargado de la aplicación de la Ley contra la masonería y el comunismo que suponía el establecimiento de medidas con idénticos efectos que la ley marcial.

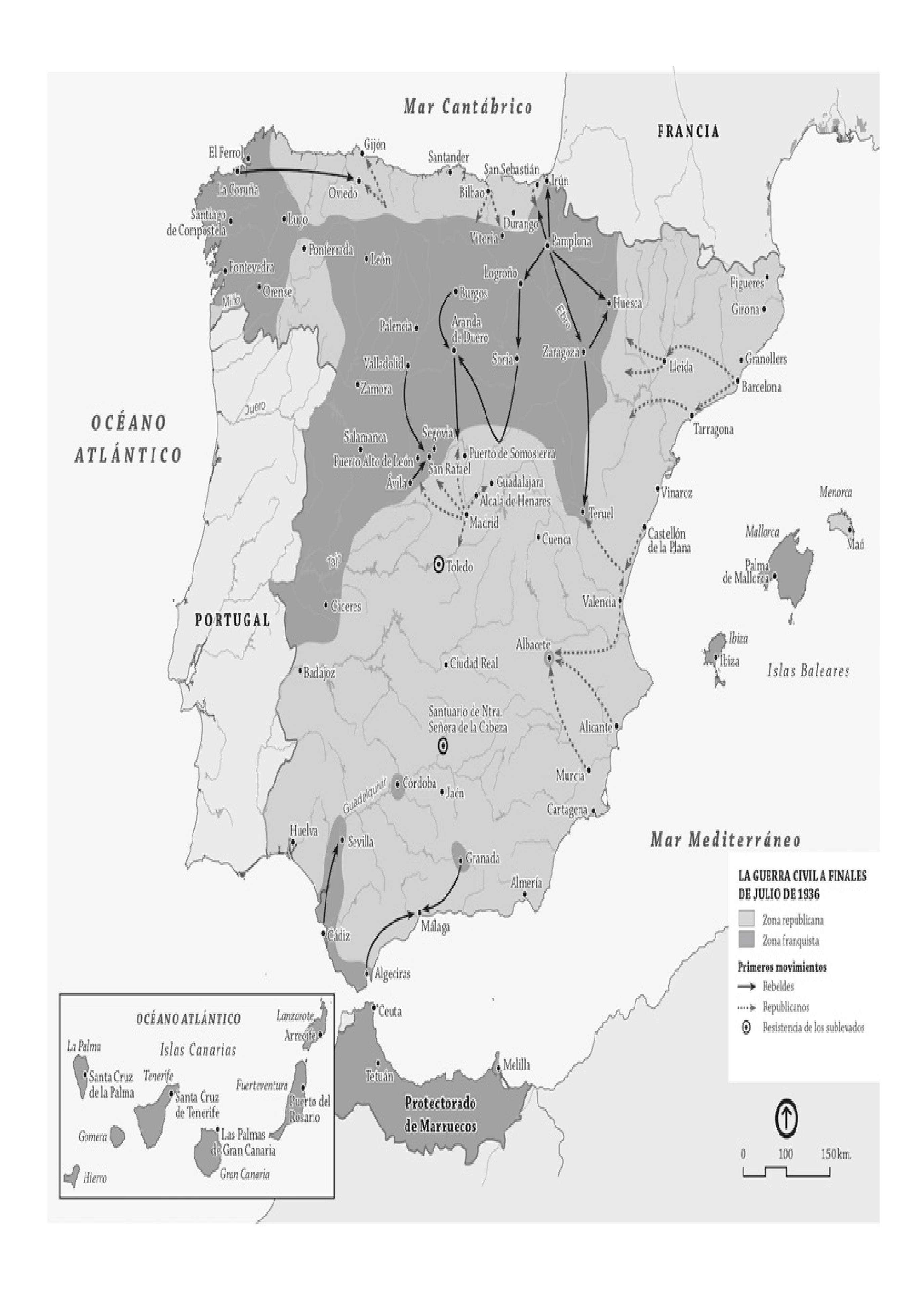

FRANCO
FRANCO
FRANCO
FRANCO
FRANCO
FRANCO

Entrada de Franco en San Sebastián en enero de 1939.

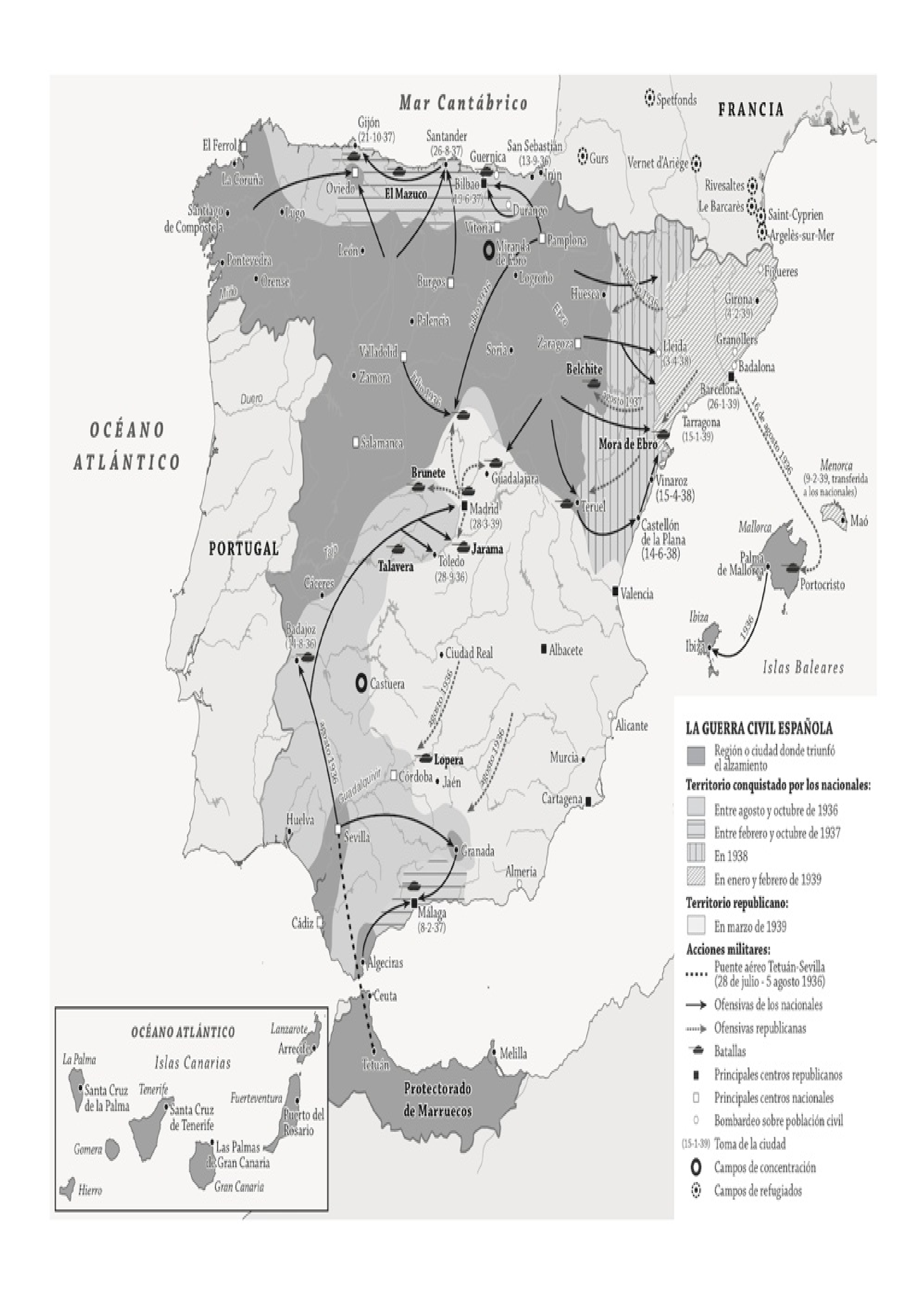
Pocas semanas después de la derrota de la República, de la entrada en Madrid del Ejército de Ocupación y del comienzo de la implacable represión, los vencedores organizaron el 19 de mayo un singular homenaje a su Caudillo, con la imposición por el general Varela de la Cruz Laureada de San Fernando, seguida de un monumental desfile, llamado por vez primera «de la Victoria», de seis horas de duración. Presidido por el general Franco, con el general alemán Wolfram von Richthofen a su derecha, desde una tribuna levantada en el paseo de la Castellana, rebautizada como avenida del Generalísimo, pasaron por la plaza de Cibeles más de 120 000 hombres de todos los ejércitos y de la Marina Nacional, además de la Legión Cóndor, de la División Littorio y de Flechas de variados colores, Negras, Azules y Verdes, mientras volaban millares de palomas y la Aviación dibujaba en el cielo el grito de «¡Viva Franco!». Al día siguiente, flanqueado por un vistoso cortejo de jinetes de la Guardia Mora, el general Franco subirá desde la Castellana por Alcalá para recorrer la Gran Vía —rebautizada como avenida de José Antonio— tras la ceremonia de ofrenda de su espada vencedora al Santísimo Cristo de Lepanto, traído desde Barcelona y recibida con emoción por el cardenal primado, Isidro Gomá y Tomás en la basílica de Santa Bárbara.

Franco entró bajo palio en el templo y asistió a la ceremonia vistiendo uniforme de capitán general sobre la camisa azul de Falange. En el altar mayor, a la derecha, se situaron los miembros del Consejo Nacional del Movimiento y de la Junta Política de Falange; a la izquierda, los generales, y de frente, sobre el presbiterio, hasta diecinueve obispos y numerosos sacerdotes, en sendas representaciones de los tres pilares sobre los que habría de construirse el Nuevo Estado: las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y el Movimiento Nacional. Al final de la ceremonia, tras el canto del Te Deum, la oración por «nuestro Caudillo Francisco Franco» y la ofrenda de la espada, el cardenal abrazó al general ratificando así la fusión de la potestad militar y eclesiástica ante la mirada del partido único.

Apéndices



LA GUERRA CIVIL A FINALES DE JULIO DE 1936
Zona republicana
Zona franquista
Primeros movimientos
Rebeldes
Republicanos
Resistencia de los sublevados
Mar Cantábrico
FRANCIA
OCÉANO ATLÁNTICO
PORTUGAL
Mar Mediterráneo
Islas Baleares
Menorca
Maó
Mallorca
Palma de Mallorca
Ibiza
Ibiza
El Ferrol
La Coruña
Santiago de Compostela
Lugo
Pontevedra
Orense
Miño
Gijón
Oviedo
Santander
Bilbao
San Sebastián
Irún
Durango
Vitoria
Pamplona
Ponferrada
León
Logroño
Burgos
Palencia
Aranda de Duero
Soria
Ebro
Huesca
Zaragoza
Figueres
Girona
Lleida
Granollers
Barcelona
Tarragona
Valladolid
Zamora
Duero
Salamanca
Segovia
Puerto Alto de León
San Rafael
Ávila
Puerto de Somosierra
Guadalajara
Alcalá de Henares
Madrid
Toledo
Tajo
Cuenca
Teruel
Vinaroz
Castellón de la Plana
Valencia
Cáceres
Badajoz
Ciudad Real
Albacete
Santuario de Ntra. Señora de la Cabeza
Alicante
Murcia
Cartagena
Córdoba
Jaén
Guadalquivir
Huelva
Sevilla
Granada
Almería
Cádiz
Málaga
Algeciras
Ceuta
Tetuán
Melilla
Protectorado de Marruecos
OCÉANO ATLÁNTICO
Islas Canarias
La Palma
Santa Cruz de la Palma
Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Gomera
Hierro
Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria
Lanzarote
Arrecife
Fuerteventura
Puerto del Rosario
0
100
150 km.



Mar Cantábrico
FRANCIA
Spetfonds
Gurs
Vernet d'Ariège
Rivesaltes
Le Barcarès
Saint-Cyprien
Argelès-sur-Mer
Figueres
Girona (4-2-39)
Granollers
Badalona
Barcelona (26-1-39)
16 de agosto 1936
Tarragona (15-1-39)
Menorca (9-2-39, transferida a los nacionales)
Maó
Mallorca
Palma de Mallorca
Portocristo
Ibiza
1936
Islas Baleares
El Ferrol
La Coruña
Santiago de Compostela
Lugo
Gijón (21-10-37)
Oviedo
El Mazuco
Santander (26-8-37)
Guernica
Bilbao (19-6-37)
Durango
San Sebastián (13-9-36)
Irún
Vitoria
Miranda de Ebro
Pamplona
Logroño
León
Burgos
Pontevedra
Orense
Miño
Palencia
julio 1936
Huesca
Ebro
Valladolid
Soria
Zaragoza
Lleida (3-4-38)
Belchite
agosto 1937
Zamora
Duero
Salamanca
Mora de Ebro
OCÉANO ATLÁNTICO
Brunete
Guadalajara
Madrid (28-3-39)
Vinaroz (15-4-38)
Teruel
Castellón de la Plana (14-6-38)
PORTUGAL
Tajo
Talavera
Toledo (28-9-36)
Jarama
Cáceres
Valencia
Badajoz (14-8-36)
Ciudad Real
Albacete
Castuera
agosto 1936
Alicante
Lopera
Murcia
Córdoba
Jaén
Guadalquivir
Cartagena
Huelva
Sevilla
Granada
Almería
Cádiz
Málaga (8-2-37)
Algeciras
Ceuta
Tetuán
Melilla
Protectorado de Marruecos
OCÉANO ATLÁNTICO
Islas Canarias
Lanzarote
Arrecife
La Palma
Santa Cruz de la Palma
Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Fuerteventura
Puerto del Rosario
Gomera
Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria
Hierro
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Región o ciudad donde triunfó el alzamiento
Territorio conquistado por los nacionales:
Entre agosto y octubre de 1936
Entre febrero y octubre de 1937
En 1938
En enero y febrero de 1939
Territorio republicano:
En marzo de 1939
Acciones militares:
Puente aéreo Tetuán-Sevilla (28 de julio - 5 agosto 1936)
Ofensivas de los nacionales
Ofensivas republicanas
Batallas
Principales centros republicanos
Principales centros nacionales
Bombardeo sobre población civil
(15-1-39) Toma de la ciudad
Campos de concentración
Campos de refugiados

Conceptos clave

Personaje

Batalla

Concepto

Alcázar de Toledo

El asedio del Alcázar de Toledo, sede de la Academia Militar de Infantería, por parte de tropas republicanas entre el 21 de julio y el 27 de septiembre de 1936, se convirtió en uno de los mitos del bando sublevado. El Alcázar encerraba un tesoro de legitimidad simbólica, pues era una academia militar en la que los sitiados resistían en medio de las ruinas, con los muros medio destruidos, refugiados en los sótanos. Artífice de su liberación, Franco recibió un enorme capital político: aquel triunfo se convertirá en prenda y símbolo de la salvación de España que, como una mártir, resucitaba del sepulcro al que la habían conducido sus enemigos.

Manuel Azaña (1880-1940)

Presidente del gobierno de España (1931-1933, 1936) y presidente de la Segunda República española (1936-1939). Tras el golpe de Estado, se vio sobrepasado por la entrega de armas a las milicias, la caída del gobierno de Giral y la constitución del gabinete de Largo Caballero. Fue uno de los políticos y oradores

más importantes en la política española. En un discurso de 1938 manifestó ya su deseo de reconciliación de los españoles («Paz, Piedad, Perdón»). Murió en la localidad francesa de Montauban en 1940.

Brigadas Internacionales

La idea de organizar una fuerza de voluntarios internacional para ayudar a la República española partió del secretario del Partido Comunista francés, Maurice Thorez, y contó con el respaldo discreto de la Unión Soviética. Los primeros miembros de esta fuerza llegaron en octubre de 1936. Los brigadistas participaron en muchas batallas cruciales de la guerra antes de abandonar el territorio español en noviembre de 1938.

CNT

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de ideología anarquista, contaba con unos 500 000 afiliados y una enorme capacidad de movilización al inicio de la guerra. En el momento del alzamiento, muchos de sus militantes ya anhelaban el advenimiento inminente de una nueva sociedad libertaria.

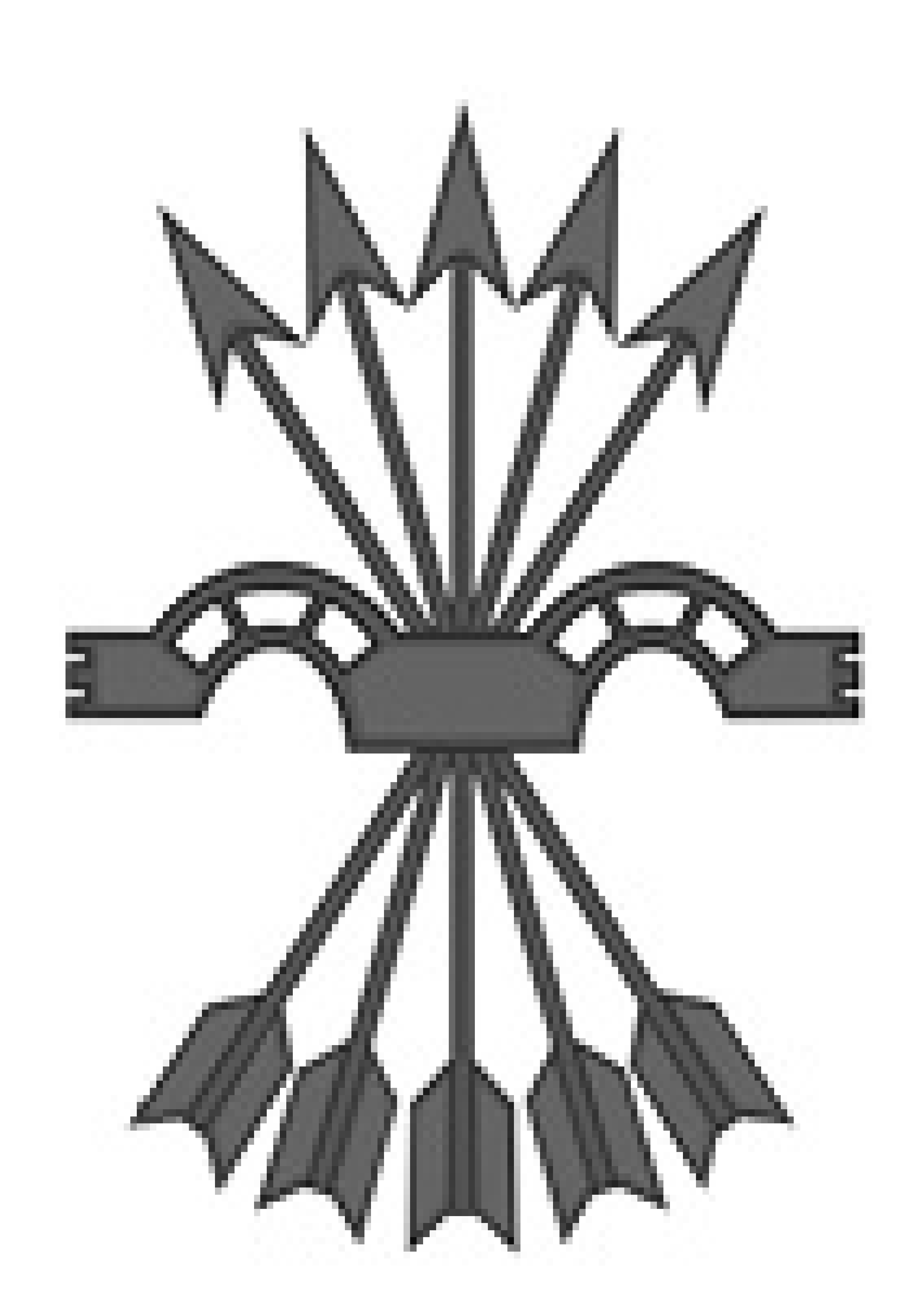


Cruz de San Andrés

Símbolo carlista que, junto al yugo y las flechas falangistas, se extendió en la zona rebelde.

Ebro

De julio a noviembre de 1938 se desarrolló una de las batallas más sangrientas, además de la más larga, de la guerra, la batalla del Ebro. Las fuerzas republicanas habían visto su territorio partido en dos tras la Ofensiva de Aragón, y el gobierno de Negrín y el ejército, al mando del general Rojo, decidieron tomar la iniciativa y frenar el avance de las tropas franquistas hacia Valencia. El denominado Ejército del Ebro logró sorprender a los sublevados y penetrar 40 kilómetros en su territorio; sin embargo, el contraataque franquista, apoyado con aviación, forzó la retirada de las tropas republicanas al otro lado del río. Se abría así la puerta a la derrota definitiva del bando republicano, que había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales.



Falange Española Tradicionalista y de las JONS

Tras la muerte del líder y fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), Francisco Franco promovió la unificación en abril de 1937 de las dispares fuerzas partidarias del golpe militar. Así nació FET de las JONS, que reunía, bajo el mando de Franco, a falangistas y carlistas de la Comunión Tradicionalista, y se convirtió en el partido único del bando sublevado. En 1945 pasó a llamarse oficialmente Movimiento Nacional.

Francisco Franco (1892-1975)

El 18 de julio de 1936 Francisco Franco Bahamonde da inicio al golpe de Estado al abandonar Las Palmas en el Dragon Rapide, un bimotor civil, con dirección a Marruecos. El crédito político que consigue tras el levantamiento del asedio al Alcázar de Toledo a finales de septiembre y la muerte del general Sanjurjo lo sitúan pronto como figura preeminente de la Junta de Defensa Nacional. El 29 de septiembre es declarado Generalísimo y en abril de 1937 jefe supremo de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Tras la guerra, será el dictador de España hasta su muerte, en 1975.

Frente Norte

La batalla por el control del Norte (Vizcaya, Santander y Asturias), vital por sus recursos mineros y sus zonas industriales, en manos republicanas, se prolongó desde el 31 de marzo al 21 de octubre de 1937, cuando las tropas sublevadas tomaron el territorio.



General Mola (1887-1937)

Cuando se produjo el alzamiento militar que había planificado minuciosamente, Emilio Mola se consideraba el jefe absoluto de la conjura y asumió el liderazgo de las fuerzas golpistas en el norte. Sin embargo, con el paso de las semanas, fue perdiendo preeminencia a favor de Francisco Franco. Falleció el 3 de junio de 1937 en un accidente de avión cerca de Burgos.

General Sanjurjo (1872-1936)

Líder de los militares conjurados, la muerte de José Sanjurjo en accidente de avión el 20 de julio de 1936 le impediría encabezar la rebelión.

Gernika

El devastador bombardeo de Gernika a manos de la Legión Cóndor el 26 de abril de 1937 conmovió a la opinión pública por las numerosas víctimas civiles que fallecieron en el ataque —se perpetró en día de mercado—. Especialmente, tras la presentación de la obra de Pablo Picasso Guernica en la Exposición Universal de París de 1937, el bombardeo se convirtió en símbolo tanto del sufrimiento de la población civil en tiempo de guerra como de la resistencia de la República española.

Jarama

La batalla del Jarama tuvo lugar en febrero de 1937 y se inscribe en las intentonas realizadas ese año por cercenar las defensas en torno a Madrid.

Legión Cóndor

Fuerza de intervención mayoritariamente aérea que el III Reich envió en ayuda de las tropas del general Franco. En territorio español, la Legión Cóndor pondría a prueba equipos y nuevas técnicas bélicas, y se convirtió en una de las unidades más conocidas. Fue la responsable del bombardeo de Gernika.

Juan Negrín (1892-1956)

Presidente del Gobierno de la Segunda República (1937-1945, ya en el exilio), su gestión estuvo marcada por una política de resistencia bélica y por los intentos infructuosos de conseguir una paz justa. El 1 de mayo de 1938 publicó los Trece Puntos, que pretendían establecer las bases para llegar a un acuerdo de paz con el bando sublevado. Murió en Francia en 1956.

Quinta columna

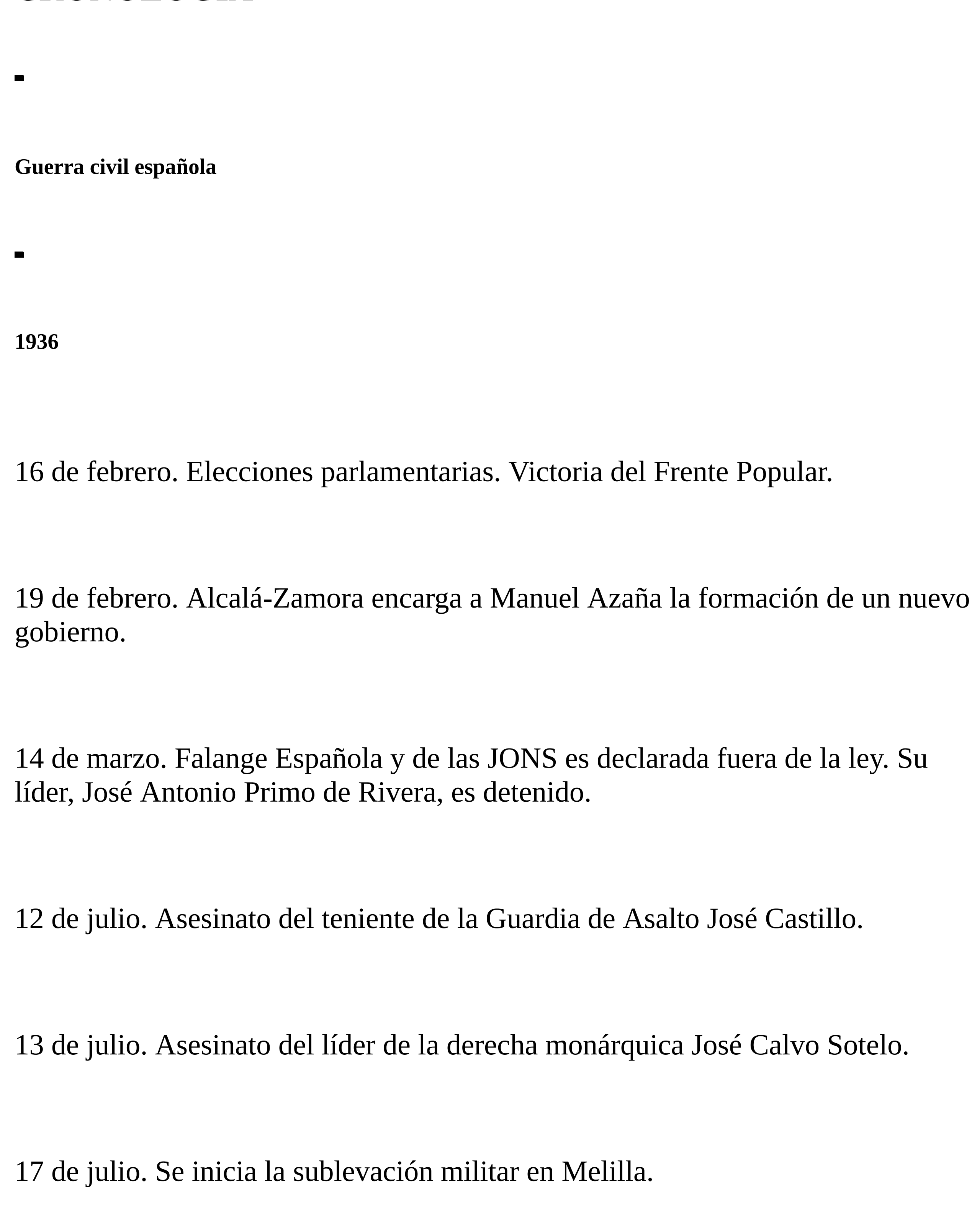
Expresión atribuida al general Mola con la que hacía referencia en 1936 a los que, dentro de la capital, trabajaban clandestinamente en pro de la victoria de los sublevados. Aunque el nombre surgió durante la Ofensiva a Madrid, se extendió rápidamente a todas las zonas del conflicto.

Requeté

Organización paramilitar carlista, cuyos miembros eran conocidos también como boinas rojas. Con amplia presencia en el norte de España, especialmente en Navarra, los requetés se pusieron a disposición de los militares conspiradores ya en la primavera de 1936.

Teruel

La batalla de Teruel (15 de diciembre de 1937-20 de febrero de 1938), una de las más crueles de la guerra, se inició como una maniobra de distracción por parte del Ejército republicano para frustrar los planes franquistas de ataque a Madrid tras la victoria de los sublevados en el Frente Norte. Si bien los republicanos se hicieron con la ciudad en un primer momento, el contraataque se saldó a favor de los nacionales. Las tropas leales obtuvieron, pues, una victoria pírrica en Teruel, que les pasaría factura en las semanas posteriores.



CRONOLOGÍA

▪

Guerra civil española

▪

1936

16 de febrero. Elecciones parlamentarias. Victoria del Frente Popular.

19 de febrero. Alcalá-Zamora encarga a Manuel Azaña la formación de un nuevo gobierno.

14 de marzo. Falange Española y de las JONS es declarada fuera de la ley. Su líder, José Antonio Primo de Rivera, es detenido.

12 de julio. Asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo.

13 de julio. Asesinato del líder de la derecha monárquica José Calvo Sotelo.

17 de julio. Se inicia la sublevación militar en Melilla.

18 de julio. El golpe se extiende por varias ciudades españolas.

20 de julio. Muere el general Sanjurjo al estrellarse el avión en el que viajaba.

24 de julio. Se constituye en Burgos la Junta de Defensa Nacional.

8 de agosto. Francia declara el embargo de armas a la República.

22 de agosto. Saca en la cárcel Modelo de Madrid.

27 de septiembre. El Alcázar de Toledo es liberado de su asedio.

1 de octubre. Franco es investido Jefe Máximo de los sublevados.

4 de noviembre. El Ejército de África llega a Alcorcón, Leganés y Getafe.

15-23 de noviembre. Batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid.

20 de noviembre. José Antonio Primo de Rivera es fusilado en la cárcel de Alicante.

1937

8 de febrero. Entrada de las tropas franquistas y de los legionarios italianos en Málaga.

31 de marzo. Despliegue de la ofensiva de los nacionales en el norte peninsular.

19 de abril. Decreto del Nuevo Estado. Unificación de falangistas y requetés: se crea la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

26 de abril. Bombardeo de Gernika.

3 de mayo. Se inician los enfrentamientos entre miembros del POUM y anarquistas, por una parte, y comunistas y fuerzas del Gobierno por otra.

1 de julio. Isidro Gomá escribe la Carta colectiva del episcopado español a sus hermanos de todo el mundo.

4 de agosto. Se aprueban los estatutos de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

26 de agosto. Rendición en Santoña de los batallones vascos ante las tropas italianas.

21 de octubre. Cae definitivamente el frente Norte.

30 de octubre. El gobierno de Negrín se traslada a Barcelona.

15 de diciembre. Ofensiva de las tropas republicanas en Teruel.

1938

30 de enero. Se confirma por ley la doble jefatura, del Estado y del gobierno, de Franco.

20 de febrero. Los nacionales recuperan Teruel.

2 de marzo. El Nuevo Estado nacional y católico suspende la sustanciación de los pleitos de separación y divorcio.

9 de marzo. El gobierno de Burgos decreta el Fuero del Trabajo.

5 de abril. Indalecio Prieto sale del gobierno. Negrín asume la cartera de Defensa. El Nuevo Estado deroga el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

15 de abril. Final de la Ofensiva de Aragón: las tropas de Franco llegan al Mediterráneo.

22 de abril. Ley de Prensa promulgada por el gobierno de Burgos.

30 de abril. Inicio en París de la Conférence privée internationale des comités pour la paix civile et religieuse en Espagne. Se hacen públicos los Trece Puntos de Negrín.

18 de julio. Azaña pronuncia su conocido discurso desde Barcelona en el que pide al pueblo que se prepare para conseguir «Paz, Piedad, Perdón».

25 de julio. Ofensiva de las tropas franquistas para tomar Valencia.

20 de septiembre. El gobierno de Burgos promulga la Ley de Enseñanza media.

16 de noviembre. Finaliza la batalla del Ebro con el repliegue republicano.

1939

26 de enero. Las tropas franquistas entran en Barcelona.

28 de enero. Manuel Azaña se entrevista en Perelada con Negrín y Rojo y este último les transmite su opinión de que todo está perdido.

9 de febrero. Creación de los Tribunales de Responsabilidades Políticas por parte del gobierno de Burgos.

26 de febrero. Francia y Reino Unido reconocen el gobierno de Burgos.

27 de febrero. Manuel Azaña, exiliado en Francia, dimite como presidente de la República.

28 de marzo. Las tropas franquistas entran en Madrid.

1 de abril. Francisco Franco emite un comunicado anunciando el final de la guerra.

▪

Mundo

▪

1936

6 de enero. Se renueva el acuerdo comercial franco-ruso.

10 de febrero. En Alemania, la Gestapo se coloca por encima de la ley.

7 de marzo. Hitler ordena ocupar las zonas desmilitarizadas de la Renania.

12 de mayo. En Italia se promulga una ley electoral que limita el derecho al voto.

5 de junio. En Francia se forma el gabinete del Frente Popular, presidido por Léon Blum.

26 de agosto. Egipto obtiene la independencia.

9 de septiembre. Se celebra en Londres la primera reunión del comité de No Intervención en la guerra civil española.

25 de octubre. Creación del Eje Roma-Berlín.

1937

2 de febrero. Acuerdo italo-británico sobre el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo.

4 de marzo. Franklin D. Roosevelt jura como presidente de Estados Unidos para un segundo mandato.

1 de mayo. Ley de neutralidad estadounidense en la guerra civil española.

28 de mayo. En Reino Unido, Neville Chamberlain se convierte en primer ministro.

21 de junio. En Francia, el gobierno del Frente Popular renuncia en bloque.

28 de julio. Japón ataca China por sorpresa.

5 de noviembre. En Alemania, Hitler plantea como objetivo la conquista del espacio vital por la fuerza.

1938

20 de febrero. Dimite Anthony Eden como ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

12 de marzo. Alemania proclama la anexión de Austria.

28 de abril. Francia e Inglaterra buscan una solución consensuada al problema de los Sudetes.

20 de mayo. El partido nazi alcanza la mayoría en las elecciones en los Sudetes.

30 de mayo. Tropas alemanas preparan la ocupación de Checoslovaquia.

29 de septiembre. Conferencia de Múnich.

9 de noviembre. En Alemania se produce la Noche de los Cristales Rotos.

1939

2 de febrero. La Unión Soviética y Hungría rompen relaciones diplomáticas.

1 de septiembre. Alemania invade Polonia.

Sobre el autor

Santos Julià

Es catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante y conferenciante en varias universidades europeas y americanas, y es articulista de El País desde 1982. Gran conocedor de la figura de Manuel Azaña, es el editor de las Obras Completas del célebre político y recibió el Premio Nacional de Historia en el 2005 gracias a la publicación de su celebrada Historias de las dos Españas.